

ESTADOS UNIDOS EN GUERRA
Del miedo a la libertad vigilada

INTER PRESS SERVICE

ESTADOS UNIDOS EN GUERRA
Del miedo a la libertad vigilada

Kintto Lucas
Compilador

Colección Entre dos siglos



Abya-Yala
2001

ESTADOS UNIDOS EN GUERRA
Del miedo a la libertad vigilada

© Inter Press Service

Compilador: Kintto Lucas

Primera edición
en español
2001

Ediciones Abya-Yala
Av. 12 de octubre 14-30 y Wilson
Casilla: 17-12-719
Telfs.: 2 562633/2 506-267/2 506247
Fax: 2 506255/2506267
E-mail: editorial@abyayala.org
www.abayala.org
Quito-Ecuador

ISBN: 9978-04-743-3

Diseño de portada: Raúl Yépez

Autoedición: Martha Vinueza

Impresión: Producciones digitales Abya-Yala
Quito-Ecuador

Impreso en Quito-Ecuador, noviembre del 2001

ÍNDICE

Jaque a las torres

Terror real como espectáculo mayor, <i>Mario Osava</i>	9
La amenaza de una nube tóxica, <i>Katherine Stapp</i>	11
Alerta en centrales nucleares, <i>Danielle Knight</i>	13
Atentados avivan debate sobre energía, <i>Danielle Knight</i>	16
Alarma ante armas biológicas, <i>Thalif Deen</i>	18
FMI y Banco Mundial cancelaron su asamblea, <i>Jim Lobe</i>	20
Guerra contra el terrorismo se pierde en la ONU, <i>Thalif Deen</i>	23
Tratado antiterrorista, lejos de la ratificación, <i>Thalif Deen</i>	25
Estados Unidos estrecha controles en Internet, <i>Diana Cariboni</i>	27
Estados Unidos presiona a Canadá para modificar política migratoria, <i>Mark Bourrie</i>	30
Lucha antiterrorista desconocerá libertades, <i>Gustavo Capdevila</i>	33
Jaque a las libertades civiles, <i>Yojana Sharma</i>	35
Libertades, una baja de guerra, <i>Samanta Sen</i>	38
Clamor contra la guerra, <i>Satya Sivaraman</i>	40
Encuestas internacionales contradicen a Bush, <i>Abid Aslam</i>	42
Alianza civil contra excesos del antiterrorismo, <i>Jim Lobe</i>	44
Pacifistas reman contra corriente, <i>Yojana Sharma</i>	46
La televisión patriota, <i>Jim Lobe</i>	49
Neonazis señalados por atentados con ántrax, <i>Ranjit Devraj</i>	52
Ley de patentes agrava amenaza de antrax. <i>Ranjit Devraj</i>	55
Triste vigilia de árabes y asiáticos, <i>Akhilesh Upadhyay</i>	57
Un país rigurosamente vigilado, <i>Jim Lobe</i>	59

Dolor afgano

Otra guerra amenaza a un país devastado, <i>Nadeem Yaqub</i>	65
Afganos se defienden con armas estadounidenses, <i>Ranjit Devraj</i>	68
Para Gran Bretaña todo afgano es posible terrorista, <i>Samanta Sen</i>	70
La amapola financia al Talibán, <i>Ranjit Devraj</i>	72
Talibán conserva apoyo en la población saudita, <i>N. Janardhan</i>	74
ONU se prepara para asistir a millones de personas, <i>Thalif Deen</i>	77
No basta con mermelada y mantequilla, <i>Samanta Sen</i>	79
Choque de intereses complica sucesión del Talibán, <i>Ranjit Devraj</i>	81
Civiles con valor estratégico, <i>Nadeem Yaqub</i>	83
ONU acusada de usar alimentos como arma, <i>Thalif Deen</i>	86

Designios de Estados Unidos en Afganistán son una incógnita, <i>Jim Lobe</i>	88
Disputa por el control de Afganistán, <i>Praful Bidwai</i>	91
Discrepancias sobre el futuro de Afganistán, <i>Mushahid Hussain</i>	94
Se cierra la principal puerta de salida de los refugiados, <i>Muddassir Rizvi</i>	96
El gobierno de Pakistán jaqueado, <i>Muddassir Rizvi</i>	99
El mundo musulmán contra ampliación de guerra, <i>N. Janardhan</i>	101
En Pakistán ex-mujaidines se unen contra Talibán, <i>Nadeem Yaqub</i>	103
ONU alerta sobre posible matanzas de civiles, <i>Gustavo Capdevila</i>	106
Entre la guerra y el hambre, <i>Nadeem Iqbal</i>	108
El paso del tiempo conspira contra Estados Unidos, <i>Jim Lobe</i>	110
Pacifistas entre dos fuegos, <i>Nadeem Iqbal</i>	112
Encrucijada latinoamericana	
Atentados propagan ondas de tensión, <i>Diego Cevallos</i>	119
Tragedia latinoamericana en Nueva York, <i>Kintto Lucas</i>	121
El TIAR renace en los escombros de las torres gemelas, <i>Gustavo González</i>	125
Todos contra los árabes, <i>Mario Osava</i>	128
América Central se adhiere a la guerra, <i>Néfer Muñoz</i>	130
Otra víctima de los ataques, <i>Néfer Muñoz</i>	133
Heridas en la aviación, <i>Yojana Sharma</i>	135
Integración postergada por tensión mundial, <i>Patricia Grogg</i>	138
Ruego peruano, <i>Abraham Lama</i>	140
Inseguridad favorece fuga de capitales, <i>Andrés Cañizález</i>	142
Ataque a Afganistán atrasa reactivación, <i>Gustavo González</i>	144
Fragmentado apoyo latinoamericano, <i>Diego Cevallos</i>	147
En Argentina víctimas de atentados piden evitar venganza, <i>Marcela Valente</i>	150
Fidel Castro exige el cese del terrorismo desde Estados Unidos, <i>Dalia Acosta</i> ...	153
Fidel Castro adhiere a todos los acuerdos antiterroristas, <i>Patricia Grogg</i>	155
Remesas de emigrantes cubanos amenazadas, <i>Dalia Acosta</i>	157
En Ecuador caen remesas de emigrantes tras los atentados, <i>Kintto Lucas</i>	161
Crisis internacional amenaza solidez económica, <i>Gustavo González</i>	163
Triple frontera de Brasil, Argentina y Paraguay es un barril de pólvora, <i>Mario Osava</i>	165
Máscaras de Bin Laden y Bush para animar fiestas mexicana, <i>Diego Cevallos</i> ...	168
Emigrantes de México en la guerra y el gobierno en la diplomacia, <i>Diego Cevallos</i>	170
Atentados hieren relación bilateral entre Estados Unidos y México, <i>Diego Cevallos</i>	172
Crece cerco en torno de emigración a Estados Unidos, <i>Diego Cevallos</i>	174
Atentados encienden la luz roja en el turismo, <i>Diego Cevallos</i>	176
Bioterrorismo enciende alarmas en América Latina, <i>Diego Cevallos</i>	179
INTER PRESS SERVICE.....	183

JAQUE A LAS TORRES

Terror real como espectáculo mayor

MARIO OSAVA

Corresponsal de IPS en Río de Janeiro.

Los trágicos atentados terroristas en Estados Unidos fortalecen la teoría sobre la creciente confusión o fusión entre la vida y el mundo del espectáculo, entre realidad y ficción.

La sensación generalizada en el mundo fue que la televisión mostraba el martes 11 de septiembre la continuación o variante de películas producidas por Hollywood, en las que Nueva York y Washington aparecen como blancos frecuentes del terror procedente de fuera del país. El filme “Día de la Independencia” es un ejemplo reciente.

Las grandes tragedias reales se convirtieron en espectáculos imbatibles en cantidad de audiencia, desde la guerra del Golfo, en 1990, cuando los bombardeos estadounidenses fueron exhibidos en vivo por la televisión globalizada.

La muerte en 1997 de la princesa británica Diana de Gales, fue otro caso de esta nueva serie. Los aviones penetrando los edificios del World Trade Center, de Nueva York, constituyen escenas cuya superación dramática es difícilmente imaginable, por su aterradora realidad. Algo similar sucedió con las imágenes del Pentágono (Departamento de Defensa) ardiendo.

Es de suponer que los terroristas, capaces de actuar con la precisión operativa demostrada, también previeron potenciar el impacto de sus acciones a través de los medios de comunicación.

El primer ataque atrajo los reporteros y ocurrió con la antelación necesaria para que el segundo fuese plenamente registrado por los camarógrafos, desde todos los ángulos, e incluso transmitido en vivo. El hecho concentró todos los elementos atractivos de una película, agrandados por la sorpresa absoluta y por tratarse de un drama real.

El resto lo hizo la magnitud sin precedentes del acto terrorista, con miles de muertos de distintas nacionalidades y la suspensión de vuelos en Estados Unidos, estableciendo vínculos concretos con la población de numerosos países.

Las fuertes emociones provocadas suman desde el temor al riesgo de fuente desconocida, la sensación de inseguridad generalizada, el suspenso an-

te la posibilidad de un nuevo golpe, la expectativa de represalias estadounidenses y el drama de las personas desaparecidas.

La atención cautiva perdurará por semanas. Durante muchos días se mantendrá la esperanza de encontrar sobrevivientes bajo los escombros y el trabajo de identificar cuerpos, mientras los países de origen de las víctimas estarán pendientes de noticias sobre los inmigrantes y turistas que estaban en Nueva York.

También se sumarán las informaciones y especulaciones sobre los posibles autores del múltiple atentado y las consecuencias políticas, militares y económicas.

Los comentarios emitidos tras el impacto inicial de los terribles actos terroristas abundaron en calificarlos de divisor de la historia, en afirmar que “el mundo ya no será el mismo”. La idea del “día después”, que es cinematográfica, nunca estuvo tan presente.

Los noticieros de la televisión acapararon la atención en Estados Unidos y en el resto del mundo, ampliando el dominio de ese medio de comunicación masiva en el mundo del entretenimiento, restando espectadores al cine, el teatro, los deportes y otras actividades durante varios días.

Curiosamente, es Estados Unidos el país que más cultivó la “industria del miedo” en la ficción, con películas y novelas que podrían inspirar atentados tan sorprendentes como los ocurridos el 11 de septiembre, una fecha que ya asombraba el mundo como el día del golpe militar que inauguró en 1973 la dictadura del general Augusto Pinochet en Chile.

Las más variadas formas de actuación terrorista amenazando las instituciones y ciudades del país fueron llevadas a las pantallas y libros estadounidenses, además de maremotos, invasiones de gorilas gigantes, como King Kong, y de extraterrestres, el ataque de virus mortales y otras catástrofes.

Los secuestros de aviones, incluso uno que transportaba el presidente de Estados Unidos, son numerosos en las películas de Hollywood. También son frecuentes las acciones de terroristas extranjeros, especialmente, palestinos y árabes en general, que amenazan ese país, como en “Nueva York sitiada”.

En muchos filmes las coincidencias con la realidad causan pavor. El último caso es el de una serie de la cadena de televisión Fox, “Pistoleros solitarios” (Lone Gunmen), que se exhibe desde agosto y cuya trama es un plan terrorista para estrellar un avión contra las torres gemelas del World Trade Center. También la literatura estadounidense explota el terror que acecha el país. Tom Clancy en “Deuda de honor” (Debt of honour), publicado en 1994, imagina un conflicto entre Estados Unidos y Japón. La historia cuenta el trasfondo del ataque de un piloto de aviones comerciales japonés, que perdió un hi-

jo en la guerra y llena de explosivos un Boeing para lanzarse como un “kamikaze” contra el Capitolio, sede del Congreso en Washington. Además, Estados Unidos ofreció en el plano de la ficción *The Truman Show*, una película en que los productores de una serie de televisión presentaban la vida y el comportamiento de un hombre común, desde su nacimiento. La transformación de la vida en espectáculo, como una película, es tratada por el crítico de cultura Neal Grabler en su libro “Vida, la película” (*Life, the movie*).

La amenaza de una nube tóxica

KATHERINE STAPP

Corresponsal de IPS en Nueva York.

Partículas de un polvo brillante se suspendían en el aire y pequeños focos ígneos persistían entre los escombros del World Trade Center de Nueva York, al tiempo que miles de personas regresan a su trabajo en la zona sur de Manhattan.

Mientras los equipos de rescate continúan con el trabajoso proceso de retirar más de un millón de toneladas de escombros, las autoridades intentan protegerlos a ellos y a otros trabajadores de la mezcla de vapores, cenizas, polvo y humo que permanecen en el aire.

Grandes áreas del distrito financiero fueron abiertas una semana después de los atentados, aunque tropas de la Guardia Nacional y oficiales de policía continúan formando barricadas para acordonar las manzanas en las inmediaciones de la plaza del World Trade Center, cuyas torres gemelas colapsaron tras el ataque terrorista del día 11.

Inicialmente se temió que una nube tóxica de fibras de amianto se hubiera liberado cuando los edificios se derrumbaron, pero las muestras de aire y polvo tomadas desde el 13 de septiembre por la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) y la Administración de Salud y Seguridad Laboral del Departamento revelaron que no hay amianto en el aire, o que los niveles son relativamente bajos, entre 2,1 y 3,3 por ciento, en comparación con un umbral de uno por ciento.

Una flota de enormes camiones aspiradores fue desplegada para absorber gran parte del polvo. Algunos oficinistas que regresaban al distrito finan-

ciero llevaban máscaras faciales de papel, que de todos modos son ineficaces para bloquear las fibras de amianto ultrafinas.

Los médicos recalcan que el daño permanente a la salud causado por las fibras de amianto, que antes se utilizaba como material aislante ante el fuego, pero ahora está prohibido, generalmente resulta de una exposición prolongada.

Los otros compuestos químicos liberados durante la explosión inicial y el derrumbe que le siguió son más difíciles de evaluar.

Benceno, formaldehído, hidrocarburos policlorinados e incontables agentes carcinógenos, todavía están presentes en el lugar, al igual que gases venenosos que contienen monóxido de carbono y cianuro.

La fusión de vidrio, concreto, componentes electrónicos, plásticos e incontables materiales más de las torres creó también nuevos y potencialmente mortales compuestos.

“Estamos ante una situación única que puede producir algunas combinaciones de productos químicos también únicas”, advirtió Cynthia Wilson, directora ejecutiva de Chemical Injury Information Network, un grupo de activistas sin fines de lucro.

“El cloro, por ejemplo, se unirá a cualquier otro elemento presente para crear compuestos desconocidos, con efectos generalmente devastadores”, agregó.

Sólo el combustible de los aviones libera unos 100.000 derivados químicos cuando se quema y no se conoce con certeza los efectos que muchos de ellos pueden tener sobre la salud humana, señaló Wilson.

Según los especialistas, las consecuencias a largo plazo para las miles de personas que estuvieron expuestas a estas sustancias son imposibles de calcular.

“Si alguien está enfermo ahora, probablemente se recupere. Si todavía está enfermo en tres meses, entonces debe preocuparse”, dijo Wilson.

Los problemas derivados de la exposición a sustancias químicas y polvos tóxicos van desde irritación respiratoria temporal a daño neurológico permanente y tipos de cáncer como la leucemia.

Una vez disipado el humo en el lugar, “los riesgos más serios ahora serán el contacto dérmico”, dijo Peter Bellin, profesor de salud ambiental y laboral de la California State University.

El Comité de Nueva York para la Salud y Seguridad Laboral (NYCOSH, por sus siglas en inglés), una coalición de 200 sindicatos locales y especialistas en salud y seguridad individuales, dio instrucciones a miles de sus miem-

bros acerca de cómo protegerse mientras las sustancias van desapareciendo del ambiente, lo que podría llevar un año o más.

“Es obvio que el humo tiene ingredientes tóxicos”, dijo Jonathan Bennett, director de asuntos públicos de la coalición.

“Tenemos gases tóxicos y partículas de materiales (como el hollín o las fibras de amianto). Las máscaras que filtran las partículas no protegen a las personas contra el monóxido de carbono, por ejemplo”.

Las recomendaciones en la octava página del comunicado de NYCOSH incluyen el uso adecuado de gafas, cremas protectoras de la piel y máscaras anti-gas no descartables con cambio frecuente de filtros. También se urge a los trabajadores a cambiarse de ropa antes de regresar a casa.

Los escombros de las torres gemelas son retirados en camiones desde el sector sur de Manhattan hacia el vertedero Fresh Kills, en Queens, que no se considera un lugar adecuado para el almacenamiento permanente. Aún no se sabe dónde terminarán los escombros, pero es probable que sean dispersados en todo el país.

Mientras tanto, el vertedero de basura de Queens parece un gigantesco laboratorio criminal, con especialistas forenses del FBI (Buró Federal de Investigaciones) examinando los escombros en busca de pistas y pruebas. (FIN-/Tierramérica/ks/en/01)

Alerta en centrales nucleares

DANIELLE KNIGHT

Corresponsal de IPS en Washington. Experta en temas ambientales.

Autoridades de Estados Unidos reconocieron que las centrales nucleares no están diseñadas para soportar atentados como los que causaron la muerte a miles de personas en Nueva York y Washington el 11 de septiembre.

La estatal Comisión Nuclear Regulatoria (NRC) no sabe qué ocurriría si secuestradores suicidas emplearan aviones comerciales como proyectiles contra una planta nuclear, como se utilizaron para derribar las torres gemelas de Nueva York y demoler parcialmente el edificio del Pentágono en Washington.

“No se ha analizado la capacidad que tienen los depósitos de combustible empobrecido para soportar el impacto de un avión comercial de grandes dimensiones”, reconoció una declaración de la NRC.

En ese sentido, el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes recomendó la aprobación de un proyecto de ley que exige a la NRC reforzar la seguridad en 103 reactores nucleares.

La iniciativa legislativa obligaría a la NRC a preparar planes de emergencia para las centrales nucleares.

De convertirse en ley, el proyecto le otorgaría a la NRC 60 días para proponer reglas luego de consultar con el Departamento de Defensa, la CIA (Agencia Central de Inteligencia), la Agencia Nacional de Seguridad y otros organismos públicos.

Otra medida propuesta por el Comité de Energía y Comercio aumenta la multa para el delito de sabotaje contra centrales nucleares de 10.000 a un millón de dólares, y la máxima condena de 10 años de prisión a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Las centrales están diseñadas para soportar huracanes, tornados y terremotos, pero no contra bombardeos o atentados como los del 11 de septiembre, informaron funcionarios.

El interés por la seguridad en las centrales nucleares no se limita a Estados Unidos. El servicio de guardacostas de Japón, por ejemplo, ordenó patrullar las aguas próximas a los 51 reactores nucleares, las 24 horas del día para prevenir posibles atentados terroristas.

“No hacíamos esto antes de los atentados del 11 de septiembre”, declaró la Agencia de Seguridad Marítima japonesa.

El presidente de la NRC, Richard Meserve, dijo que el organismo mejorará la seguridad en las plantas nucleares también mediante la revisión de normas y procedimientos en las mismas instalaciones.

“Ya era hora”, dijo Paul Gunter, director del proyecto de vigilancia de reactores de la organización Servicio de Información y Recursos Nucleares, con sede en Washington.

“Importantes debilidades” se hallaron en 27 de las 57 plantas evaluadas en febrero de 1999, señaló David Orrick, especialista de seguridad de la NRC.

“Un ataque habría puesto a esos reactores nucleares en peligro, con la posibilidad de daño al núcleo y de emisión radiológica, o sea, un Chernobyl estadounidense”, advirtió Orrick, refiriéndose al peor desastre nuclear de la historia, ocurrido en la planta de Chernobyl, Ucrania, en 1986.

Sin embargo, varios grupos de interés público temen que la NRC ceda a la presión de la industria nuclear para mantener los costos de seguridad bajos y que no adopte las medidas necesarias para enfrentar las posibles amenazas terroristas.

“Es un buen paso inicial, pero queremos ver modificaciones sustanciales”, dijo Chris Sherry, director de investigación del Consejo de Comunicación de Energía Segura, una red de ONG.

Una de esas modificaciones sería redefinir los tipos de ataques contra los cuales están obligadas a protegerse las plantas nucleares, que no incluyen atentados aéreos ni de vehículos con explosivos, indicó Sherry.

En opinión de David Lochbaum, ingeniero de seguridad nuclear integrante de la Unión de Científicos Preocupados, las autoridades también deben mejorar la seguridad en las plantas que ya no funcionan.

“Aunque la planta nuclear esté clausurada, sigue siendo un peligro”, dijo Lochbaum a IPS.

Diecisiete plantas nucleares en actividad y cientos de centrales inactivas en Estados Unidos mantienen barriles de desechos radiactivos, indicó Bob Schaeffer, de la Alianza por la Responsabilidad Nuclear, una red que abarca a 34 organizaciones por la paz y el ambiente.

“Nuestra inquietud es que estos sitios son objetivos evidentes y podrían causar una emisión importante de radiactividad”, advirtió.

Paul Leventhal, presidente del grupo de desarme Instituto de Control Nuclear, pidió a las autoridades que destinen efectivos de la Guardia Nacional para disuadir posibles atentados contra los reactores nucleares y que “desplieguen rápidamente” armas antiaéreas para neutralizar ataques desde el aire.

“No tenemos el tiempo para permitirle a la NRC y otros organismos federales un prolongado proceso de revisión burocrática”, afirmó Leventhal.

Edwin Lyman, físico y director científico del Instituto de Control Nuclear, advirtió que la posibilidad de que se emita radiación al ambiente tras un atentado contra una planta nuclear es “muy real”.

Una emisión de radiación podría provocar decenas de miles de muertes por cáncer en las proximidades de la planta afectada, agregó Lyman.

La NRC debe recomendarle a las personas que vivan cerca de una central nuclear que se abastezcan de tabletas de yodo potásico, dice Lochbaum. El fármaco impide que la glándula tiroides absorba la radiación.

Atentados avivan debate sobre energía

DANIELLE KNIGHT

Corresponsal de IPS en Washington. Experta en temas ambientales.

La industria del petróleo de Estados Unidos y los defensores del ambiente se remiten a los ataques del 11 de septiembre contra Nueva York y Washington para promover sus respectivas estrategias energéticas como asunto esencial para la seguridad nacional. Kenneth Dickerson, ex vicepresidente de la compañía Atlantic Richfield (ARCO), avivó el fuego del debate sobre la política energética de Estados Unidos al afirmar que los atentados demostraron una vez más la necesidad de incrementar las reservas domésticas de energía.

La dependencia estadounidense de las importaciones de petróleo, “significa que más de 10.000 buques tanque entran a los puertos de Estados Unidos cada año, trayendo crudo extranjero a las refinerías” del país, observó Dickerson. Es necesario, entonces, construir más centrales de generación alimentadas a carbón, dijo, haciéndose eco de la estrategia energética propuesta por el presidente George W. Bush, que incluye además la creación de nuevas plantas nucleares y el incremento de la exploración en busca de petróleo y gas, en lugares como el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico, en Alaska.

Por su parte, los ecologistas arguyen que, además de los posibles daños a ecosistemas prístinos, el plan energético de Bush podría crear nuevos objetivos para el terrorismo.

Peter Asmus, del American Hazard Control Group, una organización especializada en ambiente y energía con sede en Washington, señaló que la estrategia de Bush “provocará riesgos innecesarios en materia de seguridad”.

Asmus admitió que no habría explosión atómica si un avión comercial se estrellara contra alguno de los 103 reactores nucleares que operan en Estados Unidos. Pero el golpe directo contra una central nuclear podría difundir grandes nubes radioactivas de carácter letal, advirtió.

En cambio, las fuentes de energía renovable, como la eólica y la solar, están dispersas en la naturaleza y pueden agregarse al sistema de generación sin convertirse en objetivos del terrorismo.

La seguridad nacional se beneficiaría con la creación de redes de microenergía limpia, afirman algunos ambientalistas, mientras otros se expresan optimistas de que los atentados motiven a los legisladores a buscar la reduc-

ción de la creciente demanda de energía de Estados Unidos, mediante la promoción de la conservación y de la eficiencia.

Byron Kennard, director ejecutivo del Centro para la Pequeña Empresa y el Ambiente, dijo que resulta “un imperativo absoluto” contar con una política energética basada en la conservación, la eficiencia y las fuentes renovables.

“Los días de la prodigalidad del gasto de energía de Estados Unidos han terminado”, advirtió. “Ahora debemos conservar el combustible para las necesidades de la seguridad nacional y reducir nuestra dependencia del petróleo foráneo”.

Kennard afirmó que la clave para el ahorro de energía consiste en acabar con el derroche en que incurren los 23 millones de pequeñas empresas de Estados Unidos, que participan en más de la mitad del uso comercial de energía y “malgastan entre la mitad y un tercio” de la cantidad que demandan.

A su juicio, el mundo empresarial puede contribuir al descenso de la demanda de energía con sólo mejorar su iluminación, sus termostatos y sistemas de aislamiento de electricidad.

A pesar del importante papel de las pequeñas empresas en el consumo de energía, el plan energético de Bush apenas menciona la creación de incentivos para que esas firmas inviertan en tecnologías eficientes, puntualizó Kennard.

Los ambientalistas confían en que el Senado introduzca en el proyecto de ley energética disposiciones para favorecer la eficiencia y el uso de fuentes renovables.

El senador Jeff Bingaman, presidente del Comité de Energía y Recursos Naturales, ha dado curso a dos propuestas legislativas para estimular la inversión en nuevas fuentes renovables.

La primera exige a los proveedores minoristas un porcentaje mínimo de electricidad de fuentes renovables. La proporción variará de un Estado a otro. Catorce Estados han introducido esas normas, pero en cada caso las regulaciones cambian en materia de tiempo y requisitos.

La segunda propuesta promueve la creación de un fondo financiero para la implementación de la energía renovable y de tecnologías de eficiencia energética. El fondo se formaría con el pago de una pequeña suma adicional en la cuenta de electricidad de todos los usuarios.

Pero se ignora el momento en que serán debatidas estas propuestas en el Senado, ya que los legisladores están concentrados por ahora en las consecuencias políticas de los atentados terroristas.

Alarma ante armas biológicas

THALIF DEEN*

Corresponsal de IPS en la ONU.

La ONU se hizo eco de las advertencias de Estados Unidos e instó a los Estados miembro a fortalecer los tratados internacionales contra el uso de armas biológicas, ante el temor de que organizaciones terroristas las empleen en atentados.

“El peligro inmediato lo plantea un grupo no estatal, o incluso un individuo, que adquiere y utiliza un arma nuclear, biológica o química”, dijo el secretario general Kofi Annan a la Asamblea General de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).

La Asamblea, de 189 Estados miembro, celebró una sesión especial sobre medidas para erradicar el terrorismo internacional, en su primera reunión desde los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y Washington.

El peligro que plantean las armas de destrucción masiva se agrava por la facilidad con que se pueden utilizar sin misiles ni otros sistemas complejos, agregó Annan.

Un ejemplo es el de la secta religiosa Aum Shinrikyo, que en 1995 liberó en Japón el gas neurotóxico Sarin en el metro de Tokio, causando la muerte a 12 personas y hospitalizando a más de mil.

Tres altos funcionarios de Estados Unidos -el secretario de Defensa Donald Rumsfeld, el procurador general John Ashcroft y el jefe del personal de la Casa Blanca Andrew Card Jr- plantearon su temor ante atentados similares.

Card dijo que es posible que el extremista saudita refugiado en Afganistán Osama Bin Laden, a quien Estados Unidos apunta como el principal sospechoso de los atentados del 11 de septiembre, cuente con los medios para utilizar armas químicas y biológicas.

“No intento ser un alarmista, pero sabemos que estas organizaciones terroristas, como Al Qaeda (La base), dirigida por Osama Bin Laden y otros, probablemente hayan encontrado los medios para utilizar armas biológicas y químicas”, sostuvo.

Rumsfeld dijo que “enemigos de Estados Unidos” ayudarán a grupos terroristas a obtener armas de destrucción masiva.

El Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos informó que Irán, Iraq, Libia, Siria y Sudán tienen armas químicas y biológicas, entre otros países considerados enemigos de Washington.

Varios países árabes aseguran que Israel también posee armas químicas, biológicas y nucleares, o que tiene la capacidad para producirlas.

Prácticamente todos los estados árabes se negaron a participar en el registro anual de armas instituido por la ONU porque el mismo excluye a las armas de destrucción masiva.

El registro incluye sólo la importación y exportación de armas convencionales, como aviones caza, misiles y tanques. La única forma de averiguar cuáles son las armas en poder de Israel es incluir las armas de destrucción masiva, aseguran delegados árabes.

Aunque es difícil imaginarse algo peor que la tragedia del 11 de septiembre, “la verdad es que un solo atentado con armas nucleares o biológicas podría haber matado a millones”, dijo Annan a la Asamblea General.

El mundo no pudo impedir esos atentados, pero “hay mucho que podemos hacer para evitar futuros atentados terroristas realizados con armas de destrucción masiva”, agregó.

Annan instó a los Estados miembro a redoblar sus gestiones para aplicar los tratados correspondientes a las armas de destrucción en masa, incluso aquellos que prohíben las armas químicas y biológicas y el tratado de no proliferación nuclear (TNP).

El TNP fue firmado y ratificado por 187 estados, incluso Estados Unidos. Sólo Cuba, India, Israel y Pakistán no lo han firmado o ratificado.

Annan pretende una cooperación mayor entre las organizaciones internacionales que tratan con estas armas, así como reforzar las normas nacionales sobre exportación de productos y tecnologías necesarios para fabricarlas.

El secretario general también pidió a los Estados miembro que desarrollen gestiones nuevas para penalizar la compra o el uso de armas de destrucción por parte de grupos no estatales.

La comunidad internacional debe fortalecer los controles sobre otros tipos de armas que constituyen un peligro mayor si llegaran a manos de organizaciones terroristas, advirtió.

Esto significa hacer más para asegurar la prohibición de la venta de armas ligeras a grupos no estatales, eliminar las minas terrestres, mejorar la protección física de zonas industriales y reforzar la vigilancia contra amenazas terroristas informáticas, agregó.

“Debemos prepararnos para la posibilidad de que personas sean dañadas adrede con armas biológicas o químicas”, advirtió la directora de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Gro Harlem Brundtland.

La OMS divulgó una lista de 44 virus, bacterias y hongos que pueden utilizarse como armas biológicas. Un simulacro informático realizado el año pasado en Estados Unidos concluyó que un ataque con el virus de la viruela mataría a 80 millones de personas en un año en ese país.

FMI y Banco Mundial cancelaron su asamblea

JIM LOBE

Corresponsal de IPS en Washington.

El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) suspendieron su asamblea anual debido a la tensión causada en el mundo por los ataques contra Nueva York y la capital estadounidense.

Entre 50.000 y 100.000 activistas se preparaban para manifestarse en Washington contra el FMI y el Banco Mundial, dos símbolos de la globalización de la economía que debían celebrar su asamblea conjunta el 29 y 30 de septiembre en Washington.

Las protestas fueron canceladas, comunicaron los organizadores, “en señal de respeto por las víctimas” de los ataques terroristas que pulverizaron las torres gemelas del World Trade Center, de Nueva York, y destruyeron parcialmente el Pentágono, sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos, en Washington.

El FMI y el Banco Mundial divulgaron su anuncio -esperado desde que, inmediatamente después de los atentados, el jefe de la policía de Washington pidiera la postergación de la asamblea- en medio de la creciente preocupación por el impacto de los hechos del 11 de septiembre en la economía internacional.

Los analistas predicen que la economía de Estados Unidos, que ya se había debilitado, caerá en recesión como resultado de la clausura de los mercados financieros durante cuatro días y de la suspensión de vuelos comerciales luego del ataque.

Otras situaciones de crisis internacional, como la del Golfo en 1990-1991, causada por la invasión de Iraq a Kuwait, también determinaron la reducción del gasto privado en Estados Unidos.

La recesión estadounidense tendrá severo impacto en Asia oriental y en algunos países de América Latina, especialmente en México, cuyas exportaciones dependen de la demanda de Estados Unidos.

La languidez que prevalece en la economía de la Unión Europea y la recesión japonesa complican el cuadro general.

Los presidentes de los bancos centrales de Occidente, que iban a asistir a la asamblea del FMI y del Banco Mundial, se comunican casi permanentemente desde los atentados para coordinar su respuesta ante las nuevas perspectivas de crisis.

La Reserva Federal (FED, Banco Central) de Estados Unidos se anticipó a la reapertura de la bolsa de Nueva York con un recorte de medio punto porcentual de la tasa de interés interbancaria, que sirve de referencia al sistema financiero. La tasa anual de la FED se ubica ahora en el tres por ciento.

Pese a esa decisión y al llamado del gobierno a los inversores a evitar la venta de sus activos, los principales indicadores de Nueva York se desplomaron a poco de comenzadas las operaciones.

Funcionarios del Departamento del Tesoro manifestaron que es posible una reunión en Washington de los ministros de economía y los gobernadores de los bancos centrales del Grupo de los Siete países más ricos del mundo.

El presidente del Banco Mundial, James Wolfensohn, y el director gerente del FMI, Horst Koehler, sugirieron que la suspendida asamblea conjunta no se realizará nunca, al menos de un modo formal, con la presencia física de los participantes.

Se ha resuelto discutir “formas alternativas” de cumplir con las actividades que indican los estatutos de los dos organismos multilaterales, dijeron Koehler y Wolfensohn en su comunicado.

“La necesidad de una asamblea formal está en duda”, confirmó a IPS la jefa de portavoces del Banco Mundial, Caroline Anstey. Los estatutos de los dos organismos exigen la elección de presidente y vicepresidente de la junta de gobernadores de cada uno de ellos, un acto que no requiere la reunión física de delegados.

El Banco Mundial y el FMI habían tomado una serie de decisiones sin precedentes para evitar que el normal desarrollo de la asamblea anual fuera impedido por manifestaciones de protesta como las que los militantes contra la globalización han realizado en ocasión de otros foros internacionales.

La reunión iba a realizarse por primera vez en una zona residencial de Washington vecina a un área boscosa, a tres kilómetros del centro de la ciudad, donde los dos organismos multilaterales tienen sede.

La policía se proponía levantar una valla de tres metros de altura en torno del predio en que se realizaría la asamblea, y las deliberaciones se iban a reducir a sólo dos días, en lugar de los nueve de las convocatorias anteriores.

Las reuniones oficiales sólo duran dos días y comprenden más que nada la lectura de discursos preparados por ministros de Economía y presidentes de Bancos Centrales. Pero tradicionalmente estuvieron precedidas por otras reuniones, como la del Comité de Desarrollo del Banco Mundial y el Comité Interino del FMI.

Los dos comités son organismos informales, pero fijan políticas que luego aplican el Banco Mundial y el FMI. Según el programa modificado, ambos habrían sesionado durante las reuniones oficiales, y no antes.

Los grupos de protesta se preparaban desde hace meses para las reuniones de este año, y las autoridades no descartaban la presencia de hasta 100.000 manifestantes.

Las organizaciones más grandes habían prometido protestar por vías no violentas, pero tanto sus dirigentes como funcionarios de los organismos multilaterales y la policía de Washington temían que las manifestaciones también atrajeran a los autodenominados “anarquistas” y el llamado “Black Bloc” (bloque negro).

Las fuerzas de seguridad italianas reaccionaron con violencia ante los ataques de estos grupos minoritarios contra efectivos y edificios en julio, en ocasión de la cumbre del Grupo de los Ocho países más poderosos del mundo, realizada en Génova.

La policía de Washington confiaba que podría manejar la situación este año con la ayuda de vallas de contención y el apoyo de fuerzas policiales de otras ciudades.

Pero los atentados incrementaron el estado de alerta y se multiplicaron los pedidos para una mayor presencia policial en Washington.

La declaración de Wolfensohn y Koehler subrayó que estos factores fueron esenciales para su decisión. Aunque la misma se tomó “con el más profundo respeto y pésame” por las víctimas de los atentados, también tuvo la finalidad de permitir la “dedicación total de las fuerzas de seguridad a las prioridades extraordinarias e inmediatas actuales”.

Varias organizaciones ecologistas cancelaron su participación en los actos de protesta, entre ellas International Rivers Network (IRN) y Amigos de la

Tierra, así como la mayor confederación sindical de Estados Unidos, la AFL-CIO.

IRN explicó su decisión por las “dificultades estratégicas que tendría para expresar” su mensaje “con respecto al Banco Mundial y el FMI a los medios de comunicación y al público, en su actual estupor”.

“Nuestras energías y atención están concentradas en el enorme esfuerzo de ayuda en que participan nuestros sindicatos”, explicó, a su vez, el presidente de la AFL-CIO, John Sweeney.

El grupo que organizó a la mayoría de los manifestantes, Mobilisation for Global Justice, aplazó las protestas “por respeto a las víctimas de esta tragedia”.

“Seguiremos responsabilizando a estas instituciones (el banco Mundial y el FMI) por la estructura injusta y poco equitativa de la economía mundial. Nuestro compromiso con la justicia internacional no nos exigiría menos”, dijo la organización.

Mientras, el grupo International Action Center, señaló que, “en vista de la crisis actual, con consecuencias trágicas para miles de personas, hemos revisado nuestra convocatoria a los manifestantes para que se dediquen al peligro inmediato que representan el racismo y la grave amenaza de guerra”.

Guerra contra el terrorismo se pierde en la ONU

THALIF DEEN

Corresponsal de IPS en la ONU.

Estados Unidos, que fue víctima de una serie de atentados cuyo saldo de muertes sería de miles, se ha negado a ratificar las convenciones internacionales contra el terrorismo aprobadas en la ONU. De los 189 países integrantes de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), 83 ratificaron los 12 tratados contra el terrorismo internacional, pero Estados Unidos no figura entre ellos.

La posición estadounidense consiste en “firmar, pero no ratificar”, comentó un funcionario de la ONU que solicitó reserva de su identidad. Si un país no ratifica un tratado internacional, esa norma carece de validez legal dentro de su territorio, explicó.

La ONU aprobó la Convención para la Supresión de los Atentados Terroristas Explosivos en 1997 y la Convención para la Supresión del Financiamiento de Organizaciones Terroristas en 1999.

El Congreso legislativo estadounidense, órgano al que le compete la ratificación de tratados internacionales, tuvo en los últimos períodos una mayoría derechista que se negó a avalar esos convenios por supuestas colisiones con las leyes nacionales o por la percepción de que no servían al interés nacional.

Como consecuencia, Washington se ha negado a ratificar no sólo tratados contra el terrorismo sino otras normas internacionales, como las que prohíben las minas antipersonales y los relacionados con el cambio climático, la ley marítima y la creación de un tribunal penal internacional contra crímenes de guerra.

El secretario general de la ONU, Kofi Annan, expresó sus “profundas condolencias” con las víctimas de los atentados y con sus familias “y con el pueblo y el gobierno de Estados Unidos”.

“No puede haber duda de que esos ataques son actos deliberados de terrorismo, cuidadosamente, planificados y coordinados, y como tales los condenó con fuerza. El terrorismo debe ser combatido con decisión, donde sea que aparezca”, dijo Annan.

Annan dijo este año a la Asamblea General de la ONU que promovería dos nuevos tratados hoy en discusión: la Convención Internacional para la Supresión de Actos de Terrorismo Nuclear y una Convención Completa sobre Terrorismo Internacional.

El debate de ambas convenciones está previsto para la sesión de la Asamblea General en curso, que continuará hasta mediados de diciembre.

Mientras, Estados Unidos continuó expresando sus fuertes críticas a la propuesta de los 119 países del Movimiento de No Alineados de celebrar una conferencia internacional contra el terrorismo.

El funcionario estadounidense Robert Rosenstock dijo al Comité Ad Hoc sobre Terrorismo de la ONU en febrero que esa conferencia no arrojaría resultados prácticos. “Las cuestiones sugeridas para la agenda de tal conferencia históricamente confundieron la solución práctica”, dijo Rosenstock.

El funcionario dijo al Comité que una conferencia distraería al foro mundial de tomar medidas prácticas que podrían y deberían ser tomadas, como alentar la adhesión universal de las 12 convenciones existentes contra el terrorismo adoptadas por la ONU.

Rosenstock, también sostuvo que la Asamblea General, que cada año aprueba media docena de resoluciones relativas al terrorismo, sería un vehí-

culo efectivo para esa discusión, y se preguntó si una conferencia especializada sería “un estímulo útil o una distracción costosa”.

La conferencia trataría varios asuntos delicados, como la distinción entre terroristas y combatientes por la libertad. La propuesta de una conferencia internacional sobre terrorismo se maneja en la ONU desde hace una década.

Pero nunca se concretó por discrepancias sobre puntos clave, como si un ataque de fuerzas regulares que cause la muerte de civiles o el asesinato de palestinos en Cisjordania y Gaza por parte de Israel pueden ser considerados actos terroristas.

El gobierno de China cree que una reunión de esta índole facilitaría un acuerdo para combatir el terrorismo, declaró el embajador de China ante la ONU, Gao Feng.

Tratado antiterrorista, lejos de la ratificación

THALIF DEEN

Corresponsal de IPS en la ONU.

Sólo cuatro de los 189 Estados miembro de la Organización de Naciones Unidas (ONU) ratificaron un tratado internacional que apunta a eliminar las fuentes de financiación del terrorismo, destacó un funcionario del foro mundial.

“La tragedia subraya la necesidad de ratificar y aplicar la convención”, dijo Pino Arlacchi, director de la Oficina de Fiscalización de Drogas y Prevención del Delito de la ONU.

Arlacchi se refería a los atentados que destruyeron las torres gemelas de Nueva York y demolieron parcialmente el edificio del Pentágono (Departamento de Defensa) en Washington, causando más de 6.300 víctimas.

“Pido que se ratifiquen rápidamente y se implemente totalmente las convenciones existentes de la ONU, que brindan un sólido marco jurídico para (...) la erradicación del terrorismo”, y especialmente el lavado de dinero y otras transacciones financieras que lo fomentan, agregó.

Ese es el caso de la Convención de las Naciones Unidas para la Supresión del Financiamiento al Terrorismo, adoptada por la Asamblea General en diciembre de 1999 pero sólo ratificada por Botswana, Gran Bretaña, Sri Lanka y Uzbekistán, afirmó Arlacchi.

Estados Unidos, que instó a la comunidad internacional a perseguir a las redes financieras que apoyan al terrorismo, firmó la convención en enero, pero aún no la ratificó.

Palitha Kohona, director de la sección de tratados de la ONU, dijo que la Convención se convertirá en ley cuando la ratifiquen 22 países. El funcionario confía en que el proceso de ratificación se acelere tras los atentados.

El ministro de Economía de Francia, Laurent Fabius, dijo que su país propondrá que la financiación del terrorismo se incluya en la lista de temas investigados por el Grupo de Trabajo de Acción Financiera, creado por los países industrializados para combatir el lavado de dinero.

“Debemos desarrollar la cooperación internacional para erradicar los circuitos de financiación ilegal. Al combatir estos abusos de la globalización también luchamos contra las causas subyacentes del terrorismo”, aseguró Fabius.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos señaló que los atentados terroristas de Nueva York y Washington fueron financiados por fuentes ilegales.

La organización y ejecución de los atentados, incluso los secuestros de los cuatro aviones involucrados y el entrenamiento de vuelo de sus 19 secuestradores, habría costado unos 200.000 dólares.

El FBI pretende que los bancos comerciales de Estados Unidos le den acceso a los registros financieros relativos a las transacciones que realizaron los secuestradores para llevar a cabo los atentados.

El presidente francés Jacques Chirac pidió una política coordinada por la ONU para eliminar el terrorismo y acabar con sus fuentes de financiación.

Arlacchi considera que la ONU, como organización internacional, tiene un papel esencial en el control de las redes financieras de las organizaciones terroristas.

Para la convención, una persona comete un delito si “proporciona o reúne fondos con el propósito de realizar actos de terrorismo”.

El embajador canadiense Philippe Kirsch, que presidió el grupo de trabajo que redactó la convención en 1999, dijo que el instrumento caracterizó por primera vez a la recaudación de fondos con fines terroristas como un delito independiente.

“No hay necesidad de que el acto de terrorismo se cometa”, dijo, porque la convención penaliza la recolección de fondos con la intención o el conocimiento de que esos fondos se utilicen para realizar dicho acto.

Aunque no existe una definición legal de “terrorismo”, sí hay normas aceptadas universalmente de lo que constituye un acto de terrorismo, agregó Kirsch.

La convención nueva también estipula inequívocamente en su artículo 14 que el terrorismo no puede justificarse por razones políticas bajo ninguna circunstancia, subrayó.

Los países que ratifiquen la convención deberán aprobar leyes para asegurar que los actos criminales cubiertos por el instrumento internacional no “sean justificados por conceptos políticos, filosóficos, ideológicos, raciales, étnicos, religiosos o de similar naturaleza”.

Estados Unidos estrecha controles en Internet

DIANA CARIBONI

Central Latinoamericana de IPS.

Los servicios de seguridad de Estados Unidos, apoyados por empresas privadas, incrementaron la vigilancia de la información en la red mundial de computadoras Internet tras los atentados en Nueva York y Washington. El Buró Federal de Investigaciones (FBI) instaló un sistema de control de mensajes electrónicos en varias de las principales empresas de provisión de Internet y de correo electrónico, prometiendo que lo retirará en pocos días. Pero analistas y activistas de derechos humanos afirman que es imposible controlar realmente la red sin atentar gravemente contra los derechos de expresión y de privacidad. American On Line, Hotmail, Earthlink y Yahoo fueron algunas de las compañías que admitieron estar colaborando “totalmente” con las investigaciones gubernamentales para hallar a los responsables de los ataques contra el World Trade Center, de Nueva York, y el Pentágono, en Washington.

La firma Hotmail, propiedad de Microsoft y uno de los mayores proveedores de correo electrónico gratuito, entregó a las autoridades información sobre “cuentas específicas” de correo solicitadas por el FBI, la mayoría

con la palabra Alá o con mensajes en árabe, aseguró la revista estadounidense de telecomunicaciones Wired.

“Comparto la preocupación porque Internet se convierta en un instrumento a favor de los terroristas, pero soy contrario a toda medida de vigilancia”, dijo a IPS el presidente del Registro de Direcciones de Internet para América Latina y el Caribe (LACNIC) el uruguayo Raúl Echeverría.

“De hecho las herramientas convencionales existentes no son eficientes e incluso algunos gobiernos de Oriente han admitido su fracaso en controlar la red”, agregó.

Agentes del FBI visitaron a una de las empresas proveedoras con dos juegos del sistema de espionaje Carnivore (carnívoro) solicitando permiso para instalarlos por unos pocos días y cubriendo todos los costos, dijo el gerente de una compañía. Varios testigos aseguraron que los agentes concurren con órdenes judiciales para realizar las inspecciones.

El polémico mecanismo Carnivore, desarrollado por el FBI y utilizado oficialmente desde septiembre de 1999, es una computadora especialmente diseñada para conectarse al corazón de la red de un proveedor de Internet y controlar las comunicaciones.

Periódicamente un agente detiene el sistema y retira el disco duro (dispositivo que almacena datos) donde Carnivore guarda la información capturada.

En el 2000, el Senado de Estados Unidos inició una investigación sobre este sistema, debido a denuncias de organizaciones no gubernamentales sobre la verdadera capacidad del mismo, cuyo nuevo nombre es DCS1000.

Según el FBI, el sistema sólo captura y almacena la información específica requerida por una orden judicial. Pero el Centro de Información sobre Privacidad Electrónica reveló documentos oficiales según los cuales Carnivore puede almacenar todo el tráfico de datos interceptado.

El espionaje planificado en las comunicaciones privadas, con escasas probabilidades de hallar lo que se busca, es un juego peligroso que no vale la pena, advierten activistas de derechos civiles en Estados Unidos.

“Podríamos empezar a abrir las cartas de todo el mundo y seguramente algo encontraremos. Pero en ese proceso haremos de este país un lugar mucho menos bueno para vivir”, dijo el escritor y activista Jerome Tuccile en su página <http://civilliberty.about.com/> en Internet.

“Hay que señalar que cualquier intento de control va en contra de la filosofía fundacional de la red, de libertad y privacidad”, dijo a IPS el experto en seguridad informática Reynaldo de la Fuente, de la firma Datasec.

Pero además, “hay una gran incertidumbre sobre los resultados”, observó De la Fuente. Los atentados pusieron en duda “la capacidad de controlar y descifrar mensajes de la gigantesca red Echelon”, de la que participan la estadounidense Agencia Nacional de Seguridad y servicios de inteligencia británicos y de otros países de habla inglesa, aseguró. No se trata sólo de interceptar mensajes, sino de comprender su significado.

En febrero, funcionarios estadounidenses habían advertido que el fundamentalista saudita Osama Bin Laden, sospechoso de los ataques a Nueva York y Washington, había comenzado a utilizar programas de codificación de la información para comunicarse con sus seguidores a través de sitios públicos de Internet.

“El encriptado (sistema que codifica la información que viaja por Internet haciéndola comprensible sólo para el emisor y el destinatario por medio de una clave) permite a organizaciones terroristas comunicar sus intenciones criminales sin temor a intervenciones externas”, afirmó el año pasado el entonces director del FBI Louis Freeh.

“La capacidad de desarrollar estos sistemas es muy limitada fuera de Occidente. Una de las últimas medidas del gobierno de Bill Clinton fue liberar la exportación de criptografía. Durante años, las autoridades estadounidenses mantuvieron las restricciones, pero cedieron por la presión de las empresas”, afirmó De la Fuente.

Actualmente el algoritmo PGP, que se utiliza para crear criptografía, se obtiene libremente en Internet.

Si bien el Congreso de Estados Unidos estudió en el pasado un proyecto para prohibir cualquier producto de encriptado que no incluyera una clave de decodificación para el gobierno federal, la medida no prosperó.

Por otra parte, “quizás Estados Unidos lograra imponer el uso de una clave común en su territorio, pero es casi imposible que extienda esa medida a toda la comunidad de Internet”, sostuvo De la Fuente.

Una declaración de Bin Laden aún presente en Internet afirma que “el pueblo del Islam ha sufrido la agresión, la maldad y la injusticia impuestas por la alianza de los cruzados sionistas y sus colaboradores, Estados Unidos, sus aliados y la maligna ONU” (Organización de Naciones Unidas).

“...Se debe combatir con fuerzas livianas de rápido desplazamiento que actúen en total secreto. Se debe ocasionar pérdidas que sacudan y destruyan instituciones e infraestructuras del enemigo para expulsarlo derrotado de nuestra nación”, sostiene el documento, que puede hallarse en <http://azzam.com/html/articlesdeclaration.htm>.

No se encuentran, en cambio, la página de la organización fundamentalista Talibán, que gobierna Afganistán, ni la de la representación de ese país ante la ONU. Desde el 11 de septiembre, la red mundial también contiene mensajes de solidaridad y pedidos de tolerancia.

“Condenamos la muerte de personas inocentes tanto como condenamos la falsa acusación de otros inocentes. Llamamos a gobernantes y trabajadores de la prensa a proteger los derechos a la seguridad y a la justicia de todos”, dice la Asamblea Islámica de Estados Unidos en su página, www.iana-net.org/.

Estados Unidos presiona a Canadá para modificar política migratoria

MARK BOURRIE

Corresponsal de IPS en Ottawa.

Canadá considera endurecer su política inmigratoria en respuesta a presiones de Estados Unidos, que exige normas más estrictas hacia los refugiados a raíz de los atentados terroristas del 11 de septiembre.

La política canadiense en materia de inmigración debe alinearse a la de Washington, “para establecer un perímetro norteamericano que aplique controles más rigurosos sobre las personas que llegan del exterior. Debemos defender al pueblo de América del Norte de este tipo de ataques perversos”, dijo el embajador estadounidense Paul Cellucci.

Cellucci propugna modificar la ley que permite permanecer en Canadá a los solicitantes de asilo mientras se tramita su caso y apelar la decisión si resulta desfavorable.

La ley otorga plenos derechos a cualquiera que llegue a suelo canadiense y aspire a la condición de refugiado, y le permite moverse libremente dentro del territorio nacional antes de que se verifiquen sus antecedentes personales.

Cientos de personas con orden de deportación permanecen en Canadá, señalan quienes se oponen al régimen vigente.

Una nueva ley permitiría al gobierno prohibir el derecho de apelación a los sospechosos de actividades delictivas o terroristas, dijo ante la Cámara de los Comunes (diputados) la ministra de Inmigración, Eleanor Caplan.

Según la ministra, el año pasado se dispuso la deportación de 8.500 personas y 8.900 abandonaron efectivamente el país, debido a los casos acumulados desde 1999.

“Esta es una reacción instintiva ante acontecimientos horribles. No se ayuda a mejorar una situación reclamando medidas radicales basadas en la pasión del momento”, replicó Janet Dench, directora ejecutiva del Consejo Canadiense para los Refugiados.

Dench manifestó su preocupación porque personas que no representen ningún peligro puedan quedar “atrapadas por la red de seguridad” si se modifican las leyes.

Para algunos, el régimen canadiense sobre refugiados es un paraíso para los terroristas y sus cómplices.

Dos ex residentes de la ciudad de Montreal supuestamente vinculados a Osama bin Laden, el extremista saudita señalado como principal sospechoso de los atentados en Nueva York y Washington, fueron procesados por terrorismo en Estados Unidos.

Los argelinos Ahmed Ressam y Mokhtar Haouari fueron acusados por las autoridades estadounidenses de planear un atentado contra el aeropuerto internacional de Los Angeles.

Según las autoridades el ataque se frustró cuando Ressam fue detenido tras ingresar al estado noroccidental de Washington procedente de Canadá en un automóvil repleto de explosivos.

Por otra parte, uno de los sospechosos de participar en el atentado explosivo de 1993 contra las torres gemelas del World Trade Center en Nueva York logró escapar a través de Canadá.

“Era esperable que Estados Unidos nos presionara. Creo que debemos movernos en esa dirección si queremos mantener alguna forma de frontera abierta entre ambos países”, sostuvo por su parte David Mutimer, director del Centro de Estudios Internacionales y de Seguridad de la Universidad York, en Toronto.

La propuesta también es respaldada por la conservadora comunidad empresarial del país.

Canadá deberá adoptar políticas migratorias similares a las de Estados Unidos si no quiere que la frontera común sea casi imposible de cruzar, dijo el director del grupo ferroviario Canadian Pacific Limited, David O’Brien.

“Debemos lograr que Norteamérica sea segura. Vamos a perder en forma creciente nuestra soberanía, pero es necesario”, admitió O’Brien ante la Cámara de Comercio de la ciudad occidental de Calgary.

Simultáneamente, los musulmanes canadienses afirman que la campaña de hostilidad contra su fe atravesó la frontera estadounidense, a pesar de los llamados de los dirigentes canadienses a respetar los derechos de las minorías.

“El creciente número de incidentes antimusulmanes documentados en los últimos días despiertan preocupación y alarma”, dijo un comunicado firmado por 34 organizaciones islámicas difundido en una conferencia de prensa por el dirigente Naeem Siddiqi, quien citó ataques a mezquitas, amenazas de muerte y abusos verbales.

“Los musulmanes canadienses no deberían padecer por ser musulmanes”, exhortó. En Canadá residen 300.000 árabes y 700.000 musulmanes, la mayor parte en las ciudades de Montreal, Toronto, y Ottawa, la capital. El país tiene un total de 31 millones de habitantes.

Faisal Kutty, abogado del Consejo de Relaciones Islámicas Estadounidenses-Canadá, sostuvo que algunas organizaciones islámicas pidieron a sus miembros que no salieran a la calle y no enviaran a sus hijos a la escuela. El Consejo no está de acuerdo pues eso alimentaría una “mentalidad de estado de sitio”, dijo Kutty.

“La barrera que imponemos a la inmigración puede ser diferente a la de Estados Unidos. Si las restricciones para ingresar a Estados Unidos desde Canadá son muchas, las nuestras podrían seguir siendo bajas”, opinó David Rudd, director del Instituto Canadiense de Estudios Estratégicos, con sede en Toronto.

Si Estados Unidos sigue adelante con planes como el polémico sistema de defensa con misiles y las últimas propuestas de defensa territorial, Canadá se enfrentará a una prueba crucial en su política exterior, opinó el analista Joel Sokolsky, del Royal Military College, de Kingston, provincia de Ontario.

“No podemos permanecer al margen. La defensa territorial terminará incluyendo a Canadá”, concluyó.

Lucha antiterrorista desconocerá libertades

GUSTAVO CAPDEVILA
Corresponsal de IPS en Ginebra.

El examen de los atentados en Estados Unidos a la luz de los derechos humanos dejó unánimes expresiones de condena, pero también de inquietud por la suerte de la población afgana y por la vigencia del derecho humanitario en el mundo.

Estos son momentos difíciles para los derechos humanos y para las libertades cívicas, advirtió la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson.

Atentados como los del día 11, que destruyeron el World Trade Center, de Nueva York, y parte del Pentágono (Departamento de Defensa), en Washington, son delitos contra la humanidad, sostuvo Robinson.

La funcionaria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) comparte el temor de grupos de la sociedad civil en que la reacción de los gobiernos contra el terrorismo cause un desgaste de los derechos humanos.

Los ataques terroristas en Estados Unidos fueron examinados por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en una reunión informal celebrada en Ginebra.

La sesión del máximo cuerpo especializado de la ONU mostró que existe una toma de conciencia universal sobre la gravedad de los atentados y la solidaridad plena con el país agredido, resumió el presidente de la Comisión, el argentino Leandro Despouy.

La Comisión también discutió la respuesta militar puesta en marcha por Estados Unidos y estudió el informe presentado por el relator especial de la ONU sobre Afganistán, Kamal Hossain, donde se indica que el pueblo de ese país asiático atraviesa “por una situación terrible”.

El relator designado por la ONU para evaluar la situación de los derechos humanos en Afganistán presentó un informe que describe una situación “históricamente compleja” en ese país.

Hossain, ex canciller de Bangladesh, aseveró que el pueblo afgano, ya diezmado por décadas de guerras, es víctima ahora del régimen fundamentalista del movimiento Talibán y, al mismo tiempo, vive bajo el terror del posible ataque de Estados Unidos.

La población de Afganistán, de alrededor de 23 millones de personas, es en estos momentos la más vulnerable del mundo, opinó Robinson.

Un informe de las agencias humanitarias de la ONU estimó que actualmente dependen de la asistencia internacional para sobrevivir unos cinco millones de afganos, 60 por ciento de los cuales son mujeres y niños, precisó Robinson, en un llamado a detener esa catástrofe humanitaria “ya evidente”.

La representación de Afganistán reconocida por la ONU, que integran grupos opositores al movimiento Talibán, mostró también ante la Comisión de Derechos Humanos su preocupación por la suerte de la población.

El pueblo afgano “de ninguna manera aparece implicado” en los ataques terroristas, sostuvo.

Los expertos de la ONU en derechos humanos evaluaron que los autores de esos atentados “superaron el límite” y perpetraron un delito contra la humanidad.

Los estatutos del Tribunal Penal Internacional definen a los delitos contra la humanidad a todo aquel ataque en gran escala y deliberado contra la población civil.

Robinson encontró esos elementos en los atentados en Washington y en Nueva York, pues se registraron secuestros de aviones civiles, con los tanques llenos de gasolina, que fueron estrellados de manera deliberada contra edificios que alojaban a miles de ciudadanos inocentes.

La funcionaria puso de relieve la reacción de la comunidad internacional, que se alineó de inmediato para apoyar a la ONU y a Estados Unidos con el propósito de llevar a la justicia los responsables del crimen.

Sin embargo, Robinson observó que existen preocupaciones legítimas ante la coalición internacional que se está formando para combatir contra el terrorismo.

Los resultados de la reunión de ministros de Justicia y del Interior de los países europeos pueden prevenir sobre futuras erosiones de algunas libertades en el continente, dijo.

Otra consecuencia, podría ser una mayor severidad en el clima y en el contexto que rodea a los refugiados y a los solicitantes de asilo en Europa. En otras palabras, un endurecimiento de la mentalidad de “Europa como fortaleza”, advirtió Robinson.

En nombre de la lucha contra el terrorismo, se hará más difícil la vida para los miembros vulnerables de las poblaciones que con desesperación procuran huir de las duras realidades que soportan, insistió.

La Alta Comisionada de la ONU encontró preocupaciones similares en las organizaciones de la sociedad civil de Estados Unidos, con las que se reunió durante su último viaje, después de los atentados.

Esas inquietudes se relacionan con los procedimientos en el sistema de migraciones de Estados Unidos, que permiten retener personas durante largos períodos e inclusive procesarlas por razones de seguridad.

Robinson dijo que no le caben dudas de que, para luchar contra el terrorismo, algunos gobiernos reprimirán a los activistas de los derechos humanos.

Este es un momento difícil para los derechos humanos y para las libertades cívicas, insistió.

Jaque a las libertades civiles

YOJANA SHARMA

Corresponsal de IPS en Berlín.

Las medidas antiterroristas acordadas por la Unión Europea (UE) tras los atentados suicidas en Nueva York y Washington pueden ser el comienzo de una lenta erosión de las libertades civiles, advierten organizaciones de derechos humanos.

La cumbre de emergencia de la UE acordó un amplio paquete de medidas antiterroristas que incluye la simplificación de los procesos de extradición y la validez continental de órdenes judiciales nacionales.

Los líderes de la UE convinieron así mismo mayores potestades para controlar el lavado de dinero e incautar bienes de supuestos terroristas y la acción concertada de fuerzas de inteligencia y seguridad del bloque.

“Hay una gran tentación de acelerar el proceso sin considerar el efecto real de esas medidas en los ciudadanos inocentes”, dijo Stephen Jakobi, de la organización no gubernamental (ONG) Juicios Justos en el Exterior.

El gobierno de Alemania, que aprobó las medidas de la UE y su propio paquete antiterrorista, cree que el país alberga por lo menos a 100 terroristas islámicos “latentes” entrenados en Afganistán, que llevan una vida aparentemente normal, a la espera de la orden de actuar.

“Creemos tener identificados a varios de ellos”, dijo Fritz Behrens, ministro del Interior del estado de Renania del Norte-Westfalia, al presentar un

informe de la Oficina de Protección de la Constitución (OPC), organismo de inteligencia interna.

La investigación de los ataques permitirá “descifrar cómo entran en actividad los terroristas latentes”, aseguró.

Activistas de derechos civiles opinan que el temor por los “latentes” puede conducir a normas que hagan difícil la vida cotidiana.

Pruebas reunidas por fuerzas policiales europeas revelan que los supuestos terroristas se insertan en la sociedad local, sobre todo, en las ciudades multiculturales del continente, por lo cual el origen étnico es el criterio inicial de búsqueda que aplican las autoridades.

Esta es la clase de investigación que cuestionan las ONG. La policía de la septentrional ciudad de Hamburgo, donde vivieron como estudiantes tres presuntos secuestradores de los aviones estrellados en Estados Unidos, basa su rastreo en la población de nombre árabe.

De hecho, la policía de varias ciudades alemanas elabora listas de sospechosos con todos aquellas personas que respondan a un “perfil” determinado, hasta que sean investigadas y declarados libres de sospecha.

Utilizado con algún éxito en los años 70 para rastrear a colaboradores del grupo guerrillero Facción Ejército Rojo, este sistema es considerado, sin embargo, ineficaz por activistas de derechos civiles.

“El sistema de perfil considera culpable hasta que se pruebe lo contrario a toda persona que responda a cierto patrón”, dijo un activista.

En busca de más terroristas “latentes”, la policía federal de Alemania envió una lista de sospechosos a sus reparticiones en las principales ciudades, y pidió a las tres universidades de Berlín información sobre más de 600 estudiantes árabes para compararlos con el “perfil” policial.

Dentro de la población de origen árabe, los hombres que saben pilotar aviones o que están diplomados en ingeniería o ciencias son sospechosos, de acuerdo con el “perfil”.

“Lo estúpido de esto es que ninguno de los terroristas de Hamburgo se ajustaba a esos patrones”, afirmó el diario Berliner Zeitung.

Tres de los supuestos secuestradores detenidos vivieron durante años en Hamburgo, pero al menos uno de ellos tuvo un hijo, lo que lo habría excluido del “perfil” de terrorista que maneja la policía, según el cual los terroristas no tienen hijos.

Otros afirman que los potenciales terroristas son más proclives a la clandestinidad que el resto de la población. “La cuestión es cómo encontrar gente perfectamente escondida. La estrategia de esas células es no dar indicios

de sus verdaderos objetivos, para cubrir totalmente sus huellas”, afirma la OPC.

El canciller (primer ministro) alemán Gerhard Schroeder señaló que los terroristas “latentes” no se distinguen de la población en general. “Es extremadamente difícil para la policía hallar a esas personas cuando éstas actúan dentro de la ley”, sostuvo.

Los musulmanes de Alemania señalan preocupados los relatos de personas con nombres árabes expulsadas de vuelos comerciales en Estados Unidos porque los pilotos no se sienten “seguros” con ellas a bordo.

Si bien esa práctica aún no está extendida en Europa, muchos temen que el hecho de ser árabe dé lugar a la suspicacia.

“Este asunto del perfil es perturbador. Consideremos si la policía golpea a nuestra puerta o nos detiene para hacernos preguntas, todo el mundo pensará de inmediato: debe ser un terrorista, después de todo es árabe o musulmán”, dijo Ahren Al Haji, propietario de una tienda de periódicos en Berlín.

Casi tres millones de musulmanes residen legalmente en Alemania. Unas 20 organizaciones islámicas con 30.000 integrantes son vigiladas por la OPC, que estima en 3.000 la cantidad de individuos potencialmente violentos.

Tras las reformas aprobadas por el parlamento, que allanan el camino para ilegalizar a ciertas organizaciones religiosas, muchos integrantes de esos grupos podrían ser considerados sospechosos.

Salah Qaneh, de la Sociedad para el Avance de la Cultura Afgana, de Francfort, ya percibe algunas miradas diferentes cuando camina por la calle. “Ya no nos vemos como afganos, árabes o musulmanes, nos vemos como islámicos”, dijo.

También preocupa a las ONG el apresuramiento para aceptar las medidas antiterroristas en el ámbito nacional y europeo. “El peligro inmediato es para los musulmanes que pueden terminar en prisiones extranjeras, con sus derechos conculcados”, advirtió o Jakobi.

Otros activistas creen que las medidas adoptadas no ayudarán a Alemania a descubrir las redes de terroristas latentes. Esto sólo se logrará con un mejor trabajo de los servicios de inteligencia, que cuentan con pocos expertos en las lenguas y la cultura de Oriente Medio, aseguran.

Libertades, una baja de guerra

SAMANTA SEN

Corresponsal de IPS en Londres.

El gobierno británico prepara nuevas leyes antiterroristas que recortan los derechos individuales, tras los atentados suicidas en Nueva York y Washington.

El Ministerio del Interior elabora tres proyectos de ley para reformar la Ley Antiterrorista, en vigor desde abril.

Según las nuevas normas, la policía tendrá facultades para detener e interrogar a personas sospechosas de apoyar el terrorismo, se reformarán los mecanismos de extradición y se abolirá el derecho de los extranjeros solicitantes de asilo a apelar ante la justicia una resolución negativa.

Las fuerzas policiales podrán utilizar como prueba judicial transcripciones de escuchas telefónicas y de mensajes de correo electrónico. Los bancos deberán revelar la identidad de titulares de cuentas requeridas por las autoridades y todos los ciudadanos recibirán nuevos documentos de identidad de uso obligatorio.

Según las normas vigentes, estos procedimientos pueden ser recurridos ante la justicia, pero los tribunales serán los encargados de determinar su constitucionalidad si las leyes son aprobados por el parlamento.

Gran Bretaña considera sus propias normas más allá de los mecanismos que adopte la Unión Europea (UE) para perfeccionar la cooperación regional en el combate al terrorismo, dijo a IPS un portavoz del Ministerio del Interior.

“Los representantes electos son los que deben rendir cuentas ante el electorado y, por lo tanto, deben ser los primeros en proteger nuestros derechos en lugar de depender del sistema judicial”, explicó el ministro del Interior, David Blunkett, al anunciar las nuevas medidas.

Blunkett reconoció que los proyectos en elaboración podrían contrariar la Ley de Derechos Humanos adoptada para cumplir el mandato de la Convención Europea de Derechos Humanos.

El gobierno “intentará acomodar” las nuevas normas a la Ley de Derechos Humanos, pero si eso no es posible habrá que reformar la ley, dijo Blunkett. Toda nueva norma será “armonizada” con la legislación de la UE, sostuvo, por su parte, el informante de IPS.

Cualquier “armonización” deberá ser analizada con suspicacia, dijo a IPS John Wadham, director de la organización no gubernamental Liberty.

“Existe el peligro de que los derechos humanos y las libertades civiles sean vistos como lujos que no podemos darnos. Si no logramos preservar esos valores, si perdemos nuestras libertades, la lucha contra aquellos que quieren destruirnos perderá sentido”, sostuvo Wadham.

Las modificaciones a las leyes de extradición son preocupantes, agregó. “Trasladar a alguien por la fuerza a otro país para enfrentarlo con leyes, idiomas y tradiciones extranjeras es muy serio”, dijo.

“Cualquiera que deba pasar por esa situación debería contar con una audiencia justa. Por eso es esencial que los tribunales británicos no pierdan el control de ese proceso”, opinó.

“La justicia no debe ser la próxima víctima”, sostuvo la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, cuya sede central se encuentra en Londres.

Los culpables de los ataques cometidos en Estados Unidos deben ser llevados ante la justicia, “pero ésta sólo será justa si los medios para alcanzarla también lo son”, dijo Irene Khan, secretaria general de AI.

Algunas organizaciones como Liberty estudian presentar reclamaciones legales contra varias de las medidas, en especial las que afectan a los solicitantes de asilo.

Este tipo de medidas no habrían impedido los atentados suicidas en Estados Unidos y no detendrán al terrorismo, según organizaciones de derechos humanos.

“Es claro que las agencias de inteligencia no sufren de falta de información, sino de exceso. Acumular más datos no necesariamente implica adquirir mejor información”, dijo a IPS Mark Littlewood, encargado de coordinar las acciones de varias organizaciones no gubernamentales en la materia.

Los proyectos también afrontan oposición en el parlamento. El líder del Partido Liberal Demócrata (PLD), Charles Kennedy, ya advirtió al gobierno que es peligroso aprobar leyes restrictivas con apresuramiento.

La policía tiene potestades suficientes, y “lo que necesita es usarlas en forma inteligente”, afirmó el portavoz del PLD para cuestiones de seguridad interna, Simon Hughes. “No tiene sentido” considerar nuevas leyes cuando acaba de entrar en vigor una amplia legislación sobre terrorismo, agregó.

El diario Daily Telegraph se sumó a los reclamos de las organizaciones no gubernamentales.

“Los hombres que planificaron los atentados de Nueva York estaban motivados por un consciente odio a las libertades occidentales. Si en respues-

ta a la agresión restringimos esas libertades, ellos habrán ganado”, afirma un editorial del Telegraph.

“No tiene sentido la idea de que estaremos más seguros sólo porque los burócratas tendrán poder para investigar nuestras finanzas o para detenernos sin cargos”, concluyó el diario.

Clamor contra la guerra

SATYA SIVARAMAN

Corresponsal de IPS en Chiang Mai, Tailandia.

El ataque de Estados Unidos contra Afganistán tiene el respaldo de la mayoría de los gobiernos asiáticos, pero cada vez más activistas por la paz cuestionan la política de combatir la violencia con la violencia.

Organizaciones no gubernamentales (ONG), grupos religiosos y ecologistas y partidos de izquierda de toda Asia temen que la guerra en curso sólo aporte más pobreza a la región y aumente las tensiones sociales y políticas.

“No creemos que la guerra pueda ser una solución al terrorismo. La guerra es una forma de terrorismo organizado en gran escala, con mayor número de víctimas”, dijo Sonny Melencio, líder del Partido Socialista Laborista, de Filipinas.

Organizaciones filipinas de izquierda, religiosas y estudiantiles protestaron ante la embajada de Estados Unidos en Manila casi todos los días desde los atentados terroristas del 11 de septiembre en Nueva York y Washington.

Los manifestantes condenaron el terrorismo, pero también se oponen a que Estados Unidos recurra a la guerra para combatir el problema.

Más de 756 organizaciones de la sociedad civil de Corea del Sur, entre ellas la poderosa Confederación Coreana de Sindicatos, firmaron una solicitud al gobierno para negar ayuda a Washington en su campaña contra Afganistán.

“El terrorismo no se puede justificar de ninguna manera. Tampoco la guerra de represalia. La matanza de civiles inocentes en Afganistán debe detenerse de inmediato”, declararon los firmantes de la petición.

Hubo declaraciones similares y manifestaciones de protesta contra la guerra frente a las embajadas de Estados Unidos en Hong Kong, Bangkok, Tokio, Kuala Lumpur, Nueva Delhi e Islamabad.

En Pakistán, la atención internacional se concentró en cientos de musulmanes radicales que protestan contra el respaldo del gobierno de facto de Pervez Musharraf a la campaña militar de Estados Unidos, pero también hubo numerosas manifestaciones por la paz organizadas por sindicatos y grupos civiles no religiosos.

Miles de mujeres activistas participaron en una concentración por la paz en Lahore, el 25 de septiembre, entonando cánticos contra el terrorismo y el fundamentalismo religioso, pero también para pedir a Estados Unidos que no bombardee las ciudades afganas.

En la ocasión, la antigua presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, Asma Jahangir, dijo que el pueblo paquistaní no necesita consejos de Estados Unidos para combatir el terrorismo. “Como víctimas del terrorismo desde hace tiempo sabemos muy bien lo que significa para la humanidad. Nos solidarizamos con las víctimas del 11 de septiembre, pero no queremos más derramamiento de sangre de gente inocente”, declaró Jahangir.

En la vecina India, donde el gobierno nacionalista hindú apoyó la política de Estados Unidos contra Afganistán, grupos pacifistas se pronunciaron contra la guerra.

En Calcuta, bastión del movimiento izquierdista indio, miles de activistas protestaron frente al consulado de Estados Unidos tras los primeros bombardeos sobre Afganistán exigiendo el fin de la guerra y una solución política al problema del terrorismo.

Manifestaciones similares se realizaron en otras grandes ciudades de India, como Nueva Delhi, Bombay y Madrás.

Los ataques terroristas del 11 de septiembre y la subsecuente campaña militar estadounidense son considerados por los grupos de la sociedad civil de Asia como un gran revés para los derechos humanos. “Creemos que nuestro gobierno usará el terrorismo como una excusa para profundizar la represión de los grupos disidentes de todo signo, además de incrementar la ya elevada militarización del país”, advirtió Rasti Delizo, dirigente de la organización social Sanlakas, de Filipinas.

Muchos temen que el gobierno filipino, que enfrenta una larga y cruenta rebelión separatista en el sur en el que tiene fuerte influencia un grupo fundamentalista islámico, aproveche la oleada internacional contra las actividades terroristas para reprimir a minorías.

En India, los activistas que ya afrontan la animadversión gubernamental hacia las minorías esperan una persecución más severa hacia la población musulmana, que constituye el 11 por ciento de los 1.000 millones de habitantes del país.

Cinco integrantes del Foro de Resistencia de Pueblos de Toda India fueron detenidos en Nueva Delhi por distribuir folletos contra la guerra.

A los activistas de Corea del Sur y Japón les preocupa la creciente “de-rechización” del gobierno japonés. Tokio ofreció el envío de soldados con fines “humanitarios” para ayudar a Estados Unidos y sus aliados en la guerra contra Afganistán, lo cual hace temer la militarización del país.

La decisión de Estados Unidos de emplear medios militares para resolver un problema “esencialmente político”, seguramente determinará “el incremento de la militarización de la región”, señaló el socialista filipino Melencio.

Encuestas internacionales contradicen a Bush

ABID ASLAM

Corresponsal de IPS en Washington.

Encuestas de opinión realizadas en las últimas semanas ponen en duda que la mayoría del mundo apoye los ataques contra Afganistán, como sostuvo el presidente de Estados Unidos, George W. Bush.

“Nos apoya la voluntad colectiva del mundo”, declaró Bush, al anunciar el inicio de los bombardeos aéreos y con misiles de Estados Unidos y Gran Bretaña contra Afganistán.

Una encuesta realizada por el canal de televisión CNN, el diario USA-Today y la empresa Gallup, horas después del discurso de Bush, reveló que el 90 por ciento de los estadounidenses apoyaron la ofensiva militar, y sólo un cinco por ciento se mostraron contrarios. No obstante, hubo manifestaciones por la paz en una docena de ciudades, incluso Chicago, Denver, Nueva York, Portland, Seattle, St. Louis y Washington. Pero la mayoría de las personas consultadas por Gallup International en 35 países tras los atentados terroristas del 11 de septiembre en Nueva York y Washington rechazaron la intervención militar y se pronunciaron por llevar a los responsables ante la justicia.

Así mismo, la mayoría se manifestaron contra toda acción que resultara en víctimas civiles. Sólo en Estados Unidos, India e Israel la mayoría de los encuestados se pronunciaron por la acción militar.

Si la represalia militar fuera la única opción, la mayoría en 19 países dijeron que sus gobiernos no debían sumarse a Estados Unidos en ataques contra objetivos terroristas, mientras las de 14 países dijeron que sí. Incluso en Es-

tados Unidos y Gran Bretaña, los protagonistas de los ataques contra Jalalabad, Kandahar y Kabula, el apoyo a una contraofensiva general contra el terrorismo parecía débil.

“Hoy nos concentramos en Afganistán, pero la batalla es más amplia”, reiteró Bush. “Cada país debe elegir. En este conflicto no hay terreno neutro. Si algún gobierno apoya a los delincuentes y asesinos de inocentes, se habrán convertido en delincuentes y asesinos ellos mismos. Y tomarán esa vía solitaria a su riesgo”, advirtió.

No obstante, el 62 por ciento de los encuestados estadounidenses y el 82 por ciento de los británicos encuestados en la semana posterior al 11 de septiembre dijeron que las acciones militares sólo se debían tomar contra “las organizaciones terroristas responsables de los atentados”, aun si lleva meses “identificarlos con precisión”.

Las opciones no militares, como la vía de los juicios contra los terroristas, obtuvo el apoyo de entre el 67 y 88 por ciento de los encuestados en los Estados miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y Europa occidental, según Gallup. El apoyo en Europa oriental fue entre el 64 y 83 por ciento, y en América Latina entre el 83 y 94 por ciento.

En Francia el 29 por ciento apoyaron los ataques militares y en Holanda el 28 por ciento, el porcentaje más alto entre los países de Europa occidental. Sin embargo, aquellos que preferían los juicios ascendían al 67 y 68 por ciento, respectivamente.

Sólo un 18 por ciento de los británicos favorecían los ataques militares, en comparación con el 75 por ciento a favor del juicio penal contra los responsables de los atentados.

La menor cantidad de partidarios por la represalia militar se produjo en México (dos por ciento), Grecia (seis por ciento), Croacia y Perú (ocho por ciento respectivamente) y Pakistán (nueve por ciento).

En ninguno de los países donde la mayoría apoyaba la respuesta armada los encuestados dijeron que Estados Unidos debía atacar tanto objetivos militares como civiles.

La tolerancia por las víctimas civiles fue mayor en Israel (36 por ciento), Holanda y Panamá (29 por ciento), Estados Unidos (28 por ciento) e India (22 por ciento).

En su discurso Bush dijo que las “acciones cuidadosamente dirigidas están diseñadas para interrumpir el uso de Afganistán como base de operaciones terroristas, y para atacar la capacidad militar del régimen Talibán”.

El movimiento fundamentalista Talibán gobierna más del 90 por ciento del territorio afgano, donde se encuentra el extremista saudita Osama Bin

Laden, a quien Washington acusa de ser el responsable de los atentados del 11 de septiembre.

Alianza civil contra excesos del antiterrorismo

JIM LOBE

Corresponsal de IPS en Washington.

Más de 150 organizaciones civiles de Estados Unidos comenzaron una movilización para proteger las libertades de estadounidenses y residentes extranjeros de eventuales excesos de la política antiterrorista del gobierno.

La alianza “En defensa de la libertad”, de máxima amplitud pluralista, en la que figuran grupos de izquierda y derecha e incluso una asociación nacional que defiende el derecho a la posesión y porte de armas, criticó un proyecto de ley que endurece la política relativa a los inmigrantes.

El proyecto antiterrorista, presentado al Congreso por el procurador general John Ashcroft, aumenta las facultades de las fuerzas de seguridad para intervenir las líneas telefónicas y de computadoras, obtener datos personales y detener o deportar a extranjeros, destacó la alianza.

Así mismo, amplía la definición de “terrorista”, para incluir a cualquiera que conceda apoyo material a organizaciones terroristas aunque desconozca el carácter y los objetivos de esos grupos.

El clima creado por los atentados favorece la “prisa” por “cambiar las leyes del país sin discutir cómo será afectada nuestra seguridad o nuestra libertad”, advirtió Anthony Romero, director de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), una de las organizaciones de la nueva alianza. “Debemos tomar medidas (contra el terrorismo), pero también mejorar nuestra seguridad y proteger nuestras libertades”, dijo Romero.

Ashcroft instó al Congreso a aprobar su iniciativa, pero varios legisladores, incluso del oficialista partido Republicano, pidieron más tiempo para considerarlo.

El presidente del comité Judicial del Senado, Patrick Leahy redactó un proyecto alternativo, que limita las facultades especiales al gobierno, aunque incorpora algunas de las medidas propuestas por Ashcroft.

“Si vamos a cambiar las leyes en caso de emergencia, tenemos que tener mucho cuidado. Si olvidamos la Constitución, los terroristas habrán vencido”, dijo Leahy.

Estados Unidos tiene una larga historia de respuesta a emergencias nacionales mediante el fortalecimiento de los poderes del gobierno, incluso en colisión con derechos constitucionales.

El presidente Abraham Lincoln, por ejemplo, suspendió el habeas corpus durante la guerra civil (1861-1865), y en la primera guerra mundial (1914-1918) se detuvo a pacifistas por distribuir folletos contra el reclutamiento militar.

El caso más conocido tuvo lugar cuando Washington declaró la guerra a Japón tras el ataque a la base naval de Pearl Harbour, Hawaii, en 1941. Decenas de miles de japoneses-estadounidenses fueron internados sin juicio durante años en campamentos remotos de todo el país.

“La historia nos ha demostrado que en tiempos de calamidad nacional, los derechos y las libertades civiles figuran entre las bajas, junto a las víctimas (de los atentados), cuya pérdida lloramos”, observó Wade Henderson, director de la Leadership Conference on Civil Rights, integrada por 180 grupos nacionales.

La alianza “en defensa de la libertad” se formó “con la esperanza de que las consecuencias de la tragedia” del 11 de septiembre “sean la excepción”, señaló Henderson.

La destrucción de las torres gemelas de Nueva York y el atentado contra el Pentágono (Departamento de Defensa) en Washington, causó al menos 6.300 víctimas, según la última información oficial.

La alianza incluye a grupos de izquierda como People for the American Way, National Lawyers Guild y Women’s International League for Peace and Freedom, así como organizaciones conservadoras como Free Congress Foundation, Eagle Forum, Gun Owners of America y Americans for Tax Reform.

“No podemos y no debemos permitir que nuestras libertades constitucionales sean víctimas de estos violentos atentados”, declaró el representante (diputado) republicano Bob Barr, ex-integrante de la derechista John Birch Society, conocido por su afán por someter a juicio político al ex presidente Bill Clinton.

Las organizaciones de derecha apoyaron al Buró Federal de Investigación (FBI) durante la guerra fría, pero en la última década se alejaron de los organismos de seguridad.

El incidente que produjo ese distanciamiento fue el asalto del FBI en 1991 a un complejo de edificios en Waco, Texas, donde en que una secta religiosa se había atrincherado con armas de fuego.

Otros integrantes de la alianza son organizaciones islámicas, de derechos humanos (como Amnistía Internacional y Human Rights Watch), la Asociación Nacional de Policías Negros, el Consejo Nacional de Iglesias y varios grupos de la comunidad asiática y árabe.

Organizaciones judías también se sumarán a la alianza, después de los festejos en curso por el año nuevo judío, según Mort Halperin, un alto funcionario durante el gobierno de Clinton.

La alianza exigió que se defienda el “derecho a la discrepancia pacífica” y que se resista toda gestión contra “personas debido a su raza, religión, origen étnico o apariencia, incluso contra los inmigrantes en general, árabes estadounidenses y musulmanes”.

El gobierno cree que los atentados del día 11 fueron obra de suicidas musulmanes, dirigidos por el extremista saudita Osama Bin Laden. Los actos terroristas desataron ataques contra mezquitas y supuestos musulmanes en todo el país, en los cuales habrían muerto tres personas.

El gobierno denunció estos ataques y el FBI prometió investigar y perseguir a los responsables. El presidente George W. Bush visitó la mezquita más conocida de Washington para expresar su apoyo a la comunidad de musulmanes en Estados Unidos, calculada en 6,5 millones de personas.

Dirigentes de la alianza civil elogiaron la actitud del gobierno, pero advirtieron que algunas de las medidas incluidas en el proyecto de ley de Ashcroft seguramente perjudicarán a la comunidad árabe y musulmana, al igual que a los inmigrantes en general

Pacifistas reman contra corriente

YOJANA SHARMA

Corresponsal de IPS en Berlín.

En toda Europa se suceden las manifestaciones contra las anunciadas represalias de Estados Unidos por los atentados de Nueva York y Washington, aunque es difícil remar contra la corriente, que es favorable a la guerra contra el terrorismo internacional.

En los últimos días se celebraron manifestaciones en Amsterdam, Barcelona, Frankfurt, Londres, Roma y en ciudades alemanas, pero los pacifistas son superados por quienes respaldan la intención de Estados Unidos de atacar a Afganistán para atrapar vivo o muerto al extremista saudita Osama Bin Laden.

Bin Laden se halla en Afganistán y, según Washington, es el principal sospechoso de los atentados del 11 de septiembre, que dejaron 6.000 muertos.

Los pacifistas critican la declaración del presidente estadounidense George W. Bush que asegura que quien no esté con Estados Unidos está con los terroristas.

“Un tercio de los estadounidenses no quieren represalias si éstas implican matar a civiles inocentes. Bush se equivoca al llamarlos traidores”, sostuvo el partido Verde de Gran Bretaña, cuyo gobierno es el primer aliado de Washington.

El partido Verde alemán, que como el británico tiene sus raíces en los movimientos pacifistas de los años 60 y 70, integra el gobierno de Gerhard Schroeder y está dividido ante la guerra de Washington contra el terrorismo.

El ministro de Relaciones Exteriores, Joschka Fischer, del partido Verde, respalda la anunciada acción militar de Estados Unidos. Muchos de sus correligionarios exigieron su renuncia y el retiro del partido de la coalición gobernante.

Comentaristas políticos, e incluso el legislador del Parlamento Europeo Daniel Cohn Bendit, también del partido Verde alemán, pronostican que el grupo abandonará el gobierno.

Muchas de las 16 organizaciones regionales que integran el partido en Alemania son contrarias al uso de soldados alemanes en respaldo de Estados Unidos. “Este tema podría acabar con los verdes”, dijo Reinhard Loske, diputado del partido.

Mientras Schroeder llegaba a la localidad británica de Brighton para apoyar la postura militarista del primer ministro Tony Blair en la conferencia del Partido Laborista, el partido Verde de Gran Bretaña pidió a Fischer que retire su “apoyo inequívoco” a Washington.

“¿Si los verdes renuncian a abogar por la paz, quién queda para argumentar por un mundo mejor?”, se preguntó Penny Kemp, presidenta del partido Verde de Inglaterra y Gales en una carta abierta a Fischer.

“El futuro de la civilización exige la búsqueda de la seguridad internacional mediante la paz y la cooperación, no escalando el ciclo de violencia”, agregó.

“Confiamos en que se reunirán pruebas suficientes para permitir a los tribunales internacionales procesar a quien sea responsable de los atentados del 11 de septiembre. Si no es así, entonces tomar represalias contra inocentes es moralmente indefendible”, sostuvo el Partido Verde británico.

No obstante, muchos pacifistas no se manifiestan en público para evitar que su postura sea interpretada como un respaldo a los autores de los atentados.

Aquellos que lo hacen han tenido problemas. La fiscalía de Berlín acusó de calumnia a los manifestantes contra la guerra en esa ciudad por gritar “Estados Unidos, centro internacional para el genocidio”, en una manifestación en los últimos días.

En este contexto, los moderados debieron abandonar los eslóganes contra la guerra por una táctica menos radical. “Al apoyar los gritos de guerra... malinterpretamos la naturaleza de nuestra amistad con Estados Unidos. La amistad también significa impedir que alguien participe en acciones insensatas”, dijo Harald Fiedler, de la Confederación de Sindicatos Alemanes.

Los europeos tienen el deber de detener a Estados Unidos, dijo. “Estados Unidos: compartimos vuestro dolor, pero ustedes deben compartir nuestras inquietudes”, dijo Yasmin Alibhai Brown, comentarista musulmán en Gran Bretaña.

Las manifestaciones contra la guerra han sido escasas y pequeñas en Alemania, y también fueron pocos los debates por televisión que permiten a los pacifistas expresar sus puntos de vista. Pero hay claros indicios de que muchos alemanes no apoyarían una guerra de Estados Unidos. Varios reservistas del ejército, por ejemplo, se consideran objetores de conciencia en este caso. “Normalmente recibimos dos llamadas diarias de reservistas informándonos de sus objeciones. Ahora estamos atendiendo entre 10 y 20 por día”, dijo Michael Berendt, asesor de la Campaña contra el Servicio Militar Obligatorio.

Los reservistas alemanes pueden ser llamados en caso de crisis militar, pero pueden ejercer sus derechos como objetores de conciencia.

La televisión patriota

JIM LOBE

Corresponsal de IPS en Washington.

Estados Unidos no es el mejor lugar para buscar una cobertura periodística objetiva sobre las consecuencias internacionales de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y en esta capital. Cuando el presidente George W. Bush prometió librar una “guerra contra el terrorismo”, el conductor del noticiero de la cadena CBS, Dan Rather, reaccionó como un patriota. “George Bush es el presidente, él toma las decisiones y, ustedes saben, como un estadounidense más, (si) él me pide que me aliste, sólo díganme dónde tengo que ir”, dijo Rather, uno de los presentadores de televisión más vistos en este país de más de 270 millones de habitantes. Fue un mal presagio para la independencia de la prensa, que sufrió otro golpe sin precedentes tras una conferencia telefónica de 30 minutos entre la consejera nacional de seguridad Condoleezza Rice y ejecutivos de las principales cadenas de televisión. Entonces, los representantes de los servicios informativos de ABC, CBS, NBC, Fox, MSNBC y CNN acordaron que no transmitirán en vivo, ni en su totalidad ninguna declaración grabada en vídeo de Osama Bin Laden ni de portavoces de su organización, Al Qaeda.

Estados Unidos considera a Bin Laden responsable de los atentados que el 11 de septiembre destruyeron las torres gemelas de Nueva York y demolieron parcialmente el edificio del Pentágono, en Washington.

Las cadenas de televisión también convinieron que, en caso de que las declaraciones de Bin Laden o Al Qaeda sean “de interés periodístico”, serán editadas sustancialmente y se eliminará todo aquello que el gobierno considere provocativo.

“Luego de haber escuchado a la Dra. Rice, no vamos a pisar las minas terrestres que ella nos mencionó”, dijo Walter Isaacson, presidente de CNN, en declaraciones al diario *The New York Times*. Otro ejecutivo de la televisión dijo que la decisión de las cadenas se basó en razones de “patriotismo”.

Las críticas no se hicieron esperar. Las cadenas de televisión temen “transmitir algo que sea controvertido o que parezca antipatriota a sus auspiciantes o al público”, comentó Daniel Hallin, de la Universidad de California en San Diego.

Que las cadenas aceptaran el intento del gobierno de manejar lo que el público ve y oye no es nuevo, según Hallin, autor de una reconocida historia de la cobertura televisiva de la guerra de Vietnam.

“Los medios de comunicación (de Estados Unidos), y especialmente la televisión, siempre fueron reacios a transmitir la voz del enemigo, sobre todo en tiempos de guerra”, agregó.

“Cuando Estados Unidos va a la guerra, también lo hace su prensa, tan llena de orgullo, temor y ansiedad como cualquier soldado”, escribió en el diario Washington Post un ex reportero de CBS, Marvin Kalb.

El portavoz de la Casa Blanca, Ari Fleischer, dijo a la prensa poco después de los atentados de septiembre que la situación exigía a todos “vigilar lo que decían”. Fleischer respondía así a un cómico de televisión que opinó que era más “cobarde” lanzar misiles a 3.000 kilómetros de distancia del objetivo que pilotar aviones contra las torres gemelas, como hicieron los terroristas.

Aunque Fleischer aclaró posteriormente que no pretendía censurar a nadie, sus palabras iniciales resultaron proféticas, dados los intentos de Washington por controlar la transmisión de noticias y la información, incluso la que recibe el Congreso legislativo.

Bush ordenó esta limitar la entrega de información clasificada (reservada) a sólo ocho legisladores en el Congreso. Se trata de una restricción sin precedentes, que fue resuelta debido a que un legislador filtró a la prensa la declaración de un funcionario que indicaba la certeza de que Estados Unidos sufriría otro atentado.

El presidente recapacitó y aceptó autorizar la entrega de documentación a todos los integrantes de comisiones legislativas clave, pero su intención inicial parece responder a una tendencia más amplia del gobierno.

El secretario de Defensa Donald Rumsfeld dijo que “en época de guerra, la verdad es tan valiosa que siempre debe ser asistida por un guardaespaldas de mentiras”, repitiendo las palabras de Winston Churchill, primer ministro británico durante la segunda guerra mundial.

El vicepresidente Dick Cheney dirigió la estrategia del gobierno para manejar la información durante la guerra del Golfo contra Iraq, en 1991.

Los periodistas que cubrían ese conflicto sólo podían obtener información oficial sobre las operaciones en curso en salas de prensa del gobierno en la localidad de Dahrán, Arabia Saudita, y en el edificio del Pentágono en Washington.

El secretario de Estado Colin Powell también mostró su inclinación por recortar la información. Rechazó una invitación a hablar en una sesión pública del comité de Relaciones Exteriores del Senado y, en cambio, llamó a los

miembros del comité a conversar con él en forma privada en el Departamento de Estado.

Powell también habría solicitado al emir de Qatar, propietario de la red de televisión Al Jazeera, que transmite a todo el mundo árabe, que la emisión de su canal no avive el sentimiento contra Estados Unidos. Al Jazeera fue quien proporcionó los vídeos de Bin Laden a las cadenas estadounidenses.

La Casa Blanca dijo que su pedido a la televisión estadounidense tiene dos razones. “En el mejor de los casos, el mensaje de Osama Bin Laden es propaganda que convoca a la gente a matar a estadounidenses”, dijo Fleischer a la prensa. “En el peor, podría dar órdenes a sus seguidores para lanzar atentados similares” a los del 11 de septiembre, agregó.

Funcionarios de Washington estudian los vídeos de Bin Laden para determinar si el saudita enviaba mensajes codificados a sus agentes para que lanzaran nuevos atentados.

La mayoría de los analistas consideran rebuscada esa idea, sobre todo porque los presuntos agentes de Al Qaeda tendrían acceso a Internet y podrían ver los videos de otras fuentes ajenas a la televisión estadounidense.

El argumento de los vídeos como propaganda hace agua, según expertos independientes. “Es una tontería decir que la opinión pública occidental será manipulada por los vídeos de Bin Laden. El público al que éste se dirige está en el mundo árabe”, afirmó Hallin.

Para Jeff Cohen, analista y fundador de la organización independiente Equidad y Precisión en la Cobertura Periodística (FAIR), lo que dice Bin Laden “tiene interés periodístico”.

“Es un tipo malo que explota resentimientos reales contra Estados Unidos en el mundo árabe, y el público debe saber lo que está diciendo”, sostuvo Cohen.

A otros analistas les preocupa que la televisión haya acatado el pedido del gobierno. “Esta podría ser una pendiente resbaladiza”, advirtió William Dorman, profesor de periodismo en la Universidad Estatal de California en Sacramento.

“Puede conducir a un tipo de mentalidad proclive a aceptar otras limitaciones que sugiera el gobierno, incluso más graves”, observó Dorman.

Neonazis señalados por atentados con ántrax

GUSTAVO GONZÁLEZ

Corresponsal de IPS en Santiago de Chile.

Neonazis de Estados Unidos podrían ser los autores de los atentados con ántrax por vía postal cometidos en ese país, advirtió el periodista chileno Raúl Sohr, experto en defensa y política internacional.

Sohr presentó en Santiago una versión revisada y actualizada de su libro “Las guerras que nos esperan”, cuya primera edición fue en agosto de 2000, que ahora lleva como subtítulo “El primer golpe” e incluye un capítulo de 50 páginas acerca de los ataques del 11 de septiembre contra Nueva York y Washington.

El libro alertó en el 2000 sobre las posibles derivaciones de la “explosiva” relación que la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA) entabló en 1979 tras la invasión soviética a Afganistán con el líder islámico saudita Osama Bin Laden.

También en la primera edición de “Las guerras que nos esperan” se consigna el caso de Larry Harris, de la organización neonazi Nación Aria, arrestado en mayo de 1995 en el nororiental estado de Ohio, Estados Unidos, recordó el propio Sohr, analista de información internacional de la Televisión Nacional de Chile.

Harris era empleado de un importante laboratorio y se encontraron en su poder bacterias que provocan fiebre bubónica, almacenados por los neonazis para cometer atentados contra estadounidenses.

Dado ese antecedente, el periodista llamó la atención acerca de los envíos postales de bacterias de ántrax en Estados Unidos y Europa. “Es muy probable que esto sea el trabajo de algunos norteamericanos de extrema derecha, más que un hecho vinculado con (los atentados de) el 11 de septiembre”, dijo.

Estados Unidos tuvo una “falla de inteligencia” que posibilitó los ataques a las torres gemelas del World Trade Center de Nueva York y el Pentágono, sede del Departamento de Defensa en Washington.

La inteligencia estadounidense “estaba mirando en la dirección equivocada, concentrado en el sistema de defensa antimisiles”, agregó Sohr.

El hecho de que aún no se tengan pistas claras acerca del origen de los atentados con ántrax “es otra falla de inteligencia” y una renovada demostración de lo erróneo de las hipótesis de conflicto manejadas hasta el 11 de septiembre por la CIA, continuó el experto.

“En mi libro cito un caso, pero hay varios en Estados Unidos de milicias de extrema derecha que han estado trabajando con armas biológicas”, señaló Sohr.

“Por lo que hemos sabido, al parecer las cepas de ántrax provienen de Estados Unidos, de laboratorios militares, y algunos de estos elementos de extrema derecha tenían vinculación con laboratorios militares”, agregó.

“El otro elemento que apoya mi hipótesis es que las víctimas de estos ataques con ántrax no son precisamente los que uno pudiera considerar como enemigos de los fundamentalistas que cometieron los ataques del 11 de septiembre, sino que más bien son gentes de orientación progresista”, dijo el periodista.

Además, “la forma en que se están llevando adelante los ataques en distintos puntos de Estados Unidos no da la impresión de que esto pueda ser algo directamente vinculado a Al Qaeda (la red que encabeza Bin Laden) o alguna organización similar”, añadió Sohr.

“Por lo tanto, creo que hay antecedentes para pensar que estos ataques con ántrax provienen de la extrema derecha, y de hecho las autoridades norteamericanas han sido muy cautas en no apuntar el dedo hacia Al Qaeda u otra organización fundamentalista, absteniéndose de dar una opinión”, concluyó.

Estados Unidos destina cada año 30.000 millones de dólares a sus servicios de Inteligencia, por lo cual “no deja de ser extraordinario no tener idea de dónde proviene” la ola de atentados con ántrax, recalcó Sohr.

La hipótesis de Raúl Sohr se corresponde con la del Washington Post, que citando fuentes de inteligencia coincidió en que los atentados con ántrax serían realizados por grupos derechistas estadounidenses.

El periodista señaló que en el origen del actual conflicto actuaron las “razones de Estado” como justificativo de operaciones políticas en que se dejan de lado aspectos éticos y legales.

En 1979, tras la invasión de la Unión Soviética a Afganistán, Estados Unidos y Arabia Saudita destinaron 7.000 millones de dólares al adiestramiento de un ejército irregular de 80.000 guerrilleros musulmanes fundamentalistas procedentes de países como Egipto, Argelia y el propio reino saudita.

La operación realizada a través del servicio secreto de Pakistán, se justificó con el argumento de infligir una derrota a los soviéticos, dijo Sohr.

Ese objetivo se cumplió, pues el fin de la ocupación de Afganistán en 1989 fue el preámbulo de la caída del muro de Berlín ese mismo año y de la posterior disolución de la Unión Soviética, dijo Sohr.

“Una docena de años más tarde, Estados Unidos cosecha las semillas amargas sembradas en Afganistán. Algunos de los fundamentalistas islámicos, como Osama Bin Laden, que recibieron su bautizo de fuego y se acercaron en la lucha contra los soviéticos, formaron la red Al Qaeda para luchar contra sus viejos aliados”, señaló el analista.

Como consecuencia de la operación de la CIA en Afganistán, financiada también con el tráfico de heroína, la drogadicción creció de manera exponencial.

“En 1979 casi no había adictos a la heroína en Pakistán. Hoy, los consumidores de la droga provenientes de Afganistán superan los cinco millones”, según el periodista.

Sohr plantea en su libro que “la caída del muro de Berlín llevó a la caída de las torres gemelas de Nueva York”, y que los hechos del 11 de septiembre hacen que “el combate al terrorismo marque la pauta de las relaciones entre los países”.

Bajo ese prisma, “los conflictos se libran en una zona gris, sin campos de batalla, en que los ejércitos tradicionales pasan a una segunda línea, y donde ya no se lucha por ocupar territorios, sino por supuestos objetivos valóricos”, apuntó.

Según Sohr, es indudable que la actual ofensiva militar encabezada por Estados Unidos culminará con la derrota del régimen de Talibán, organización islámica que controla el 90 por ciento del territorio.

A continuación, podría instalarse un nuevo gobierno que dé alguna estabilidad a ese país del Asia central, salvo que se “talibanicé” el vecino Pakistán con un levantamiento que instale allí otro gobierno fundamentalista.

Los ataques de septiembre produjeron un cambio fundamental en las relaciones internacionales, en que Estados Unidos busca aliados en su lucha contra el terrorismo, lo cual favorece a Rusia y China, como se evidenció en la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en Shangai.

Es una hipótesis muy probable la de la consagración de un “gobierno mundial” del grupo de los siete países más ricos (Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Francia, Japón, Alemania e Italia) junto con Rusia y China, señaló Sohr ante una pregunta.

Eso supondría un mayor retroceso de la Organización de las Naciones Unidas como expresión del multilateralismo, afirmó.

El experto chileno coincidió con otros analistas en que en este nuevo escenario internacional de lucha contra el terrorismo aumentarán los controles a la población, en especial a los emigrantes de países de mayoría musulmana, con un retroceso significativo de los derechos humanos.

Ley de patentes agrava amenaza de ántrax

RANJIT DEVRAJ

Corresponsal de IPS en Nueva Delhi.

Fueron necesarios el pánico por el terrorismo biológico en Estados Unidos y una oferta de fármacos baratos de India para destacar la falta de acceso a medicamentos esenciales en todo el mundo por causa de las leyes de patente.

La compañía india Ranbaxi Laboratories ofreció a Estados Unidos a precios “muy atractivos” 20 millones de tabletas de ciprofloxacina, a entregar a mediados de diciembre, para el combate contra el ántrax, pero la oferta se opone a la patente del laboratorio alemán Bayer, válida hasta diciembre del 2003.

La patente de Bayer podría incluso impedir a Washington aceptar una donación de ciprofloxacina por un millón de dólares ofrecida por el canciller indio Jaswant Singh. La ciprofloxacina es el nombre genérico del antibiótico Cipro, de Bayer.

Legisladores estadounidenses reclamaron levantar las restricciones de la patente de Bayer en vista del creciente número de casos de ántrax causados por cartas contaminadas con esa bacteria, de remitentes desconocidos.

Paradójicamente, fue Estados Unidos el que presentó una queja contra India ante el panel de resolución de disputas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en 1999. El panel obligó a India a elaborar leyes sobre patentes y mientras tanto conceder derechos de comercialización exclusivos a los propietarios extranjeros de patentes. Así comenzó el proceso de reversión de las políticas perseguidas por Nueva Delhi desde 1970, que debilitaron en forma sistemática la protección de la propiedad intelectual para garantizar la

disponibilidad a bajo costo de varias drogas. Esas políticas promovieron el crecimiento de una fuerte industria farmacéutica que emplea a más de medio millón de personas y pusieron bajo control del gobierno los precios de los fármacos. Con el tiempo, los laboratorios indios desarrollaron la estrategia de vender sus productos en el país y luego trasladarse a mercados internacionales en cuanto vencían las patentes. “La próspera industria farmacéutica de India demostró que los medicamentos pueden producirse a bajo costo y con rentabilidad para los mercados locales, cuando no tienen que pagar derechos exorbitantes”, señaló Mira Shiva, de la Asociación Voluntaria de India para la Salud. Funcionarios de salud de Estados Unidos dijeron que la ciprofloxacina cuesta ahora cerca de 1,83 dólares por tableta, pero que no van a pagar tanto en las actuales circunstancias. Ranbaxy y su rival Cipla miran con ambición el mercado de ciprofloxacina en Estados Unidos, donde la droga se vendió el año pasado a cinco dólares cada 500 tabletas. Ambos laboratorios indios ofrecen en el mercado doméstico versiones genéricas de la droga a sólo 12 centavos de dólar cada 500 tabletas. Una salida para Estados Unidos podría ser la licencia obligatoria prevista en las normas de la OMC sobre derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (TRIPs, por sus siglas en inglés), que permite a los países miembros vender productos locales baratos por cuestiones de interés público. Pero las poderosas compañías farmacéuticas transnacionales resisten la licencia obligatoria, en especial los esfuerzos a favor de ella en países en desarrollo. Varias de esas compañías están radicadas en Estados Unidos y reclaman mayor protección para sus patentes que la prevista en el acuerdo sobre TRIPs. La Federación Internacional de Asociaciones de Laboratorios Farmacéuticos se opone a la licencia obligatoria con el argumento de que restringe los incentivos para la investigación y el desarrollo y aplaza la búsqueda de medicamentos nuevos y mejores.

Según Shiva, la reacción de la Federación es exagerada, dado que de todos modos la industria farmacéutica mundial factura cada año unos 400.000 millones de dólares, de los cuales los países en desarrollo obtienen una porción insignificante.

Incluso en medio de la crisis del ántrax, Estados Unidos no tiene interés en cambiar el injusto régimen mundial de patentes, sino apenas en resolver la escasez específica de ciprofloxacina, lamentó la activista.

“Finalmente, se está haciendo evidente que incluso los países industrializados necesitan medicamentos baratos en tiempos de crisis”, concluyó Amit Sen Gupta, experto en fármacos del Foro de Ciencia de Delhi, una organización independiente.

Triste vigilia de árabes y asiáticos

AKHILESH UPADHYAY

Corresponsal de IPS en Nueva York.

Las minorías sudasiática y musulmana esperan que decaiga la xenofobia propagada en Nueva York desde los atentados del 11 de septiembre, y que no sea una barrera étnica permanente en la ciudad más multicultural de Estados Unidos.

Jail Singh Chauhan, un tranquilo conductor de taxi nacido en el estado indio de Punjab, nunca tuvo tan pocos pasajeros como después de los atentados contra las torres gemelas del World Trade Center, en esta ciudad, y contra el edificio del Pentágono, sede del ministerio de Defensa en Washington.

“Estamos como muertos”, dijo Chauhan, sintetizando el sentir de muchos conductores de taxi de Nueva York que, como él, proceden de Asia meridional. Muchos de los 92.000 choferes registrados en la Comisión de Taxis y Limusinas de la ciudad son indios y pakistaníes.

Los ingresos de los taxistas asiáticos cayeron en un 50 por ciento desde el 11 de septiembre. “No recuerdo tiempos peores”, dijo Chauhan, que lleva el turbante de la religión sij. Algunos pasajeros detienen su vehículo, pero se alejan cuando ven su vestimenta y su rostro. “No puedo cambiar mi cara porque no les guste, ¿verdad?”, comentó.

Otros pasajeros escuchan amistosamente el relato de sus penas. En agradecimiento, el taxista no les cobra el viaje. El rechazo a la población árabe, musulmana y sij se manifestó en Estados Unidos incluso antes de que Washington responsabilizara de los atentados al musulmán saudita Osama Bin Laden. Chauhan es uno de los cientos de miles de sudasiáticos de Nueva York que temen la consolidación de una nueva barrera racial.

La información del censo de población del 2000 alimenta esos temores. Según esas cifras, los vecindarios con población asiática de Nueva York y de otras ciudades se están convirtiendo en guetos, con altos porcentajes de delincuencia, escasez de escuelas y centros de salud y pobres perspectivas laborales.

En la última década se registró una marcada tendencia de la población asiática a vivir en vecindarios propios en las ciudades grandes. Entre 1990 y 2000, la población india se duplicó en Nueva York. Más de 170.000 indios residen en la ciudad, constituyendo la segunda comunidad asiática detrás de los

habitantes de origen chino, que son 362.000. En tercer lugar figuran los coreanos, unas 87.000 personas.

Crece así mismo la población procedente de Pakistán y Bangladesh. Instituciones locales aseguran que los nepalíes son más de 10.000, la mayoría de sherpas, aunque el censo no los distingue como grupo étnico.

Las noticias de agresiones raciales causan un terrible efecto en estas comunidades. Desde el 11 de septiembre, el odio racial se cobró dos víctimas: un pakistaní en el estado de Texas, y un sij en Arizona. Mezquitas y templos hindúes sufrieron actos vandálicos. La policía de Nueva York aún investiga un ataque contra un periodista de origen pakistaní.

Pero el mayor daño es sutil: las miradas recelosas en el tren, en el trabajo o en lugares públicos, y otras formas de aislamiento social.

También hay quienes auxilian a sus vecinos o amigos árabes y sudasiáticos, acompañándolos a realizar compras o visitar al médico, para que venzan el temor a mostrarse en público.

Apenas horas después del atentado contra el World Trade Center, las autoridades municipales informaron de agresiones contra los musulmanes y dispusieron vigilancia policial en mezquitas y otros centros comunitarios.

Pero el temor subsiste. Muy cerca del apartamento donde vive Chauhan, en el vecindario de Flushing, condado de Queens, la concurrencia a una mezquita afgana cayó notablemente, pese a que no hubo allí ningún hecho de violencia.

“Nuestra gente (los musulmanes) se siente incómoda, si bien no conozco a nadie que haya sido agredido en Nueva York”, dijo el imán Mohammed Yusufi.

Los ataques terroristas dejaron “entristecida a nuestra comunidad y esa tristeza está acompañada por la preocupación por nuestros hermanos en Afganistán y aquí”, dijo Yusufi, hablando mediante un intérprete en la puerta del templo.

Cientos de musulmanes se recluyeron luego de los atentados en su vivienda o abandonaron la vestimenta tradicional que los identifica. También muchos sijos dejaron de usar sus turbantes.

Una mujer pakistaní relató sus temores en una carta publicada por el diario local Newsday. “Cuando se dijo que los secuestradores de los aviones eran árabes musulmanes, hubo tal pánico en nuestra comunidad que casi nadie quería salir a la calle”, aseguró Humera Manzoor.

Muchas mujeres musulmanas fueron agredidas y les fue arrancado el velo. “En las escuelas, algunos niños son golpeados por quienes antes eran sus

amigos”, señaló Manzoor. Según las autoridades, cayó la asistencia a clases de niños, niñas y adolescentes de comunidades árabes y asiáticas.

Se calcula que 650 pakistaníes e indios murieron en el atentado a las torres gemelas, si bien aún no hay datos oficiales. Pero entre el miedo a las represalias y las penurias económicas, hay poco espacio para el duelo. A la hora del almuerzo en uno de los restaurantes afganos de la ciudad sólo se veía a los meseros. “Son malos tiempos, como puede ver”, dijo uno de ellos, de origen pakistaní.

Los comercios de la comunidad asiática sufren por la retracción general del consumo y porque el grueso de su clientela, también asiática, evita en lo posible las salidas y las compras.

Algunos observadores advierten que la situación podría empeorar a medida que avance la guerra de Estados Unidos contra Afganistán.

Durante la guerra del Golfo, de 1991, la agresión a minorías étnicas En Estados Unidos comenzó al conocerse las primeras bajas de tropas estadounidenses en suelo iraquí, dijo Sreenath Srinivassan, profesor de periodismo de la Universidad de Columbia.

Un país rigurosamente vigilado

JIM LOBE

Corresponsal de IPS en Washington.

El Senado de Estados Unidos aprobó casi por unanimidad un proyecto de ley antiterrorista que organizaciones de derechos humanos consideran inconstitucional y contrario a las libertades básicas.

El proyecto fue aprobado por 98 votos contra uno, mientras que la Cámara de Representantes había respaldado la iniciativa por 357 votos contra 66. Si bien artículos extremadamente severos no fueron aceptados, Bush logró la aprobación de casi todas sus propuestas.

El gobierno presentó el proyecto de ley antiterrorista luego de los devastadores atentados contra las torres gemelas de Nueva York y el edificio del Pentágono (Departamento de Defensa) en Washington, el 11 de septiembre.

La futura ley amplía los poderes del gobierno federal y otorga mayor autoridad a los servicios de seguridad para realizar operaciones de vigilancia, intervenir comunicaciones e investigar en secreto a sospechosos de terroris-

mo, mientras limita la fiscalización judicial. La norma incrementa las sanciones para quienes alberguen terroristas o los financien e introduce cambios en el derecho al debido proceso.

Por ejemplo, las autoridades pueden retener a esos inmigrantes sospechosos un máximo de siete días antes de presentarlos ante el juez.

Otra medida controvertida faculta al director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a elegir objetivos de vigilancia dentro de Estados Unidos, algo que tenía prohibido hasta el momento.

El proyecto de ley también amplía la definición de “terrorismo interno”, de tal manera que los promotores o participantes en protestas por razones políticas podrían ser sometidos a la intervención de sus comunicaciones e incluso a proceso penal.

La iniciativa fortalece leyes existentes contra el lavado de fondos de origen ilícito y agrega varias figuras penales -terrorismo, fraude, corrupción y contrabando- a la lista de delitos sujetos a las leyes federales de lavado de dinero.

La aprobación del proyecto de ley, luego de cinco semanas de intensos debates y negociaciones, se produjo mientras otros países toman medidas similares tras los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y Washington.

La Unión Europea (UE) considera legislación que reduciría en gran medida los derechos de los inmigrantes.

Los gobiernos de Canadá e India presentaron a sus parlamentos iniciativas que ampliarían los poderes del Estado a costa del contralor judicial y las libertades civiles, advirtieron Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW) y otros grupos de derechos humanos.

Los mismos grupos manifestaron su preocupación ante el proyecto votado por el Congreso estadounidense, especialmente por sus eventual impacto sobre los extranjeros.

HRW y el Comité de Abogados por los Derechos Humanos, ambos con sede en Nueva York, sostienen que la ley permitiría al Departamento de Justicia detener a los extranjeros en forma indefinida, si no puede deportarlos, mientras crea que representan una amenaza para la seguridad nacional.

“Tanto ciudadanos como no ciudadanos (estadounidenses) tienen el derecho a no ser detenidos en forma arbitraria o indefinida”, advirtió el director de HRW Kenneth Roth.

“A la vez que Estados Unidos se defiende del terrorismo también debe reforzar la defensa de las libertades que han caracterizado al país”, agregó.

Incluso antes de que el Congreso aprobara el proyecto, estas organizaciones manifestaron inquietud porque unas 1.000 personas, casi todos inmi-

grantes musulmanes sin ciudadanía estadounidense, continúan detenidos en relación con los atentados del 11 de septiembre.

La mayoría fueron retenidos como “testigos materiales” de los hechos o por delitos menores de inmigración. Uno de ellos, un pakistaní que permaneció en el país luego de que venciera su visa, murió de una enfermedad cardíaca en una cárcel de Nueva Jersey, donde había sido llevado.

“Tiene que haber más apertura y transparencia. Hemos pedido más información sobre quiénes son detenidos y si tienen acceso a un abogado. Pero no obtuvimos nada”, explicó Jeanne Butterfield, directora de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración. Algunos activistas creen que los artículos más polémicos de la nueva ley, sobre todo los que afectan los derechos de los inmigrantes, serán cuestionados en los tribunales, según Nancy Chang, abogada con el Centro de Derechos Constitucionales.

“El sistema judicial tendrá la opción de defender la Constitución o aceptar su avasallamiento”, destacó.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) expresó su “profunda desilusión” con el proyecto de ley y la rapidez con que fue aprobado por el Congreso.

No obstante, legisladores conocidos por su defensa de las libertades civiles y que votaron por el proyecto antiterrorista dijeron que lograron importantes concesiones del gobierno que, en un principio, había solicitado que los inmigrantes sospechosos fueran detenidos indefinidamente, sin supervisión judicial.

Así mismo, lograron que las medidas más polémicas, que amplían las facultades de vigilancia del gobierno, caduquen a los cuatro años, salvo que el Congreso vote la extensión de su aplicación.

“Artículo tras artículo, hemos agregado garantías que no existían en el proyecto (original) del gobierno”, declaró el senador Patrick Leahy, presidente del Comité Judicial de la cámara alta.

“Hemos hecho todo lo posible para proteger al pueblo estadounidense del abuso de esta nueva herramienta de aplicación de la ley”, aseguró.

DOLOR AFGANO

Otra guerra amenaza a un país devastado

NADEEM YAQUB

Corresponsal de IPS en Peshawar, Pakistán.

Una nueva guerra se cierna sobre Afganistán, devastado por 23 años de conflictos armados, graves disturbios sociales y la postración económica.

La población afgana está familiarizada con combates, armas y municiones, y también con la muerte, la miseria, la destrucción y otros males asociados con la guerra. Es posible que ningún otro país tenga más experiencia reciente en la materia.

Estados Unidos, la mayor potencia militar, se dispone a enfrentarse con los combatientes afganos, veteranos de la guerra de guerrillas contra enemigos externos e internos.

Esas guerrillas se desarrollaron en gran medida a partir del apoyo militar y económico de Estados Unidos a la resistencia afgana contra la ocupación soviética, prolongada de 1979 a 1989.

Washington respaldó la convocatoria a musulmanes de otros países para integrar esa resistencia, uno de cuyos organizadores y líderes fue el magnate saudita Osama Bin Laden, hoy considerado por el gobierno estadounidense como el principal sospechoso de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y Washington que costaron 6.800 muertos

La exigencia de entregar a Bin Laden planteada por el gobierno estadounidense al Talibán, movimiento fundamentalista islámico que gobierna el 90 por ciento de Afganistán, país de 23 millones de habitantes, es la causa de que la guerra se cierna sobre ese país.

Además, Washington trata de forjar una amplísima coalición internacional para lo que llama “guerra contra el terrorismo”, no sólo con sus aliados tradicionales de Occidente, sino también con gobiernos como el de Pakistán, uno de los tres países musulmanes que reconocen al Talibán como gobierno de Afganistán. Los otros dos son Arabia Saudita y Emiratos Arabes Unidos.

El entrenamiento de los guerrilleros islámicos o “mujaidines” que lucharon contra el ejército soviético, y en especial de quienes hoy integran el Talibán, fue implementado en gran parte por el ejército pakistaní, un tradicional aliado de Washington con intereses geopolíticos propios en Asia central y meridional.

En la actualidad, el gobierno pakistaní afronta una grave crisis económica, agravada por sanciones internacionales desde sus ensayos de armas nucleares en mayo de 1998, y es acusado de albergar a terroristas islámicos, lo cual aumenta su aislamiento.

En ese contexto, el presidente Pervez Musharaf, quien tomó el poder en octubre de 1999, tiene muy escaso margen ante la presión de Estados Unidos, que le exige una amplia cooperación.

Hasta ahora, el Talibán ha exigido a Washington que aporte pruebas de sus acusaciones contra Bin Laden, y señaló que en todo caso estaría dispuesto a extraditarlo para que sea juzgado en otro país musulmán. Una delegación de alto nivel de Islamabad ha tratado en vano de convencer al Talibán de que entregara al saudita.

El asunto fue considerado por el Gran Consejo Islámico de Afganistán, una asamblea de clérigos, que decidió solicitar a Bin Laden que abandone el país por su propia voluntad, “en un plazo razonable”.

Los clérigos expresaron pesar por los ataques terroristas en Estados Unidos, y pidieron su investigación a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Organización de la Conferencia Islámica, que reúne a los países musulmanes.

También solicitaron a Estados Unidos que deje de referirse a su ofensiva antiterrorista con la palabra “cruzada”, que evoca un conflicto entre religiones. Washington rechazó esa posición y enfatizó que quiere “hechos y no palabras”.

El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, había advertido que trataría del mismo modo a los terroristas y a quienes los albergan. El mulá Mohammed Omar, líder del Talibán, sostuvo que Washington emplea a Bin Laden como pretexto para destruir el régimen islámico de Afganistán.

Omar aseguró que el Talibán no permite al saudita emplear a Afganistán como base para ataques, y que le quitó todos sus medios de comunicación con otros países.

Ante los ataques estadounidenses contra Afganistán, el Gran Consejo Islámico convocó a una “guerra santa” del mundo musulmán contra Washington y sus aliados.

La situación actual cambia en forma sustancial las estrategias geopolíticas para la región.

Pakistán ha establecido condiciones para cooperar con Estados Unidos, entre ellas la de que su rival regional, India, no participe en eventuales ataques contra Afganistán, y que tampoco lo haga Israel, para no aparecer aliado con

Tel Aviv contra otro país musulmán. También solicitó el levantamiento de las sanciones económicas impuestas en 1998.

El aumento de la presencia estadounidense en la región puede determinar que China y Rusia consideren necesario defender en ella sus propios intereses.

Desde el punto de vista humanitario, es probable que millones de afganos pasen a depender pronto de asistencia alimentaria para sobrevivir, opinó antes que comiencen los ataques el portavoz en Islamabad del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Khalid Mansoor.

Tres años de sequía en varias partes de Afganistán y la guerra civil en la región septentrional de ese país han causado el desplazamiento interno de unas 900.000 personas que dependen en la actualidad del PMA.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados consideró probable que más de un millón de afganos traten de trasladarse a Pakistán, donde ya hay más de 2,3 de afganos refugiados, al producirse los ataques estadounidenses contra su país.

Pero Islamabad se ha negado a aceptar el ingreso de más refugiados afganos, e incluso el de personas provenientes de Afganistán con documentos en regla, con el argumento de que el país carece de recursos para albergarlos. Irán también ha cerrado su frontera con Afganistán.

Al parecer, los dirigentes del Talibán piensan que el Ejército estadounidense no está en condiciones de operar con éxito en el difícil terreno montañoso afgano, y será derrotado como lo fue el soviético.

Said Afghanistan's envoy to Pakistan Mullah Abdul Salam Zaeef: "Hemos visto tanta muerte y destrucción que ninguna fuerza del mundo puede asustarnos ya", afirmó el mulá Abdul Salam Zaeef, representante del Talibán en Pakistán.

Afganos se defienden con armas estadounidenses

RANJIT DEVRAJ

Corresponsal de IPS en Nueva Delhi.

Los misiles Stinger que Estados Unidos suministró en los años 80 a las fuerzas antisoviéticas de Afganistán preocupan ahora a Washington, que ataca a ese país por rehusarse a entregar a Bin Laden.

Esos misiles antiaéreos portátiles forman parte de un arsenal evaluado en más de 8.000 millones de dólares, que inquieta también al gobierno de India en su lucha contra los guerrilleros “jihadistas” de Cachemira, la región que le disputa Pakistán.

Luego de la expulsión del ejército soviético de Afganistán, en 1989, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos intentó infructuosamente recuperar al menos parte de los 1.000 Stingers que había entregado a las fuerzas antisoviéticas, informaron funcionarios de seguridad de Nueva Delhi.

Los Stingers, otras armas y los propios mujaidines o guerrilleros islámicos que Estados Unidos utilizó para luchar contra la ocupación soviética se vuelven ahora contra Washington.

Tras la invasión de la Unión Soviética a Afganistán en 1979, la CIA invirtió 2.100 millones de dólares en un período de 10 años para respaldar a la resistencia, que incluía a 200.000 combatientes reclutados en más de 20 países islámicos, según expertos.

Uno de ellos era el saudí Osama Bin Laden, quien había advertido a sus benefactores estadounidenses que, una vez expulsados los soviéticos, se convertirían en el blanco de su “guerra santa”, según el especialista en defensa indio K. Subrahmanyam.

Pero nadie lo tomó en serio y, una vez terminada la guerra fría, Washington dejó de lado a los mujaidines afganos y la ISI (Inter Servicios de Inteligencia de Paquistán), y les permitió dedicar sus energías a la lucha por Cachemira, que enfrenta a India y Pakistán desde hace más de medio siglo.

Mientras, los talibanes extendieron su influencia en el clero islámico de Pakistán y en varios grupos militantes de Cachemira establecidos en ese país.

Talibán debe a la ISI su enorme éxito militar en Afganistán, donde limitó a la opositora Alianza del Norte, reconocida por la Organización de las Naciones Unidas como el gobierno legítimo de ese país, a cinco por ciento del territorio nacional.

Para mediados de los 90, los talibanes y la ISI habían encontrado una nueva fuente de recursos en el cultivo, procesamiento y tráfico de heroína, según el Grupo de Análisis de Asia Meridional, un gabinete de estrategia con sede en Nueva Delhi.

En julio de este año, el brigadier Imtiaz, quien encabezó las operaciones de heroína de la ISI, fue condenado a ocho años de cárcel por poseer cuentas bancarias de origen inexplicable por 40 millones de dólares, además de vastas propiedades.

El analista H.K. Burqi, del diario paquistaní *The News*, atribuyó todos los males que Islamabad enfrenta hoy a “los años de la *jihad afgana*”.

“La heroína, los Kalashnikovs, los refugiados afganos, los *jihadistas*, la omnipresente corrupción, los crímenes violentos, todos son legados del régimen de Zia (ul Haq). El dictador lo sabía todo, pero quería mantener contentos y leales a los oficiales”, escribió Burqi.

Es evidente que Islamabad debió pagar un alto precio por haber defendido los intereses de Estados Unidos durante la guerra de Afganistán y después de ella.

Millones de afganos cruzaron la frontera hacia el vecino Pakistán en los últimos años, huyendo de la guerra y de la hambruna. Según la ONU, cuatro millones de afganos están muriendo de hambre debido a la sequía y las sanciones internacionales.

Ahora que Estados Unidos ordenó un embargo de petróleo y alimentos a través de la frontera paquistaní y planea lanzar ataques aéreos, más afganos huyen a Pakistán.

Washington pidió al presidente de Pakistán, general Pervez Musharraf, que ayude a dismantlar la estructura de poder que ayudó a crear en Kabul, para poder encontrar a Bin Laden, y que permita a Estados Unidos sobrevolar territorio paquistaní.

Musharraf se resistía a esa idea, rechazada por los líderes religiosos paquistaníes, pero no pudo jugar al mismo juego de Talibán de pedir “pruebas convincentes” de la participación del multimillonario saudí en los atentados terroristas.

Estados Unidos no está de humor para debates prolongados ni consideraciones jurídicas, como la espera de un mandato de la ONU para atacar a Afganistán.

Para Gran Bretaña todo afgano es posible terrorista

SAMANTA SEN

Corresponsal de IPS en Londres.

Dos afganos capturados el 25 de septiembre en el Canal de la Mancha cuando pretendían ingresar a Gran Bretaña habrían sido considerados inmigrantes indocumentados antes de los atentados del martes 11 de septiembre, pero ahora las autoridades los tratan como posibles terroristas.

Rigurosos controles de inmigración adoptados en los últimos días por el Ministerio del Interior británico tienen el propósito de mantener fuera del país a miles de aspirantes a refugiados, especialmente a los afganos.

“Ya existe un gran problema en la frontera afgana. El objetivo principal (de las medidas) es impedir que la gente venga de esa región. También son necesarias por razones de terrorismo”, declaró el secretario del Interior David Blunkett.

Miles de personas huyeron de Afganistán antes de ataque de Estados Unidos. El mayor número de solicitantes de asilo en Gran Bretaña en los últimos seis meses corresponde a afganos. Las autoridades habían otorgado el asilo a más de 5.000 afganos este año antes de los atentados. Sólo en julio se recibieron 810 solicitudes de asilo de afganos, de un total de 6.255 pedidos de extranjeros.

Campamentos de refugiados en Francia están atestados con miles de afganos que pretenden ingresar a Gran Bretaña. “El número de solicitudes (de los afganos) este verano (boreal) duplicó con creces al del verano anterior y casi duplicó al del siguiente grupo nacional”, informó un portavoz del Ministerio a IPS.

El número de solicitudes de asilo de afganos aumentó de 270 en 1992 a 5.555 en el 2000. Así mismo, se cree que miles más habrían ingresado en forma ilegal.

Más de 800 inmigrantes, en su mayoría afganos, fueron capturados mientras intentaban ingresar ilegalmente al país a través del Canal de la Mancha en julio. La cifra descendió a 725 en agosto. Se calcula que por cada indocumentado detenido ingresan muchos más.

Las medidas ordenadas por Blunkett implican que todo afgano será visto como un probable terrorista.

El gobierno pidió a los funcionarios de inmigración que tramitan las solicitudes de asilo que revisen con rigor los casos de afganos y que los procesen con severidad, señalaron fuentes de ese sector estatal.

“Eso es trágico en momentos en que (el gobierno) debería hacer lo contrario. Londres debe reconocer que existe una crisis humanitaria en Afganistán y prepararse para aceptar más refugiados”, según dijo a IPS Tauhid Pasha, del Consejo Conjunto para el Bienestar de los Inmigrantes.

El gobierno cedió a la presión de los medios de comunicación y de la opinión pública y confunde las necesidades legítimas de los refugiados con terrorismo, dijo Pasha. “Los terroristas tienen recursos mucho mayores y estas medidas no impedirán que los terroristas ingresen al país”, agregó.

Blunkett anunció medidas cuasi militares en los puestos de frontera para detener a los inmigrantes indocumentados, que incluyen la contratación de efectivos retirados del ejército para reforzar la seguridad.

Así mismo, todo vehículo que ingrese al país será sometido a rayos x, habrá cámaras de video dirigidas a los pasajeros en los aeropuertos, detectores de latidos se aplicarán a los contenedores para verificar si llevan seres humanos, etc. En ese sentido, Gran Bretaña colabora con otros países europeos para mantener a los refugiados afganos fuera de Europa, indicó Blunkett.

“No es sólo un problema limitado a Gran Bretaña o a nuestra relación con Francia, sino un tema de movilidad internacional, que las incertidumbres creadas por el horrendo atentado contra Estados Unidos habrán de acelerar”, sostuvo.

Mientras Europa le cierra las puertas a los afganos, la secretaria de Desarrollo Internacional, Clare Short, ofreció 40 millones de dólares en ayuda humanitaria destinada a los refugiados fuera de las fronteras de Afganistán.

“Hay demasiada gente que considera a los refugiados afganos como terroristas o criminales. Es, especialmente, lamentable que aquellos que huyen del Talibán sean perseguidos como si fueran miembros del Talibán”, comentó Emma Brooker, abogada especializada en inmigración.

La amapola financia al Talibán

RANJIT DEVRAJ

Corresponsal de IPS en Nueva Delhi.

Washington debe combatir la producción y el tráfico de opio y heroína en Afganistán, Irán y Pakistán, si en verdad desea privar de recursos al movimiento Talibán, opinaron expertos.

Esos tres países forman la llamada “Media Luna Dorada”, una de las dos principales áreas de producción de esas drogas y otras derivadas de la amapola, junto con el llamado “Triángulo Dorado” del Sudeste Asiático, formado por Tailandia, Birmania y Laos.

“Es inconcebible que el presidente estadounidense, George Bush haya pasado por alto la más obvia fuente de financiamiento del Talibán” en la última década, comentó Rajiv Sharma, experto en asuntos afganos posteriores a la invasión de la Unión Soviética (1979-1989).

Bush inició una guerra contra Afganistán tras los atentados del día 11 en Nueva York y Washington.

Sharma considera probable que Bush haya evitado destacar la cuestión de los cultivos de opio en Afganistán para no poner en evidencia el papel jugado en su desarrollo, durante los años 80, por el servicio militar pakistaní de Inteligencia, con respaldo de Estados Unidos. En la actualidad, Islamabad apoya la campaña estadounidense, y pidió al Talibán que entregue a Bin Laden.

Los servicios de inteligencia pakistaníes brindaron armas, entrenamiento y otras formas de apoyo a los guerrilleros islámicos que combatían contra el Ejército soviético en Afganistán, con apoyo encubierto de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense.

El cultivo de opio fue impulsado en principio para promover la adicción a la heroína entre los soldados soviéticos, indicó B.

Raman, de la organización no gubernamental Grupo de Análisis de Asia Meridional, con sede en la meridional ciudad india de Chennai.

Tras la retirada de las tropas soviéticas, altos oficiales del Ejército pakistaní no desearon desvincularse del lucrativo negocio del narcotráfico, aseguró.

Una de las consecuencias es que Pakistán y su vecino Irán se hayan transformado en los países con mayor porcentaje de adictos a la heroína del

mundo, según la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), una agencia de la Organización de las Naciones Unidas con sede en Viena.

Esa agencia afirmó en su informe anual correspondiente al 2000, presentado en febrero en Nueva Delhi, que condiciones climáticas desfavorables fueron la única causa de la disminución del cultivo ilegal y en gran escala de amapola en Afganistán en la cosecha 1999-2000.

“Se calcula que la cosecha total de opio en el 2000 fue 3.300 toneladas, un 28 por ciento menos que la calculada para la cosecha 1998-1999”, debido a esos factores climáticos, señaló.

De todos modos, esa disminuida producción ilegal fue 75 por ciento del total mundial, apuntó.

La sostenida producción de opio en Afganistán y actividades criminales internacionales vinculadas con ella pueden “socavar la estabilidad económica y social en la región”, sostuvo.

“Hay creciente evidencia de vínculos entre el contrabando de armas de fuego, el narcotráfico y los movimientos insurgentes en países de Asia Central”, aseguró C. Chakraborty, funcionario de la JIFE, durante la presentación del informe.

Noventa por ciento de la heroína producida en Afganistán y Pakistán es trasladada a los lucrativos mercados de Europa Occidental a través de Irán y Turquía, según R. Sundaralingam, asesor de Interpol (Policía Internacional) en asuntos relacionados con drogas.

En julio del año pasado, la presión internacional llevó al Talibán a decretar la prohibición del cultivo de amapola, pero la JIFE ha señalado que esa medida podría tener escasas consecuencias aunque se cumpliera en forma estricta, debido a la existencia de vastas reservas de cosechas anteriores.

“La realidad no se ajusta a las proclamas del Talibán”, afirmó Ramesh Bhattacharji, comisario de la Oficina Central de Narcóticos de India.

La amapola se cultiva en Afganistán “a expensas del uso de la tierra para cosechar trigo y otros alimentos que el pueblo necesita en forma desesperada”, sostuvo el coordinador de actividades antiterroristas de Estados Unidos, Michael Sheehan, en una audiencia del Departamento de Estado de ese país.

Los cultivos destinados a la producción de drogas se realizan “en tierras fértiles, con uso de irrigación artificial y fertilizantes”, aseguró.

“Los ingresos del Talibán vinculados con el narcotráfico fortalecen la capacidad de ese movimiento de apoyar al terrorismo internacional. El Tali-

bán ha admitido que cobra un impuesto de 10 por ciento a las cosechas de amapola, el mismo que aplica a otros productos agrícolas”, destacó.

El Observatorio Geopolítico de las Drogas (OGD), una organización no gubernamental con sede en París, calcula que el Talibán recauda por lo menos 75 millones de dólares anuales por impuestos aplicados a cultivos de amapola y a laboratorios para la producción de heroína.

El OGD describe a Pakistán como un “narcoestado”, en el cual existen estrechos vínculos de colaboración entre grandes narcotraficantes, políticos, altos burócratas y oficiales de las Fuerzas Armadas.

Chakraborty señaló que los procedimientos de lavado de dinero desarrollados por los narcotraficantes son eficaces, y opinó que la forma más sencilla de combatir a esas organizaciones criminales es “atacar el cultivo ilegal de amapola”.

El dinero generado por el narcotráfico “puede comprar políticos, financiar campañas electorales, derribar gobiernos y desestabilizar sistemas político-económicos” afirmó en un informe el gubernamental Instituto de Estudios y Análisis de Defensa, con sede en Nueva Delhi.

Talibán conserva apoyo en la población saudita

N. JANARDHAN

Corresponsal de IPS en Dubai, Emiratos Arabes Unidos.

Ningún país árabe reconoce ya como gobierno de Afganistán al movimiento Talibán, que controla el 90 por ciento del territorio afgano, pero esa organización mantiene apoyo en los pueblos árabes.

Pakistán es el único país que mantiene vínculos diplomáticos con el fundamentalista islámico Talibán, luego de que Emiratos Arabes Unidos y Arabia Saudita, los otros dos que lo habían reconocido, cortaran relaciones con su gobierno. Esas rupturas se debieron a que el Talibán se niega a entregar al saudita Osama Bin Laden. Riyadh alegó que el Talibán ayuda a terroristas que difaman al Islam y afectan la reputación de todos los musulmanes.

El creciente aislamiento del Talibán allana el camino para que el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, lleve a cabo su anunciada campaña internacional de guerra contra el terrorismo.

Uno de los propósitos de esa campaña es cortar las fuentes de financiamiento de las organizaciones que invocan el concepto islámico de “jihad” (guerra santa) para impulsar acciones terroristas, y todo indica que Bush se propone también realizar acciones militares contra Afganistán.

Las organizaciones que Washington tiene en la mira son 27, y entre ellas destaca a Al Qaeda (La Base), conducida por Bin Laden.

Islamabad retiró a todos sus funcionarios diplomáticos de Kabul por razones de seguridad, pero puntualizó que eso no significa la ruptura de sus relaciones con el Talibán, que son en la actualidad el único puente entre esa organización y la comunidad internacional.

Hay más de dos millones de afganos refugiados en territorio pakistaní, y el cese de los vínculos entre Islamabad y Kabul afectaría en forma grave la situación de esas personas.

Las relaciones diplomáticas entre Emiratos y el Talibán habían sido sólo simbólicas, en especial desde los atentados con explosivos en 1998 contra las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania, de los cuales Washington considera responsable a Bin Laden.

Por lo tanto, la ruptura fue ante todo un reconocimiento de la realidad, pero el gobierno de Emiratos seguirá relacionado con Afganistán, debido a que alberga y brinda asistencia humanitaria a decenas de miles de refugiados afganos.

Tras los atentados de 1998, Arabia Saudita redujo sus vínculos con el Talibán, y las actividades de la embajada de Afganistán en Riyadh se limitaron desde entonces a cuestiones administrativas y consulares, como la renovación de pasaportes de los casi 200.000 afganos residentes en territorio saudita.

Riyadh privó en 1994 a Bin Laden de la ciudadanía saudita, pero se mantuvo desde entonces en contacto con él, con la intención declarada de evitar que emprendiera acciones violentas, mientras conservaba vínculos de baja intensidad con el Talibán para defender sus intereses en Asia Central.

De todos modos, las decisiones de ambos países del Golfo muestran la gran influencia de Washington en la región. Emiratos y Arabia Saudita dependen mucho de Estados Unidos en materia de seguridad, y eso fue un fuerte factor de presión para que se sumaran a la campaña contra el terrorismo lanzada por Bush.

El rey Fahd de Arabia Saudita y el jeque Zayed, presidente de Emiratos, son los gobernantes decanos del mundo árabe y poseen gran influencia en el Golfo, por lo cual sus actitudes contribuyen mucho a acotar las protestas contra un eventual ataque de Washington a Afganistán.

De todos modos, un considerable número de ciudadanos de Arabia Saudita simpatizan con el Talibán, debido a su interpretación puritana del islamismo, que tiene vínculos con tradiciones religiosas sauditas, y al rechazo de Bin Laden a la presencia militar estadounidense en ese país y en el Golfo.

Además, Bin Laden pertenece a una prestigiosa y acaudalada familia saudita de la occidental ciudad de Jeddah, y el hecho de que Riyadh apoye a Washington contra él es factor de irritación.

Parte de la sociedad saudita considera a Bin Laden un héroe, debido al destacado papel que desempeñó en la resistencia contra la invasión de Afganistán por la Unión Soviética (1979-1989), y no puede creer que esté involucrado en actos de terrorismo.

Muchos residentes en Jeddah opinan que Riyadh se ha inclinado ante la presión estadounidense.

“No tiene sentido combatir al terrorismo de este modo. Estados Unidos es un país poderoso, y ejerce presión sobre todas las naciones árabes y musulmanas”, dijo Eyad Mohammed, residente en Jeddah, a un importante diario saudita.

Otros piensan que el gobierno saudita no debería apoyar ataques de Estados Unidos contra Afganistán, que pueden causar la muerte de muchos inocentes.

“Hay muchas personas detrás del Talibán, y no sería justo acabar con ellas”, dijo al mismo periódico el maestro Azzam Al Harbi.

Cerca de 80 por ciento de los seguidores de Bin Laden provienen de su país, afirmó el periódico Al Islah, del saudita Movimiento por la Reforma Islámica, con sede en Londres y opositor a los vínculos de Riyadh con Washington.

El gobierno de Arabia Saudita ha ocultado a sus aliados occidentales la fuerza de los grupos disidentes en ese país, aseguró.

“Los estadounidenses siguen a oscuras, sin darse cuenta de que la mayor parte de quienes apoyan a Bin Laden están dispuestos a servirlo, no sólo en Afganistán, sino también en Arabia Saudita”, enfatizó.

Algunos comentaristas políticos piensan que el gobierno saudita y otros del Golfo son conscientes del apoyo popular a Bin Laden en sus países.

Esos gobiernos consideran que “la única forma de apaciguar a sus pueblos es lograr algo a cambio” del apoyo a un eventual ataque estadounidense contra Afganistán, sostuvo Abdul Bari Atwa, director del diario árabe Al Qods, que se edita en Londres.

“Las potencias occidentales, y en especial Estados Unidos, deben reconocer que el terrorismo tiene raíces políticas. El conflicto entre árabes e israel-

lías, y el fracaso de los esfuerzos para ponerle fin mediante un acuerdo justo, implican un estorbo y una traición”, arguyó.

Atwa ha alegado en forma reiterada que la mejor opción para combatir al terrorismo islámico no es una respuesta militar de Estados Unidos o de una coalición internacional conducida por Washington, sino una intervención de la Organización de las Naciones Unidas.

Los países del Golfo se comprometieron a apoyar la campaña estadounidense contra el terrorismo, pero mantienen reservas acerca de los ataques militares contra Afganistán.

Según informes periodísticos, el gobierno de Arabia Saudita rechazó un pedido estadounidense de emplear una nueva base militar cercana a Riyadh. Por su parte, Bahrein negó veracidad a informes periodísticos sobre la llegada a sus bases de aviones de guerra estadounidenses, y aseguró que Washington ni siquiera ha presentado un pedido formal de uso de instalaciones militares de ese país.

ONU se prepara para asistir a millones de personas

THALIF DEEN

Corresponsal de IPS en la ONU.

La Organización de las Naciones Unidas prepara una ayuda de emergencia de 548 millones de dólares para la población de Afganistán atrapada ante el ataque de Estados Unidos. El secretario general de la ONU, Kofi Annan, apeló a la comunidad internacional para que responda “lo antes posible y en la manera más oportuna y flexible” a la situación “de la población civil (afgana), que es realmente desesperada”. Más de 20 años de guerra, seis años de gobierno autoritario del movimiento fundamentalista islámico Talibán y tres años de fuerte sequía obligaron a más de cinco millones de los 23 millones de afganos a depender de la ayuda extranjera para sobrevivir, agregó Annan. Pero esa asistencia ha sido interrumpida “trágicamente”, puntualizó. “Quienes retienen de modo deliberado suministros de alimentos para las personas que padecen hambre, y atacan u obstaculizan la labor humanitaria, sea local o internacional, deben saber que la comunidad internacional les exigirá

responsabilidades”, agregó Annan. Unos 275 millones de dólares serán destinados al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), y 188 millones a la asistencia alimentaria. “Estas cifras responden al peor de los casos, y es que, sencillamente, debemos estar preparados para lo peor”, dijo el titular de ACNUR, Ruud Lubbers. ACNUR aguarda el ingreso de hasta un millón de refugiados afganos en Pakistán, 400.000 en Irán y 50.000 en Tajikistán y Turkmenistán. Así mismo, la agencia tiene planes de emergencia para proporcionar ayuda a 500.000 personas en territorio afgano, “si es necesario”, dijo Lubbers.

“Hoy somos testigos de un esfuerzo mundial sin precedentes para combatir el terrorismo. Necesitamos un esfuerzo similar para enfrentar las posibles consecuencias humanitarias de lo que pueda ocurrir en Afganistán. Contamos con la generosidad de los donantes”, agregó.

Llevar la ayuda a la población será todo un desafío, porque la ONU y las organizaciones humanitarias internacionales abandonaron Afganistán, explicó Annan.

Los funcionarios de la ONU se retiraron ante la inminencia de un ataque de Estados Unidos contra el régimen de Talibán y el extremista saudita Osama Bin Laden.

Annan rindió homenaje a los trabajadores humanitarios que aún permanecen en el país, todos ellos afganos.

Las agencias de la ONU dejaron sus equipos de comunicaciones en Afganistán cuando se retiraron, pero el Talibán prohibió a los trabajadores afganos que los utilizaran para comunicarse con el mundo exterior.

La “situación alimenticia en Afganistán es alarmante”, advirtió el organismo internacional mediante un comunicado.

“Gran cantidad de personas vulnerables quedarán atrapadas en el conflicto, el invierno y el caos imperante en muchas partes del país”, agregó.

El comunicado destacó que se está deteriorando la seguridad en las ciudades afganas y en el territorio junto a las fronteras, y que podrían aumentar los actos delictivos y los saqueos, especialmente contra vehículos y equipos de comunicaciones.

Los precios de los productos básicos aumentarán, y habrá un “descontento creciente” en el vecino Pakistán, que ha accedido a cooperar con Estados Unidos en la búsqueda de Bin Laden.

“Si la intervención militar (que pretende Estados Unidos) está sancionada por el Consejo de Seguridad, existe el riesgo de que el personal de la ONU sea visto como ‘el enemigo’ por sectores de la población afgana y paquistaní”, subrayó el comunicado.

No basta con mermelada y mantequilla

SAMANTA SEN

Corresponsal de IPS en Londres.

La mermelada de fresa y la mantequilla caídas de los cielos sobre Afganistán después de los misiles “Tomahawk” no son suficientes para aliviar el hambre de millones de personas en ese país, advirtieron en Gran Bretaña los voluntarios de ayuda.

Dos aviones C-17 despegaron de Alemania para arrojar 37.500 paquetes de alimentos sobre Afganistán, algunas horas después de los primeros ataques con bombas y misiles. “La misión fue un éxito”, aseguró el teniente coronel Jay de Frank, de la fuerza aérea de Estados Unidos.

Pero pocos participantes en la tarea de distribuir ayuda están de acuerdo con De Frank. “Esa no es una manera eficaz de proporcionar asistencia. Estados Unidos dejó caer 37.500 paquetes de raciones en un área en que siete millones de personas necesitan alimentos. Es sólo una pequeña gota en el océano”, comentó a IPS Nick Gutmann, de la organización Christian Aid.

Tampoco se trata de la gota apropiada, advirtió. “Entregar mantequilla y mermelada de fresa no es adecuado en esta situación. Los afganos necesitan legumbres, trigo, aceite y azúcar. Sólo esos alimentos los mantendrán en sus aldeas, y son lo que necesitan para enfrentarse al invierno (boreal)”.

Es preciso “hacerles llegar esos alimentos, para evitar una situación que puede ser muy grave”, señaló Gutmann.

“Toda ayuda en una situación crítica es mejor que nada”, dijo Kaye Stearman, de Care Internacional. Pero la manera elegida “no es la mejor. Afganistán necesita una ayuda masiva”, y no hay garantías de que los paquetes arrojados desde el aire llegaran a su destino, ni que fueran lanzados donde era preciso, ni que fuera entregados a quien más los necesitaba”, dijo la activista a IPS.

“Afganistán está sembrado de minas explosivas y el procedimiento empleado es entonces muy arriesgado. Las minas pueden estallar bajo los pies de quienes se precipitan detrás de los paquetes” lanzados desde los aviones. “Miles de personas han sido víctimas de minas en ese país”, advirtió.

Care Internacional calcula que la asistencia a los afganos debe ser de 50.000 toneladas de alimentos por mes. “No es fácil saber si esos suministros

por aire respondieron a un impulso humanitario genuino o sólo a motivos de propaganda política, pero fueron muy insuficientes”, agregó.

La ayuda desde el aire sólo puede justificarse cuando no hay otra manera de entregarla “y nosotros juzgamos que en este caso no fue el medio adecuado”, declaró un portavoz del grupo ActionAid.

Los voluntarios de ayuda señalaron que la única vía para hacer llegar asistencia a Afganistán es la terrestre. “Todos los bandos implicados deben aceptar la apertura de corredores para la entrega de suministros”, dijo a IPS un representante de Save the Children.

Estados Unidos y Gran Bretaña “deben presionar a los países vecinos (a Afganistán) para que abran sus fronteras. Si esos países temen el impacto financiero” de una eventual invasión de refugiados, Washington y sus aliados “deben otorgarles los recursos necesarios”, comentó.

“No nos corresponde tomar posición política ante el ataque militar, pero la operación no debió comenzar sin medidas previas para atender a los civiles que abandonarán su hogar”, afirmó otro activista.

Cuando falta poco tiempo para el invierno, la crisis se agrava. “Si no se logra el acceso (a las zonas de mayor hambre) en las próximas semanas, puede ser muy tarde. Millones de vidas están en juego”, agregó. Las organizaciones humanitarias solicitaron al gobierno británico la suspensión del ataque militar hasta que sean explorados otros medios.

Decenas de miles de personas huyeron de las ciudades bombardeadas a zonas que creen más seguras. No obstante, el flujo de refugiados hacia la frontera con Pakistán e Irán ha sido menor de lo esperado.

El ingreso a Pakistán e Irán y a las repúblicas ex soviéticas de Tajikistán y Uzbekistán permanece cerrado. Las fronteras fueron clausuradas por presión de Estados Unidos o por motivos de seguridad y si bien Uzbekistán ofreció sus pistas de aterrizaje para la ayuda humanitaria, nada se ha resuelto todavía.

La nueva alianza está obligada por la Convención de Ginebra para situaciones de guerra a tomar previsiones humanitarias, puntualizó la organización Amnistía Internacional. Todas las partes deben “pleno respeto a los derechos humanos y al derecho humanitario internacional”, dijo Amnistía en un comunicado difundido en Londres. Al respecto, destacó que Estados Unidos, Gran Bretaña y Afganistán son estados parte de la Convención de Ginebra de 1949.

Choque de intereses complica sucesión del Talibán

RANJIT DEVRAJ

Corresponsal de IPS en Nueva Delhi.

Comenzar la guerra contra Afganistán, un país desgarrado por el fundamentalismo y el tribalismo, fue relativamente fácil para Estados Unidos, pero la instalación de un nuevo gobierno afgano viable será mucho más compleja, y Washington no tiene planes claros en la materia, según especialistas.

El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, enfatizó que entre sus prioridades en Afganistán no figuran la integración nacional ni la arquitectura política. Se trata del mismo enfoque que condujo a una década de salvajismo y guerra civil entre facciones afganas que habían luchado contra la ocupación soviética (1979-1989), comentaron algunos expertos.

Washington apoyó aquella resistencia, pero dejó de intervenir tras la retirada del ejército soviético, en vez de apoyar esfuerzos de reconstrucción e integración nacional, como lo hizo con éxito en Europa y Japón luego del fin de la Segunda Guerra Mundial.

El resultado fue que “los afganos se volvieron unos contra otros”, señaló Shahid Javed Burki, ex ministro de Finanzas de Pakistán y ex vicepresidente del Banco Mundial.

En esta ocasión, los recursos de Estados Unidos y de sus aliados deberían ser empleados “con mayor inteligencia”, opinó.

El gobernante militar de Pakistán, Pervez Musharraf, dijo a periodistas que su principal preocupación actual es que el próximo gobierno afgano tenga una actitud amistosa hacia su país.

Musharraf afirmó que había transmitido a Bush y al primer ministro de Gran Bretaña, Tony Blair, su opinión de que “no debe permitirse” que la acción militar en curso contra el movimiento Talibán, sea aprovechada por la Alianza del Norte, el principal adversario afgano de ese movimiento, que controla la región nororiental afgana.

La Alianza del Norte ha combatido al Talibán durante años, con apoyo encubierto del gobierno de India, y reivindica como gobernante de Afganistán al ex presidente afgano, Burhanuddin Rabbani, expulsado de Kabul en

1996 por el Talibán, pero aún titular de la representación de Afganistán en la Organización de las Naciones Unidas.

Nueva Delhi espera que la actual situación le permita recuperar influencia sobre Afganistán.

El jefe militar de la Alianza del Norte, Ahmad Shah Masood, fue asesinado el 9 de septiembre, dos días antes de los ataques terroristas en Nueva York y Washington, y su muerte fue un duro golpe para los intereses de Nueva Delhi.

Moscú permite que la Alianza del Norte utilice helicópteros de combate rusos con base en la república ex soviética de Tajikistán, fronteriza con Afganistán, y parece claro que presionará a Estados Unidos para que sus protegidos no sean excluidos de un gobierno afgano posterior a la derrota del Talibán.

El gobierno de Irán, vecino occidental de Afganistán, es hostil al Talibán y apoya a la Alianza del Norte, en especial a sus integrantes de la etnia hazara, que comparten la orientación musulmana chiíta de Teherán.

La minoritaria rama chiíta del Islam ha estado durante siglos en conflicto con la sunnita, predominante en Pakistán y entre los patanes, la mayor etnia afgana y también mayoritaria entre los integrantes del Talibán. En la Alianza del Norte predominan las etnias tajik y uzbeka.

En los primeros días posteriores a los ataques del 11 de septiembre, Teherán expresó apoyo a la campaña antiterrorista internacional convocada por Estados Unidos, pero expresó renuencia a apoyar esa campaña cuando se hizo evidente que Pakistán desempeñaría un papel estratégico en la misma, y ha condenado los bombardeos contra Afganistán.

La Alianza del Norte “debe ser mantenida a raya para evitar un nuevo período de anarquía”, pero recibe apoyo militar de “países que conocemos”, indicó.

Muchos gobiernos piensan que la mejor solución para Afganistán sería articular un gobierno con base social amplia y multiétnica.

Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de India afirmó que es deseable reemplazar al Talibán mediante un acuerdo que incluya “a todos los elementos de la sociedad afgana”.

“Sea cual fuere el relevo (del Talibán), debe tener amplia base y ser multiétnico, para tener en cuenta la composición demográfica de Afganistán”, sostuvo el mismo día Musharraf.

Pakistán no se opone a que retome el poder el exiliado rey afgano Zahir Shah, derrocado en 1973 e integrante de la etnia patán, pese a que su gobierno mantuvo disputas fronterizas con Islamabad, aseguró.

Afganistán reclamó en esa época, con apoyo de India, un área ubicada entre la actual frontera y el río Indus, llamada Patanistán y con mayoría de población patana.

La cuestión más notoria entre las relacionadas con el futuro de Afganistán es la disputa entre Pakistán e India por el territorio de Cachemira, que se ha mantenido durante más de medio siglo.

Nueva Delhi ha enfatizado que Islamabad apoya en Cachemira a organizaciones terroristas islámicas como la que presuntamente organizó los atentados del 11 de septiembre, entre ellas Jaish-e-Mohammed, a cuyos integrantes Musharraf denomina “combatientes por la libertad con una noble causa”.

Sin embargo, el presidente pakistaní condenó un atentado suicida cometido por Jaish-e-Mohammed, días después de los atentados en Estados Unidos, en Srinagar, capital de la parte india de Cachemira, que causó la muerte de por lo menos 39 personas y heridas a otros cientos.

El primer ministro de India, Atal Bihari Vajpayee pidió a Estados Unidos tras ese atentado que incluyera a Jaish-e-Mohammed entre los objetivos de su campaña antiterrorista.

Peter Tomsen, ex enviado especial estadounidense ante las guerrillas afganas de las cuales surgió el Talibán, señaló la interconexión entre esas organizaciones y los insurgentes cachemiros, en un documento titulado “Geopolítica de una solución para Afganistán, dado a conocer a comienzos de este año.

Cualquier solución de la cuestión afgana debe atravesar el anillo interior del conflicto en ese país, y el exterior de las naciones que maniobran para obtener influencia sobre el gobierno afgano, indicó.

El profundo involucramiento de Islamabad en la resistencia contra la Unión Soviética y tras ella se debió al interés pakistaní en lograr respaldo para su conflicto con India, añadió.

Civiles con valor estratégico

NADEEM YAQUB

Corresponsal de IPS en Peshawar, Pakistán.

Las naciones ricas manifiestan creciente preocupación por la población de Afganistán, ignorada durante años, a medida que miles de afganos huyen de su país ante la inminencia de un ataque de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, prometió 320 millones de dólares en asistencia humanitaria para los refugiados afganos y los países que los alberguen. Esto demostrará que Washington está contra el régimen islámico del Talibán, pero que “es amigo del pueblo afgano”, dijo.

Funcionarios estadounidenses anunciaron que arrojarán alimentos desde el aire sobre territorio afgano, mientras el Programa Mundial de Alimentos (PMA), que volvió a suministrar alimentos a Afganistán hace unos días, espera el pronto arribo de un buque estadounidense con un cargamento de trigo.

El PMA despachó 500 toneladas de trigo a Kabul y otras 500 toneladas van en camino.

Mientras, la Organización de las Naciones Unidas está reuniendo un fondo de 584 millones de dólares para asistir a la población dentro y fuera de Afganistán.

Este tipo de respuesta contrasta con la situación que vivían los afganos y Pakistán, el país vecino que los alberga, antes de los ataques suicidas en Estados Unidos.

Hace sólo unos meses, Pakistán resolvió cerrar los campamentos más grandes en su territorio y su frontera, ante lo que calificó de escaso apoyo de la comunidad internacional, mientras cientos de afganos huían de la nación afectada por una larga sequía.

En noviembre del año pasado, el gobierno paquistaní, que ya albergaba a casi dos millones de afganos, intentó infructuosamente cerrar su frontera.

Las agencias internacionales enfrentaban grandes dificultades para reunir fondos para los refugiados, y Afganistán era considerado el país más olvidado por el mundo entre todos los que padecían guerras civiles.

Pero los atentados contra las torres gemelas, en Nueva York, y el Pentágono, en Washington, junto al papel protagónico de Pakistán como estado de avanzada en un eventual ataque estadounidense contra Afganistán, cambiaron completamente el escenario.

La atención prestada a los refugiados afganos obedece al nuevo alineamiento internacional derivado de la formación de una coalición encabezada por Washington, que procura incluir también al mundo islámico.

De hecho, Pakistán es nuevamente presionado para que permita el libre flujo de refugiados, y éstos están nuevamente en los titulares de la prensa internacional gracias a la presencia de decenas de periodistas extranjeros en territorio paquistaní que aguardan el comienzo de los ataques.

Noor Bibi llegó con su numerosa familia después del 11 de septiembre al campamento de Jallozai, cerca de la noroccidental ciudad paquistaní de Peshawar.

“Dejé el país porque se hablaba de ataques de Estados Unidos. No quiero perder más seres queridos”, declaró la mujer, cuya familia perdió a varios hombres durante los años de conflicto.

Bibi dijo no entender por qué los estadounidenses querían dañar a su país por una sola persona, Bin Laden. Muchos como ella atraviesan en algún punto la frontera de 2.200 kilómetros entre Pakistán y Afganistán. Toman caminos insólitos o pagan a “contrabandistas de personas” que han florecido en las últimas semanas.

Según agencias humanitarias, más de un millón de afganos podrían entrar a Pakistán en los próximos días. Unas 20.000 personas ingresaron a la provincia paquistaní de Balochistán en los últimos diez días, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

La directora ejecutiva del PMA, Catherine Bertini, reclamó al mundo una respuesta generosa a la crisis humanitaria en Afganistán y los países vecinos.

“Cien mil familias quedarán sin alimentos en Afganistán. Lamentablemente, dada la actual situación en el terreno, será imposible hacer llegar suministros a esta población durante el invierno. Deberán dejar sus hogares en busca de alimentos o morirán”, advirtió Bertini.

Esta situación no es nueva para Pakistán, la nación con más población refugiada del mundo. A comienzos de los años 80, unos tres millones de afganos ingresaron a su territorio.

La mayoría reside en la Provincia de la Frontera Noroccidental. En Peshawar, la capital provincial con una población local de 1,7 millones de habitantes, viven casi 700.000 afganos.

El país enfrentó diversos problemas por la presencia de 60.000 desplazados afganos en el campamento de Jallozai. Según las autoridades, la mayoría de la población de ese y otros campamentos es desplazada por razones económicas y, por tanto, no se la puede considerar refugiada.

Pero el proceso de investigación para determinar la condición de esos afganos y su posterior repatriación se detuvo después de los ataques en Estados Unidos, a causa de las crecientes tensiones en la región.

“La frontera seguirá cerrada para los refugiados afganos aunque Estados Unidos ataque Afganistán. Hemos pedido a ACNUR que establezca campamentos cerca de la frontera de tal modo que los que logren cruzar a Pakis-

tán puedan ser vigilados”, dijo el gobernador de la provincia, Iftekhar Hussain Shah.

El principal temor del gobierno de Pervez Musharraf es que individuos contrarios al gobierno paquistaní, miembros del Talibán o potenciales terroristas ingresen al territorio como refugiados.

Funcionarios británicos pidieron la apertura de la frontera. “Apoyamos la apertura de la frontera. Deseamos que se abra para la población afgana”, dijo en Islamabad el secretario adjunto de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios, Kenzo Oshima.

El mundo occidental “nos da lecciones sobre cómo asistir a los refugiados y abrir las fronteras por razones humanitarias. Se muestran muy preocupados por los afganos. ¿Durante la última década no sabían que los afganos necesitaban alimentos?”, preguntó un funcionario paquistaní.

“Si están tan preocupados, ¿por qué no los embarcan en buques y aviones y los llevan a sus países?”, agregó.

El portavoz de ACNUR, Yusuf Hassan, dijo que la agencia ubicó 23 lugares a lo largo de la frontera afgana para establecer campamentos. Varias agencias están reuniendo medicinas y material de primeros auxilios, tiendas de campaña e instalaciones sanitarias.

“Estamos en condiciones de albergar a unas 200.000 personas”, dijo Rashid Khan, funcionario de ACNUR cerca de Akora Khattak.

ONU acusada de usar alimentos como arma

THALIF DEEN

Corresponsal de IPS en la ONU.

Afganistán, Israel, Birmania y la Organización de las Naciones Unidas actúan contra el derecho básico a la alimentación al utilizar los alimentos como armas de guerra, se advirtió en un informe del propio foro mundial.

Afganistán viola aspectos centrales del derecho humanitario internacional que prohíben privar de alimentos a la población civil como método de guerra, afirma el trabajo de Jean Ziegler, relator especial de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.

Ziegler manifestó que tiene esperanzas en enviar una misión a Afganistán para examinar las acusaciones y la verdadera situación alimentaria de esa nación de Asia central de 23 millones de habitantes.

Mientras, la comunidad internacional realiza los últimos esfuerzos para suministrar alimentos a cientos de miles de personas casi famélicas de Afganistán, que también están bajo la amenaza de un inminente ataque militar de Estados Unidos.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) decidió arrojar desde el aire 30.000 toneladas de alimentos para 100.000 familias, informó su directora ejecutiva Catherine Bertini.

“Lamentablemente, dada la actual situación en el terreno será imposible entregar los suministros que esa población necesitará durante el invierno”, sostuvo. Ante la falta de comida, las personas afectadas deberán dejar sus hogares en busca de alimentos o morirán, agregó.

El PMA solicitó 230 millones de dólares a las naciones donantes con el fin de alimentar a 7,5 millones de personas atrapadas en la crisis en Afganistán. La agencia ya alimenta a un millón de personas, pero sus reservas se acabarán pronto.

El informe incluye cargos contra la propia ONU por utilizar la alimentación como instrumento de presión contra el régimen de Iraq.

“Cabén pocas dudas de que someter al pueblo iraquí a un duro embargo económico desde 1991 llevó a la ONU a violar claramente el derecho a la alimentación de la población de Iraq”, asegura el documento, citando al secretario general adjunto Dennis Halliday, ex coordinador humanitario del foro mundial para Iraq.

El informe de 26 páginas incluye una denuncia conjunta de organizaciones no gubernamentales (ONG) israelíes, palestinas e internacionales que acusan al gobierno israelí de negar el acceso a alimentos y agua a las comunidades palestinas de la franja de Gaza y Cisjordania.

Las aldeas palestinas permanecen cercadas por fuerzas militares desde el inicio de la intifada (levantamiento popular) contra la ocupación israelí, en septiembre del 2000.

Los “cercos policiales” impiden el ingreso de alimentos y agua, según la relatoría de la ONU. En abril el ejército destruyó grandes áreas de tierras agrícolas, árboles frutales y manantiales que constituían el sustento de 135 familias en las zonas ocupadas.

“Varias ONG sostienen que las políticas del gobierno de Israel han generado hambre y ponen en peligro de hambruna a los más pobres. También

se documentan daños permanentes a las necesidades nutricionales de grupos vulnerables, como niños y niñas y refugiados”, afirma el documento.

Las denuncias sugieren que los cercos son un castigo colectivo una violación al principio de no utilizar la alimentación como instrumento de presión política o económica.

Estos principios fueron incluidos en la Declaración de Roma sobre Seguridad Alimentaria Mundial de 1996, así como en numerosas resoluciones de la Comisión de Derechos Humanos del foro mundial.

Ziegler afirmó que había solicitado visa al gobierno de Israel para encabezar una investigación oficial sobre estos cargos, pero el país sigue negando el ingreso a los relatores de derechos humanos de la ONU.

Ni siquiera el Comité sobre Prácticas Israelíes del foro mundial, creado en los años 50 con el mandato de investigar la situación de los derechos humanos en los territorios ocupados, pudo ingresar al país, afirman funcionarios de la ONU.

Por otra parte, el régimen militar de Birmania es acusado de “gruesas violaciones al derecho a la alimentación” en su lucha contra la oposición civil y los movimientos insurgentes, de acuerdo al documento de la relatoría.

Desde marzo de 1996, la junta militar desplazó por la fuerza a más de 300.000 personas de 1.400 aldeas. “La desnutrición es extremadamente alta tanto en las zonas afectadas por la guerra en Birmania oriental, como en las zonas de paz, en los estados de Karen, Karenni y Shann y en la región del delta” meridional, afirma el documento.

Se acusa igualmente a Birmania de destruir cultivos en forma deliberada y de confiscar alimentos a la población civil.

Designios de Estados Unidos en Afganistán son una incógnita

JIM LOBE

Corresponsal de IPS en Washington.

Mientras las bombas y misiles de Estados Unidos caen sobre Afganistán, aún no están claros los objetivos del gobierno de George W. Bush. Si bien es evidente que Bush pretende dismantelar Al Qaeda, y expulsar del poder al

régimen Talibán, aún no se sabe a quién promoverá Estados Unidos para reemplazarlo.

Así mismo, Washington dejó la puerta abierta para ampliar la guerra a otros países de Medio Oriente.

Acciones posteriores con respecto de otras organizaciones y estados podrían tomarse en las semanas y meses venideros, advirtió el embajador de Estados Unidos John Negroponte al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.

Esa opción refleja una división interna de Washington sobre si atacar a Iraq y posiblemente a otros países vecinos como parte de la guerra de Bush contra el terrorismo, incluso si no hubiera pruebas que los vinculen específicamente a Al Qaeda o a los atentados de septiembre, que mataron a 6.000 personas.

Los aliados árabes de Washington advirtieron a Bush que la guerra más allá de Afganistán irritaría a la opinión pública de sus países, dificultando su apoyo a la guerra antiterrorista de Bush.

Funcionarios del Pentágono (Departamento de Defensa) dijeron que los bombardeos en curso pretenden destruir 36 objetivos militares, sobre todo baterías antiaéreas del Talibán, instalaciones de comando y control y bases aéreas en torno de Jalalabad, Kabul y Kandahar, para permitir el dominio aéreo estadounidense.

Aunque seguramente abandonados, campamentos de entrenamiento presuntamente utilizados por Al Qaeda también fueron atacados con bombas arrojadas desde aviones B-1 y B-52.

Tanques del Talibán también fueron atacados en Mazar-i-Sharif, próximo a la frontera con Uzbekistán, en lo que parece un claro indicio de que Washington espera que la Alianza del Norte, la coalición de milicias tajikas y uzbekas que controlara Kabul de 1992 hasta 1994, retome la región estratégica, quizá con apoyo directo de Estados Unidos.

El secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, se reunió con el presidente de Uzbekistán, Islam Karimov, en Tashkent, y habría recibido permiso para usar las bases aéreas de ese país y lanzar ataques de unidades especiales en Afganistán.

Más de 1.000 soldados estadounidenses se encuentran en Uzbekistán y se espera que la cifra aumente en los próximos días.

Hay indicios de que ya hay tropas estadounidenses en Afganistán, en coordinación con fuerzas de la Alianza del Norte que controlan el valle de Panshir, al norte de Kabul.

La Alianza del Norte, que tiene unos 15.000 combatientes, ya estaría en movimiento para tomar el control de la base aérea de Baghram, a 40 kilómetros de Kabul.

El respaldo de Washington a la Alianza tiene sus riesgos, ya que la mayoría de los expertos sobre Afganistán argumentan que, debido a su limitada base étnica y a una historia de luchas intestinas, la Alianza necesita el apoyo del mayor grupo étnico del país, los pushtuns, para mantenerse en el poder.

El Talibán es dominado por pushtuns, pero la teología ultraortodoxa de su líder, Mohammed Omar, distanció a algunos dirigentes talibanes, sobre todo en el sur del país.

Allí es donde Washington comenzó a arrojar alimentos y medicinas para la población civil, en un claro intento de persuadir a los afganos y la comunidad internacional de que la guerra se libra sólo contra Al Qaeda y el Talibán.

Un alto funcionario del Departamento de Estado, Richard Haass, se reunió en Roma con el rey exiliado de Afganistán, Zahir Shah, de 88 años, para negociar un pacto entre él y la Alianza del Norte.

Washington espera que el rey actúe como nexos para los pushtuns, incluso varios dirigentes talibanes distanciados de Omar.

Una coalición entre la Alianza del Norte, Zahir Shah y talibanes desencantados podría bastar para expulsar del poder a Omar, pero funcionarios de Washington reconocen que no existe seguridad de que la misma gobierne como una fuerza coherente.

Así mismo, Pakistán, que ha objetado el acercamiento de Washington y la Alianza del Norte, teme que la vuelta del rey reflote reclamos territoriales de Kabul contra Islamabad.

Además del futuro gobierno de Afganistán, Washington también deberá decidir si llevará la guerra a Iraq, aunque no existan pruebas que vinculen al régimen de Saddam Hussein con los atentados de septiembre.

Funcionarios del Pentágono y del entorno del vicepresidente Dick Cheney apoyan un ataque contra Iraq y contra objetivos "terroristas" en Líbano y Siria.

El Secretario de Estado Colin Powell, así como aliados árabes y europeos de Washington, se oponen firmemente a esa opción, porque sería tomada como una provocación por la opinión pública islámica, sostienen.

Disputa por el control de Afganistán

PRAFUL BIDWAI

Corresponsal de IPS en Nueva Delhi.

India y Pakistán compiten por imponer su influencia sobre el próximo gobierno de Afganistán, mientras Estados Unidos y Gran Bretaña bombardean ese país.

Todo indica que una de las consecuencias del ataque en curso será la caída del movimiento fundamentalista islámico Talibán, y tanto Nueva Delhi como Islamabad tratan de contar con la mayor cantidad posible de aliados en una eventual coalición de reemplazo.

Las maniobras de ambos gobiernos han exacerbado su disputa por la región de Cachemira, que mantienen desde hace más de medio siglo, y agregan complejidad al desarrollo de la campaña antiterrorista lanzada por el gobierno estadounidense tras los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y Washington.

El gobernante militar de Pakistán, Pervez Musharraf, llamó por teléfono al primer ministro de India, Atal Bihari Vajpayee, con la intención de mejorar las relaciones bilaterales, pero su gestión fue infructuosa.

Musharraf deseaba convencer a Vajpayee de que Pakistán no tuvo relación con el atentado suicida con bombas cometido el 1 de octubre en Srinagar, capital del estado indio de Jammu y Cachemira, que causó la muerte a 39 civiles.

Pocas horas antes de esa conversación por teléfono, el gobernante pakistaní había expresado su preocupación por la sucesión del Talibán, en una conferencia de prensa en Islamabad.

Musharraf dijo que era necesario evitar que la Alianza del Norte o Frente Unido, una coalición de organizaciones guerrilleras que lucha contra el Talibán en Afganistán desde hace siete años, sea beneficiada por los ataques liderados por Estados Unidos.

La Alianza del Norte, apoyada por India, por Irán y en especial por Rusia, controla sólo el 10 por ciento del territorio afgano, en la región nororiental, e incluye a representantes de varios grupos étnicos opuestos a los patanes, la mayor de las etnias afganas.

Los patanes son cerca del 40 por ciento de la población de Afganistán, y predominan en el Talibán.

En la actualidad, la Alianza del Norte coordina sus acciones militares con la coalición liderada por Estados Unidos, y aprovecha los bombardeos como cobertura para el avance de sus soldados.

Musharraf sostuvo que los intereses de los patanes deben ser tenidos en cuenta tras la probable caída del Talibán, y advirtió que la Alianza del Norte sólo representa a “10 por ciento de Afganistán”.

En Pakistán hay más patanes que en Afganistán, e Islamabad había cultivado relaciones amistosas con el Talibán en los últimos años, con la intención de asegurar su flanco occidental, dada la conflictividad en la frontera oriental con India.

Pero tras los ataques del 11 de septiembre, Musharraf se alineó con celeridad del lado estadounidense, y encabezó infructuosas gestiones para que el Talibán entregara a Osama Bin Laden.

El uso del espacio aéreo pakistaní y el apoyo de Inteligencia de Islamabad son vitales para los planes estadounidenses, y eso asegura a Pakistán una posición de privilegio en la coalición antiterrorista, mucho más importante que la de India.

El resultado ha sido un importante cambio de las relaciones entre Washington y Nueva Delhi.

Antes del 11 de septiembre, esas relaciones apuntaban a consolidar a India como el principal aliado de Estados Unidos en Asia Meridional, como contrapeso a la influencia de China, y Nueva Delhi trabajaba por el aislamiento internacional del régimen pakistaní, al cual acusa de apoyar a terroristas en Cachemira.

El ataque terrorista del 1 de octubre en Srinagar fue cometido por el grupo separatista cachemiro Jaish-e-Mohammed, cuyas bases están en Pakistán, y determinó que el gobierno indio reiterara esas acusaciones.

Estados Unidos y otras potencias occidentales presionaron con éxito a Musharraf para que sustituyera al jefe de sus servicios de Inteligencia, Mahmood Ahmed, a quien se considera vinculado con Jaish-e-Mohammed, con el Talibán y con Bin Laden.

Washington sospecha que el ex jefe de Inteligencia, destituido, mantenía vínculos con Ahmed Omar Saeed Sheikh, un militante de Jaish-e-Mohammed, quien habría enviado poco antes del 11 de septiembre 100.000 dólares a Mohammed Atta, uno de los principales sospechosos de los atentados en Estados Unidos.

El primer ministro británico Tony Blair aseguró a Musharraf en Islamabad que los intereses pakistaníes serán considerados legítimos en la articu-

lación de un gobierno afgano que suceda al Talibán, y que se procurará que ese gobierno represente en forma adecuada a los patanes.

Todo indica que Islamabad no desea la aniquilación del Talibán, muchos de cuyos jefes militares fueron entrenados por los servicios de Inteligencia pakistaníes durante la resistencia afgana contra la invasión de la Unión Soviética (1979-1989).

Hace siete años, esos servicios apoyaron la toma de la sudoriental ciudad afgana de Kandahar por el Talibán, y desde entonces le habían proporcionado armas, entrenamiento y apoyo económico.

Al parecer, Musharraf aspira a que sobreviva el núcleo central de esas fuerzas, incluyendo a dirigentes de los tres principales organismos de dirección: el comando militar de nueve miembros y los “shurras” (consejos de conducción política y religiosa) con sede en Kabul y en Kandahar.

Ambos consejos son presididos por el mulá Mohammed Omar, máximo líder del Talibán, y el periódico británico *The Guardian* ha sostenido que los servicios de Inteligencia pakistaníes planean asesinar a Omar y propiciar su sustitución por un dirigente más flexible.

El investigador Ahmed Rashid sostuvo en su bien documentado libro “Talibán: el Islam, el Petróleo y el nuevo Gran Juego” que la Inteligencia pakistaní puso al Talibán en contacto con Al Qaeda en 1996.

La cooperación entre el Talibán y Al Qaeda es crucial para ambas partes. Se presume que el grupo de Bin Laden brinda apoyo económico al Talibán y coopera con éste en la explotación de la producción de heroína, a cambio de albergue seguro para sus fuerzas y sus bases de entrenamiento.

Además los 5.000 combatientes de Al Qaeda, llamados Brigada V-55, se han incorporado a las fuerzas del Talibán, que suman unos 30.000 guerrilleros.

Hay indicios de que Musharraf desea que la campaña antiterrorista se limite a destruir a Al-Qaeda con procedimientos que no diezmen al Talibán ni lo excluyan por completo del próximo gobierno afgano.

En cambio, la estrategia de Nueva Delhi para Afganistán se basa en promover el predominio militar y político de la Alianza del Norte.

No es posible formar un gobierno con amplia base en Afganistán sin representación de los patanes, pero tampoco excluir a los otras 15 etnias afganas, en especial a los tajik de las regiones septentrional y nororiental, a los hazaras de las regiones central y occidental, y a los uzbekos de la región noroccidental.

La Alianza del Norte anunció que convocará a una “loya girga” (asamblea) que represente con amplitud a todas las etnias, pero no está claro si las numerosas tribus de patanes estarán dispuestas a integrarla.

La creciente tensión entre India y Pakistán es una amenaza para la estabilidad regional, y la situación se agravaría si el régimen de Musharraf es desestabilizado o derrocado por las fuerzas pakistaníes que apoyan al Talibán.

Discrepancias sobre el futuro de Afganistán

MUSHAHID HUSSAIN

Corresponsal de IPS en Islamabad.

Pakistán y Estados Unidos tratan de amortiguar sus primeras discrepancias en la coalición antiterrorista formada tras los atentados en Nueva York y Washington del día 11 de septiembre, pues ya se insinúan intereses contrapuestos en relación con el futuro de Afganistán una vez alcanzado el objetivo de derrocar a Talibán en el marco de la ofensiva militar liderada por Estados Unidos.

La cuestión más polémica es qué gobierno se implantaría en Afganistán y cuál debe ser el papel de la afgana Alianza del Norte, que combate desde hace años contra el Talibán.

“No debemos cometer el error de imponer un gobierno al pueblo afgano”, advirtió el ministro de Relaciones Exteriores pakistaní, Abdul Sattar, en una conferencia de prensa realizada en Islamabad junto con una delegación de altos representantes de la Unión Europea (UE).

“Tememos que el apoyo de potencias extranjeras a un bando u otro en Afganistán conduzca a un gran desastre para el pueblo de ese país”, agregó.

La delegación de la UE fue enviada para expresar solidaridad con Pakistán, luego de que el país ofreciera a Estados Unidos pleno apoyo a la lucha antiterrorista, y aseguró al gobierno pakistaní que el bloque europeo no vincula esa lucha con el derrocamiento del Talibán.

Islamabad ha intentado sin éxito convencer al Talibán de que entregue a Bin Laden, primero mediante una delegación política, y luego mediante una delegación de religiosos.

La advertencia de Sattar siguió a indicios de un encubierto acercamiento de Washington a la Alianza del Norte, que podría implicar un acuerdo sobre el futuro político de Afganistán tras la caída del régimen Talibán.

El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, había pedido “cooperación de ciudadanos afganos que estén cansados del Talibán”, aunque añadió que su país no asigna prioridad a asuntos políticos sino a “la justicia”.

La asesora de Seguridad Nacional de Bush, Condoleeza Rice, había declarado a canales de televisión que los afganos “estarían mejor” sin el Talibán.

Tras las declaraciones de Sattar, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Ari Fleischer, se apresuró a decir que la campaña estadounidense contra el terrorismo “no fue planeada para sustituir a un régimen por otro”.

La política regional de Islamabad apunta desde hace años a mantener relaciones amistosas con Afganistán, para contar con un aliado musulmán contra India, con la cual está en conflicto desde hace medio siglo.

Pakistán es en la actualidad el único país que reconoce al Talibán como gobierno afgano. Arabia Saudita y Emiratos Arabes Unidos también mantenían relaciones diplomáticas con el Talibán, pero las interrumpieron tras los atentados del día 11.

Islamabad aspira a que el Talibán no sea derrocado, y rechaza la participación en la coalición antiterrorista de la Alianza del Norte, ya que es poco probable que ese grupo mantenga relaciones amistosas con Pakistán, aliado de sus rivales, si llega a gobernar Afganistán.

En la actualidad hay 2,2 millones de afganos refugiados en el país, y el gobierno teme que ese número aumente mucho si se producen ataques militares indiscriminados contra Afganistán.

Además, la situación interna pakistaní podría ser desestabilizada por esos ataques, debido a fuertes vínculos entre el Talibán y grupos religiosos y políticos locales, o incluso a represalias del Talibán contra Islamabad por apoyar a Washington.

El problema para el gobierno pakistaní es que su punto de vista sobre la cuestión afgana no es compartida por otros actores clave en la región. Turquía y Rusia, por ejemplo, han hecho público su apoyo a la Alianza del Norte, y es poco probable que ese apoyo se limite a declaraciones.

Moscú y repúblicas ex soviéticas cercanas a Afganistán comparten con China la preocupación por el peligro de grupos “extremistas islámicos” a los cuales consideran apoyados y entrenados por el Talibán.

Expertos chinos en Inteligencia y combate al terrorismo se reunieron en Washington con sus pares estadounidenses, para compartir información sobre el Talibán.

El gobierno iraní sostiene que “no está con los estadounidenses ni con los terroristas”, pero todo indica que no derramaría ni una lágrima si es derrocado el Talibán, representante de una corriente de pensamiento islámico antagónica con la de Teherán.

El gobernante militar de Pakistán, Pervez Musharraf, acusó a India de organizar en la república ex soviética de Tajikistán un encuentro con representantes de ese país, de Irán, de Rusia y de Uzbekistán, para discutir planes contra el Talibán y en apoyo a la Alianza del Norte.

En la actualidad hay indicios de que Washington realiza maniobras encubiertas para debilitar al Talibán mediante el estímulo a la desertión de sus comandantes.

Por otra parte, el gobierno de Estados Unidos ha realizado contactos con el ex rey afgano, Zahir Shah, exiliado en Roma desde su derrocamiento en 1973.

Se cierra la principal puerta de salida de los refugiados

MUDDASSIR RIZVI

Corresponsal de IPS en Islamabad.

El cierre de la frontera de Pakistán expone a millones de civiles afganos al previsto ataque de Estados Unidos contra Afganistán por los atentados del día 11 en Nueva York y Washington.

La imposibilidad de abandonar Afganistán agravará la crisis humanitaria de ese país, azotado por la sequía y las sanciones internacionales y gobernado por el grupo fundamentalista islámico Talibán, que protege a Bin Laden.

Millones de afganos ya habían huido del hambre y la guerra civil antes de la amenaza de ataques de Estados Unidos. Los campamentos de refugiados en Pakistán e Irán albergan a más de 3,7 millones de afganos.

Pero ahora, “ni siquiera aquellos que portan documentos válidos pueden ingresar a Pakistán”, advirtió Abdul Karim Qasuria, secretario de asuntos internos y tribales de la Provincia de la Frontera Noroccidental, limítrofe con Afganistán.

Sin embargo, la frontera pakistaní-afgana, de unos 2.000 kilómetros de extensión, ha sido muy permeable pese a diversos intentos de detener el flujo de refugiados.

Funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas afirmaron que miles de refugiados entraron a territorio paquistaní a través de puntos fronterizos no vigilados.

De acuerdo con sus cálculos, unos 4.000 afganos han realizado el viaje en los últimos dos días y se espera que el flujo diario se mantenga en 3.000 o 4.000 personas.

Pakistán, bajo presión de Estados Unidos, presiona a su vez al régimen Talibán para que entregue a Bin Laden, a quien el presidente estadounidense George W. Bush quiere “vivo o muerto”.

Los líderes talibanes, exigieron pruebas concretas sobre la culpabilidad de Bin Laden.

Algunos informes señalan que la gran mayoría de los afganos en éxodo son mujeres y niños porque el Talibán no permite la salida de hombres, en caso de que sean necesarios para pelear en un enfrentamiento contra Estados Unidos.

Pakistán, que tiene 1,2 millones de refugiados afganos, ya intentó cerrar su frontera en noviembre del año pasado luego de la un flujo masivo.

Sin embargo, más de 100.000 afganos lograron ingresar a Pakistán desde septiembre del 2000, principalmente a través de un tramo muy permeable de la frontera llamado Línea Durand.

La decisión de Islamabad de cerrar la frontera se produjo en virtud de la promesa del gobierno del general Pervez Musharraf de cooperar plenamente con Washington en su lucha contra el terrorismo.

Además del cierre de fronteras, Estados Unidos pidió a Pakistán que suspenda sus suministros a la administración Talibán, en especial de combustible.

Así mismo, le solicitó información de inteligencia sobre el paradero de Bin Laden y la ubicación de campamentos de entrenamiento de radicales islámicos en Afganistán, así como permiso para utilizar su espacio aéreo en caso de un ataque militar contra ese país.

“El gobierno ordenó que se prohíba la entrada de refugiados de Afganistán. Las fuerzas de seguridad que vigilan los pasos de frontera ya han sido notificadas, como también otras rutas tradicionales”, informó un funcionario de la Provincia de la Frontera Noroccidental.

El cierre de la frontera coincidió con la suspensión de todo suministro al mediterráneo Afganistán.

“Se ha suspendido con efecto inmediato el transporte de alimentos, equipos y bienes de consumo importados por Afganistán desde Pakistán u otros países”, afirmó la Oficina Central de Recaudación, que supervisa el Programa Comercial Afgano de Tránsito.

En virtud de ese programa, Pakistán permite el pasaje libre de impuestos de todos los artículos destinados a Afganistán. El bloqueo económico sin duda agravará la crisis humanitaria de Afganistán, donde no ingresan alimentos.

Setenta por ciento de la población ya está desnutrida y un 20 por ciento de los niños mueren antes de cumplir los cinco años, según el Programa Mundial de Alimentos de la ONU.

“Un gran número de personas intentan huir de Kandahar, Kabul y Jalalabad. Algunas se dirigen a aldeas afganas, pero otras se dirigen a la frontera con Pakistán y otras a Irán”, señaló el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

La mitad de los residentes de la ciudad sureña de Kandahar, donde reside el líder supremo Talibán Mullah Omar, ya huyeron, según informes de prensa.

Así mismo, un gran número de personas abandonó la capital, Kabul, y la ciudad oriental de Jalalabad.

“La situación humanitaria en Afganistán es crítica para millones de civiles, entre ellos casi un millón de desplazados, y podría agravarse más por la evacuación de las agencias humanitarias internacionales”, advirtió ACNUR.

La ONU hizo salir de Afganistán a sus 75 funcionarios internacionales como medida de precaución. Otras organizaciones humanitarias y no gubernamentales tomaron la misma medida.

“Se cree que hay casi seis millones de personas vulnerables dentro de Afganistán, lo que representa el 25 por ciento de la población total”, previno Stephanie Bunker, portavoz de la Oficina Coordinadora de la ONU para Afganistán, con sede en Islamabad.

“Millones más están gravemente afectadas por la crisis pero no pueden moverse de sus aldeas”, agregó.

La Oficina Coordinadora de la ONU aseguró que continuará ayudando a los civiles mediante sus funcionarios locales, y el Comité Internacional de la Cruz Roja afirmó que sus 1.000 empleados afganos seguirán proveyendo medicamentos material quirúrgico a hospitales, clínicas y puestos de primeros auxilios.

Sin embargo, nada se ha hecho hasta ahora por la gente que está varada en la frontera, aunque el gobierno de Pakistán anunció que está preparando planes de contingencia para ayudarla.

El gobierno de Pakistán jaqueado

MUDDASSIR RIZVI

Corresponsal de IPS en Islamabad.

El gobierno militar de Pakistán enfrenta su momento más difícil. En lo interno, debe hacer frente a protestas cada vez más violentas contra las acciones militares de Estados Unidos en el vecino Afganistán, y en lo diplomático, debe asegurarse de que el próximo gobierno afgano le sea favorable.

Las protestas empezaron poco después del comienzo de la campaña militar de Estados Unidos y Gran Bretaña sobre territorio afgano.

Al menos cinco pakistaníes murieron a causa de la violencia de las primeras manifestaciones. Líderes políticos y religiosos islámicos llamaron a la “guerra santa” contra Estados Unidos y condenaron al presidente pakistaní

Pervez Musharraf por su apoyo a la coalición internacional contra el terrorismo encabezada por Washington. Las violentas manifestaciones también produjeron decenas de heridos, incendios en oficinas de las Naciones Unidas y daños a propiedades públicas en varias ciudades.

Musharraf, por su parte, prometió actuar “con rapidez y firmeza” contra los agitadores. Varios líderes de derecha fueron puestos bajo arresto domiciliario o en custodia policial.

El gobierno confirmó que militares estadounidenses llegaron a Pakistán, pero aclaró que el territorio nacional no se utilizaría como base para lanzar ataques contra el vecino Afganistán.

“No creo que sean tropas de combate”, respondió el portavoz gubernamental Rashid Qureshi a la agencia de noticias Reuters cuando se le preguntó si ya había soldados estadounidenses en Pakistán.

Las protestas de grupos extremistas eran previsibles en Pakistán, pero el gobierno no se preparó para la respuesta, consideraron analistas.

“No fue una reacción inesperada. Las autoridades debieron prepararse para el problema, en especial en lo político, para amortiguar el impacto del

enojo por los ataques”, señaló una nota editorial del diario de lengua inglesa The News.

Algunos informes de prensa sugieren que los manifestantes detenidos podrían ser juzgados en virtud de las leyes contra el terrorismo, que prevén penas de hasta 14 años de cárcel.

Incluso políticos alguna vez considerados aliados de Musharraf se están distanciando ahora de la política de respaldo a los ataques contra Afganistán.

“Los ataques terminarán de devastar a Afganistán. Debe encontrarse una solución acorde con las tradiciones y valores del pueblo afgano”, declaró Ajmal Jattak, quien formó su propio partido en la Provincia de la Frontera Noroccidental, limítrofe con Afganistán, tras ser expulsado del Partido Nacional Awami por su acercamiento al gobierno militar poco después del golpe de 1999.

El gobierno prevé nuevas protestas, quizá más violentas. “La situación puede explotar si las fuerzas de seguridad recurren a sus métodos tradicionales para reprimir a los manifestantes y los trata como delincuentes”, advirtió un analista de seguridad.

En el plano diplomático, los desafíos para el gobierno pakistaní son todavía mayores. La tarea más difícil será impedir que la Alianza del Norte, aproveche la situación actual para tomar el poder en Afganistán.

La Alianza, que domina cinco por ciento del territorio afgano, acusa a Islamabad de haber promovido y respaldado al grupo Talibán. Por su parte, Pakistán desconfía de los estrechos vínculos de la Alianza con India y la considera perjudicial para los intereses nacionales. “No aceptaremos a la Alianza del Norte y ya he dicho que no debe permitirse la entrada de sus fuerzas en Kabul”, la capital afgana, dijo Musharraf en una reunión de gabinete. Pakistán pretende que el próximo gobierno de Afganistán sea multiétnico y asegure la representación de la etnia mayoritaria patán a la que pertenecen los talibanes, que tradicionalmente ha tenido estrechas relaciones con la población pakistaní.

Musharraf procura garantías de Estados Unidos y sus aliados de que el próximo gobierno afgano sea amigo de Pakistán, pero hasta ahora no las ha obtenido.

Por el contrario, funcionarios del Pentágono sugirieron que la Alianza del Norte sería muy importante en sus ataques terrestres contra las posiciones de Talibán.

Además, el presidente estadounidense George W. Bush predijo que la guerra en Afganistán sería muy larga, mientras que Musharraf expresó su pretensión de un conflicto “corto y focalizado”.

Shireen Mazari, directora del Instituto de Estudios Estratégicos de Pakistán, destacó los estrechos vínculos entre India, la Alianza del Norte y el antiguo rey afgano Zahir Shah.

“Si esos grupos llegan al poder, Pakistán puede esperar una frontera occidental inestable y una presencia india en el vecino Afganistán”, advirtió.

“Pakistán debe desarrollar sus propias alternativas para el futuro marco político en Afganistán”, exhortó, sugiriendo que Islamabad no debe confiarse en las promesas de Occidente.

El mundo musulmán contra ampliación de guerra

N. JANARDHAN

Corresponsal de IPS en Dubai, Emiratos Arabes Unidos.

La Organización de la Conferencia Islámica (OIC) y los cancilleres de la Liga Árabe reunidos el 11 de octubre en Qatar advirtieron que no aceptarán ataques de Estados Unidos a otros países árabes o musulmanes, más allá de Afganistán, con el pretexto de combatir el terrorismo.

Los delegados, excepto los iraquíes, iraníes y sirios, no condenaron la ofensiva de Estados Unidos contra Afganistán, lanzada en represalia por los atentados del 11 de septiembre contra las torres gemelas de Nueva York y el edificio del Pentágono (Departamento de Defensa) en Washington, que dejaron cerca de 6.000 muertos y desaparecidos.

Pero la OIC, que representa a 56 países y a 1.200 millones de musulmanes, expresó preocupación en un comunicado al finalizar su reunión de emergencia por las víctimas civiles de los bombardeos en territorio afgano, además de condenar inequívocamente los atentados en Nueva York y Washington.

La posición de la OIC ante los hechos del 11 de septiembre será seguramente apreciada por Estados Unidos. El comunicado final también aplacará en alguna medida la inquietud de la comunidad musulmana, dado el pronunciamiento contra la eventual ampliación de la guerra comenzada en Afganistán.

La OIC no mencionó en su declaración al Talibán. “Se trata de una situación muy compleja y delicada”, comentó Hussein Amin, un analista de asuntos de Medio Oriente establecido en El Cairo.

“Por un lado, la mayoría de los países árabes ven a Talibán como un motivo de vergüenza para la religión islámica y no desean poner en peligro la ayuda ni el respaldo de Estados Unidos. Pero, por otro, deben hacer frente a un creciente sentimiento antiestadounidense”, observó.

“No debemos culpar a Estados Unidos, porque lo que ocurrió allí es una gran tragedia: casi 6.000 personas murieron en un solo día debido a un acto terrorista”, dijo el canciller de Qatar, Hamad Bin Jassem Al Thani, luego de la reunión.

“En general no respaldamos acciones militares, pero tampoco respaldamos el terrorismo. Debemos identificar al terrorismo y sus causas, y por eso hemos pedido que se discuta este tema en el marco de las Naciones Unidas”, agregó. El príncipe Saud Al Faisal, canciller de Arabia Saudita, declaró que los países musulmanes desean “erradicar el terrorismo, que daña a la causa y al mundo islámicos, y nunca sirve a la causa palestina”. “La declaración final indica que aprobamos tácitamente los ataques aéreos (en Afganistán) y que distinguimos entre Talibán, que está distorsionando la imagen del Islam, y los pobres afganos”, comentó un analista en Dubai. “Si no cooperamos, Estados Unidos nos acusará de proteger a terroristas”, dijo, y expresó su decepción porque la OIC no especificó una respuesta en caso de una extensión de la campaña militar encabezada por Estados Unidos. Algunos delegados lamentaron que la OIC no haya aprovechado las actuales circunstancias para promover una solución de la cuestión palestina. En cambio, la declaración final se limitó a reproducir las críticas del presidente palestino Yasser Arafat hacia Israel por aprovechar la crisis para lanzar nuevas ofensivas contra su pueblo.

“Lamentablemente, no analizamos cómo podemos beneficiarnos de esta situación a largo plazo”, expresó Hamad bin Khalifa Al Thani, emir de Qatar y presidente de la OIC.

Un punto de coincidencia fue una cláusula que exhorta a un papel central de las Naciones Unidas en el combate al “fenómeno mundial del terrorismo” y a organizar una conferencia internacional sobre el tema.

Esto, según analistas, constituye un esfuerzo por distinguir entre el terrorismo tal como lo concibe Occidente y lo que los musulmanes consideran una forma legítima de resistir ocupaciones extranjeras, como la lucha de los grupos radicales Hizbolá, Hamas y Jihad Islámica, que Israel califica de terroristas.

“Hubiéramos preferido una campaña internacional”, declaró el secretario general de la Liga Árabe, Amr Mussa, en referencia a los ataques estadounidenses.

“El terrorismo es un fenómeno mundial y cualquier acción contra él debe discutirse en las Naciones Unidas”, destacó.

Egipto y Arabia Saudita, aliados de Estados Unidos, contrarrestaron los esfuerzos de Irán, Iraq y Siria por criticar los ataques de represalia.

A manera de arreglo, el comunicado de la OIC incluyó una declaración que rechazó cualquier eventual ofensiva contra un país miembro “con el pretexto de combatir el terrorismo”, un temor en aumento desde que Washington anunció la probabilidad de “ampliar” su guerra más allá de Afganistán, en referencia a Iraq.

“La opinión pública árabe no aceptaría una extensión de los ataques a otros países”, advirtió Jamal Al Suwaidi, del Centro de Estudios e Investigaciones Estratégicas de Emiratos Arabes Unidos.

“Ya hay manifestaciones en Egipto, Sudán, Omán e Iraq contra los ataques a Afganistán, que se propagarían como fuego si cualquier otro país árabe fuera blanco de Occidente”, previno un periodista de Emiratos.

En Pakistán ex mujaidines se unen contra Talibán

NADEEM YAQUB

Corresponsal de IPS en Peshawar, Pakistán.

Ex dirigentes de guerrillas afganas contra la invasión soviética (1979-1989) llegaron a Pakistán en busca de lograr un lugar en el gobierno que eventualmente reemplazará en su país al movimiento fundamentalista Talibán.

Uno de ellos es Abdul Haq, quien estuvo hasta fin de septiembre exiliado en Estados Unidos y que se aloja en una lujosa residencia del barrio Haya-tabad, en la nororiental ciudad pakistaní de Peshawar, donde es asediado por periodistas y dirigentes políticos.

El corpulento, barbudo y cuarentón Haq fue “mujaidín” (guerrillero islámico) y comandante de Hizb-e-Islami, uno de los grupos que lucharon contra los soviéticos. Ahora dice en fluido inglés que su misión es liberar a Afganistán del Talibán, que controla la mayor parte del país.

El Talibán soporta el ataque de la coalición internacional encabezada por Estados Unidos, por negarse a entregar a Bin Laden.

Todo indica que una de las consecuencias de la campaña militar en curso será el derrocamiento del Talibán, y eso determina que se realicen intensas negociaciones para preparar su sucesión.

“La gente de Afganistán está harta del Talibán. En la actualidad, el mundo entero está contra nuestro país. Queremos cambiar eso y vivir como seres humanos normales”, afirma Haq, quien propone instalar un nuevo gobierno afgano con amplia base social y asegura que no tiene ambiciones de liderazgo.

Sin embargo, el ex guerrillero procura que todos los viejos comandantes “mujaidines” y los que permanecen en actividad se congreguen en torno a él, por convicción o por intereses materiales.

“Quiero que los líderes que permanecen neutrales entren en acción, y con esa intención mantengo contactos con dirigentes tribales. Todas las tribus y comandantes se están uniendo”, explicó.

“Más de la mitad de los comandantes del Talibán (en actividad antes de los ataques del 11 de septiembre) han aceptado cambiar de bando, porque quieren un lugar en el próximo gobierno”, aseveró.

Otros ex jefes guerrilleros tienen planes similares a los de Haq, entre ellos Haji Zaman, quien fue comandante del Frente Islámico Nacional afgano durante la resistencia contra la Unión Soviética, con unos 4.000 combatientes a sus órdenes, y llegó a Pakistán tras estar exiliado en Francia.

Otro es Malik Zarin, quien combatió contra el Talibán en la lucha de facciones afganas tras la retirada soviética, a menudo junto con la Alianza del Norte, que continúa la lucha contra ese movimiento y controla en la actualidad 10 por ciento del territorio de Afganistán, en la región nororiental.

Todos los ex comandantes sostienen que el ex rey afgano Zahir Shah, exiliado en Roma desde que fue derrocado en 1973, desempeñará un papel central en el próximo gobierno de su país.

En las últimas semanas, la Alianza del Norte y el ex rey anunciaron que habían alcanzado un acuerdo para la sucesión del Talibán.

Analistas políticos pakistaníes piensan que personas como Haq cuentan con reputación y poder de convocatoria suficientes para lograr apoyo de dirigentes tribales afganos.

El gobierno de Pakistán está enemistado con la Alianza del Norte, porque mantuvo relaciones amistosas con el Talibán hasta los ataques del 11 de septiembre, y desea contar con aliados en el próximo gobierno afgano.

Esa parece ser la razón de que Islamabad haya permitido el ingreso al país de Haq y otros ex comandantes, cuyas intensas actividades políticas contra el Talibán tolera en silencio.

Entre los operadores políticos que buscan articular una amplia alianza afgana tras Zahir Shah es Pir Sayed Ahmed Gilani, presidente de la Asamblea de Paz y Unidad para Afganistán.

Algunos académicos afganos exiliados apoyan la restauración de la monarquía.

“Muchos afganos amantes de la paz regresarán al país para ayudar a reconstruirlo, si el rey vuelve a estar al mando”, pronosticó Rasool Amin, ex profesor de ciencia política en la Universidad de Kabul.

La mayoría de los observadores políticos piensan que sólo Zahir Shah podría ser un punto de referencia común para las etnias afganas, incluyendo a los mayoritarios patanes, predominantes en el Talibán, y a tajikos, uzbekos, hazaras y turkmenos, entre otros.

Poco antes de que el Ejército soviético se retirara de Afganistán, el entonces gobernante afgano, Mohammed Najibullah, lanzó sin éxito una iniciativa de “reconciliación nacional”, que incluía su renuncia para instalar un gobierno de transición, e invitó al depuesto rey a supervisar el proceso.

El entonces dictador militar de Pakistán, Zia-ul-Haq, quien apoyaba a las guerrillas contra la Unión Soviética, rechazó aquella propuesta, a la cual describió como un “beso de la muerte”.

Tras la retirada soviética, los comandantes “mujaidines” se convirtieron en señores de la guerra. La mayoría de ellos estaban involucrados en el tráfico de armas y drogas, y algunos se enriquecieron mediante el comercio ilegal de piedras preciosas y madera.

Haq admite que cometió errores en aquel periodo de caos y violencia, que terminó en 1996 con el predominio del Talibán, y asegura que el regreso de Zahir Shah ayudará a forjar la unión de todos los ex comandantes guerrilleros.

La Organización de las Naciones Unidas también trabaja para articular una amplia alianza en torno al exiliado rey. El enviado especial de la ONU para Afganistán, Frances Vendrell, ha mantenido reuniones en Ginebra y Roma con dirigentes políticos y otras personalidades afganas exiliadas, para procurar que resuelvan sus discrepancias.

Acuerdos para “formar un gobierno representativo de una amplia base social y política podrían desembocar en la convocatoria a elecciones o a una Loya Jirga opinó Vendrell.

ONU alerta sobre posible matanzas de civiles

GUSTAVO CAPDEVILA

Corresponsal de IPS en Ginebra.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, previno a la Alianza del Norte, opositora al régimen de Talibán que controla el 90 por ciento del territorio afgano, que no habrá impunidad en caso de matanzas de civiles.

Robinson se declaró muy preocupada ante la posibilidad de que se cometa una masacre de combatientes si se registra un cambio en el control territorial. Por ejemplo -dijo- si la Alianza del Norte toma Kabul, la capital de Afganistán hoy en poder del Talibán.

La Alianza del Norte recibe apoyo político y material estadounidense desde que Washington comenzó a presionar a Kabul para que entregue a Osama Bin Laden.

Robinson reclamó a Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países “con presencia importante” que refuercen su mensaje de que “no hay más impunidad”, porque el pueblo afgano ha sufrido mucho por más de dos decenios de guerra civil y, en los últimos tres años, por el hambre.

El mensaje de que “todo el que cometa matanzas de civiles será llevado a juicio” debe ser divulgado, pidió Robinson en una rueda de prensa convocada originalmente para comentar su próximo viaje a América del Sur.

En declaraciones anteriores efectuadas también a una radio irlandesa, la Alta Comisionada había solicitado una suspensión de las hostilidades en Afganistán para facilitar la asistencia a la población.

Una interrupción de los bombardeos aéreos iniciados por Estados Unidos contra Afganistán permitiría abastecer a la población antes de la llegada del invierno boreal, dijo.

Robinson fue informada de la situación en esa región de Asia central por dos altos funcionarios de su oficina que regresaron a Ginebra tras una visita a Pakistán.

La Alta Comisionada precisó que con las nevadas invernales, cuyo inicio se prevé para el 15 de noviembre, amplias regiones se vuelven inaccesibles.

La funcionaria de la Organización de las Naciones Unidas sostuvo que su oficina sigue con preocupación los dos aspectos de la crisis afgana: la situación humanitaria de la población no combatiente y el peligro de acciones armadas masivas contra esos civiles.

Con relación a las penurias humanitarias, Robinson describió que se asiste a una catástrofe potencial, con una “necesidad desesperada de acceso urgente” a alimentos y tiendas en Afganistán.

Unos dos millones de personas, mujeres, niños y ancianos, carecen de comida y abrigo para protegerse del invierno inminente.

La campaña de bombardeos tiene aterrorizada a esa población, que se desplaza permanentemente, lo que también le impide acceder a alimentos y al abrigo.

El cierre de las fronteras complica la situación. “Sería mejor abrirlas para que la gente pueda cruzar en busca de asistencia humanitaria”, estimó Robinson.

La segunda preocupación de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se relaciona con los antecedentes de Afganistán, que ha atravesado un ciclo de matanzas perpetradas tanto por los talibanes como por la Alianza del Norte, describió Robinson.

Por esa razón, ahora debe haber una situación de ninguna impunidad para las violaciones masivas de los derechos humanos, insistió la funcionaria.

Robinson declaró que fue “absolutamente inaceptable” que más de 6.000 civiles inocentes perecieran en los ataques del 11 de septiembre contra el Pentágono, en Washington, y contra las torres gemelas del World Trade Center en Nueva York.

Pero también es inaceptable que pudiera haber centenares de miles y tal vez millones de víctimas indirectas entre los afganos, que sufrirían de manera terrible y muchos de los cuales morirían por falta de comida en los próximos meses, dijo.

La Alta Comisionada recordó que Estados Unidos había efectuado la mayor contribución económica, 320 millones de dólares, para la campaña de asistencia humanitaria a la población afgana que organiza la ONU.

Robinson reconoció que Estados Unidos afronta una terrible devastación y una inseguridad continua. El mundo asiste a una situación real de inseguridad humana, y la seguridad humana es también una de las bases de los derechos humanos, dijo.

Sin embargo, la preocupación de la Oficina de la Alta Comisionada se concentra actualmente en las vidas y en el derecho a la vida del pueblo de Afganistán, dijo Robinson.

En Afganistán, insistió, hay dos riesgos: el de morir de inanición o de frío y el de las matanzas continuas debido a un cambio del poder militar en el conflicto interno.

Robinson se mostró preocupada por la aplicación de las últimas disposiciones para contrarrestar el terrorismo adoptadas por el Consejo de Seguridad de la ONU. La funcionaria teme que el apresuramiento para redactar esas normas, en el plazo de 90 días fijado por el organismo, algunos gobiernos aprovechen para dictar medidas que repriman la libertad de expresión y a los activistas de derechos humanos.

Entre la guerra y el hambre

NADEEM IQBAL

Corresponsal de IPS en Islamabad.

Los niños y niñas de Afganistán, que son la mitad de los 21 millones de habitantes del país, han estado expuestos a la guerra y sus nefastas consecuencias en las últimas dos décadas.

Ellos son las principales víctimas del hambre, las enfermedades, el analfabetismo, el trabajo forzado y el reclutamiento como soldados.

La familia de Muhammad Mugheez, de siete años, forma parte de los 200.000 afganos que lograron llegar en las últimas semanas a Islamabad, la capital de Pakistán, un lugar mucho mejor para vivir que los atestados campamentos de refugiados de la frontera con Afganistán.

Muhammad pasa el día mendigando en las calles junto a su madre, y por la noche, hace fila junto a su padre y otros cientos de personas frente a una panadería, para obtener pan gratis.

Los refugiados constituyen el 20 por ciento de los ocho millones de habitantes de Islamabad. Se estima que 1.000 afganos llegan a Pakistán cada día.

Pakistán alberga a tres millones de refugiados afganos, la mitad de ellos niños. La mayoría de los que viven en Islamabad se dedican a hurgar en la basura.

La situación ya era mala para la infancia de Afganistán antes de que comenzaran los bombardeos de Estados Unidos y Gran Bretaña, el día 8, pero ahora es peor, declaró Eric Laroche, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en Afganistán.

Como la mayoría de los niños están desnutridos y carecen de abrigo adecuado, Unicef estimó que 100.000 de ellos morirán este invierno de neumonía, diarrea y otras enfermedades.

Menos de cinco por ciento de todos los niños de Afganistán asisten a la escuela, una cifra que revela el colapso del sistema educativo de ese país devastado por la guerra.

De hecho, una generación entera de niños afganos está creciendo sin educación. Las niñas son las más afectadas, dado que el gobierno del grupo fundamentalista islámico Talibán les prohíbe asistir a la escuela.

Para empeorar su situación, el reclutamiento y la movilización de menores en filas de las milicias Talibán y de la opositora Alianza del Norte recrudeció tras el inicio de los bombardeos aéreos, según informes.

La no gubernamental Sociedad para la Protección de los Derechos de la Infancia (SPARC), de Pakistán, pidió al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que apruebe normas específicas para impedir el uso de niños o adolescentes como soldados en el actual conflicto de Afganistán. “La ONU debe tomar en cuenta la protección a la infancia en sus decisiones políticas sobre Afganistán, aprobando medidas para detener el reclutamiento de niños soldados, encomendando a la Misión Especial en Afganistán que vigile esas actividades y desplegando asesores especiales sobre infancia en futuras operaciones de paz o humanitarias”, exhortó el grupo.

El reclamo de SPARC se enmarca en el nuevo Protocolo Opcional de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de menores en conflictos armados, que fue adoptado por la Asamblea General de la ONU en mayo del 2000. El protocolo “prohíbe a gobiernos y grupos armados utilizar a menores de 18 años en hostilidades, prohíbe todo reclutamiento obligatorio de menores de 18 años, y aumenta la edad mínima y exige salvaguardas estrictas para el reclutamiento voluntario”. Ni Pakistán ni Afganistán firmaron el Protocolo Opcional, pero Pakistán sí es signatario de la Convención sobre los Derechos del Niño. Los niños y adolescentes de Afganistán han sido utilizados por todas las partes beligerantes en los últimos 20 años de guerra civil, según la Coalición para Detener el Uso de Niños Soldados. Talibán y la Alianza del Norte continúan utilizando menores en forma compulsiva o voluntaria. “Continúan los informes sobre reclutamiento de menores, en particular en las ‘madrasas’ (escuelas religiosas de Pakistán), cuyos jóvenes estudiantes refugiados afganos fueron los primeros en ser reclutados por Talibán para tomar el poder en 1994”, señaló la Coalición en un informe publicado en septiembre. Unos 2.500 niños afganos y locales de Darra Adam Khel, una localidad tribal en la frontera entre Pakistán y Afganistán, participan de la gue-

rra en forma directa y a través de la fabricación de pequeñas armas y relleno de cartuchos, afirmó Saifur Rehman, de SPARC, que realizó una investigación en ese lugar. Su remuneración diaria oscila entre cinco y 30 rupias (entre ocho y 48 centavos de dólar).

Además, pese a los estrictos controles fronterizos, muchos menores se dedican al contrabando de gasolina, ropa, cosméticos, jabón, pasta dentífrica, alimentos procesados y repuestos de automóviles, agregó Rehman.

El paso del tiempo conspira contra Estados Unidos

JIM LOBE

Corresponsal de IPS en Washington.

Para el 18 de octubre se podía decir que la guerra antiterrorista de Estados Unidos no marchaba según lo planeado, a casi dos semanas del comienzo de la campaña militar contra Afganistán.

Los líderes de Estados Unidos y Gran Bretaña procuran proyectar determinación y confianza, pero la preocupación por la falta de avance en varios frentes aumenta en Washington y en Europa, donde cada vez más organizaciones humanitarias exigen el rápido fin de los bombardeos.

Tampoco ayudó que aviones de guerra estadounidenses acertaran en blancos erróneos. En un caso destruyeron una aldea próxima a un antiguo campamento de entrenamiento. En otro, arrasaron un depósito de suministros de ayuda que tenía una gran cruz roja pintada en el techo.

Militarmente, el movimiento fundamentalista Talibán, que controla la mayor parte de Afganistán, resultó un escollo mayor de lo previsto.

En el terreno diplomático, las gestiones para forjar una coalición que gobierne tras el pretendido derrocamiento del Talibán también se frustraron, por los intereses en conflicto de las diversas facciones afganas y de algunos países. “Aunque aún existe la esperanza de que el Talibán se desmorone en los próximos días, parece resistir mejor de lo que esperábamos. Y cuánto más resista, más difícil será expulsarlo”, comentó un funcionario en Washington. Simultáneamente, los diplomáticos estadounidenses intentan atenuar la creciente tensión por la región de Cachemira entre India y Pakistán, dos vecinos

rivales y con armas nucleares, y entre la Autoridad Nacional Palestina e Israel, donde fue asesinado el ministro de Turismo. Así mismo, el conflicto de Cachemira o la escalada de la violencia israelí-palestina seguramente habrán de exacerbar el sentimiento antioccidental en el mundo islámico, mientras el gobierno de George W. Bush procura convencer a los musulmanes de que sólo lucha contra el terrorismo, y no contra el Islam.

“Tenemos más crisis de las que podemos manejar por el momento. Los funcionarios del Departamento de Estado (cancillería) se sienten como un cuerpo de bomberos”, dijo un auxiliar del congreso.

El frente militar ha sido especialmente frustrante. Washington esperaba que la primera semana de bombardeo devastara la infraestructura y la moral del Talibán, causara deserciones en masa en todo el país y el colapso del poder del movimiento fundamentalista afgano a fines de octubre.

Altos funcionarios del Pentágono (Departamento de Defensa), insistieron una semana después del inicio de los bombardeos que éstos habían “des-tripado” la capacidad de combate de Talibán, luego que se informara la deserción de 3.000 combatientes talibanes en el norte, sin que se confirmara.

Pero el miércoles 17 de octubre, las fuerzas del Talibán hicieron retroceder a los rebeldes de la Alianza del Norte, que pretendían ocupar la meridional y estratégica ciudad de Mazar-i-Sharíf.

Mazar-i-Sharíf es considerada un punto clave para los planes de Washington. Su captura desalojaría al Talibán de todo el norte del país, salvo Kabul, y el Pentágono pretende utilizar su aeropuerto -que no ha sido tocado por bombas ni misiles- como base para las fuerzas terrestres de Estados Unidos.

Washington esperaba que Mazar-i-Sharíf estuviera en poder de la Alianza del Norte en esta etapa, para permitir el avance de las fuerzas rebeldes hacia el oeste, hasta Herat. Esa ofensiva presionaría al bastión de Talibán en Kabul.

Ahora esos planes podrían retrasarse. Incluso comandantes rebeldes reconocen que podría llevar semanas antes de que puedan recabar la fuerza suficiente para tomar la ciudad. Washington también tiene grandes dificultades en el frente político para reunir una coalición multiétnica que reemplace al Talibán. Esa coalición se elegiría mediante una Loya Jirga, o consejo tribal tradicional, reunido en torno de la autoridad del rey exiliado Zaher Shah, e integrada por tajikos, uzbekos, hazaras y otras facciones étnicas que conforman la Alianza del Norte, además de patanes (pashtún) contrarios al Talibán, muchos de cuyos dirigentes viven en Pakistán occidental. Los patanes son la base étnica del Talibán y el mayor grupo étnico de Afganistán, con 40 por ciento de la población.

Como las rivalidades étnicas son tan profundas, Estados Unidos pretende asegurar que la Alianza del Norte no ocupe la capital antes de que se logre armar una coalición más amplia.

Por eso los aviones estadounidenses aún no desataron todo su poder contra las defensas talibanas 60 kilómetros al norte de Kabul.

Diez días después de iniciados los bombardeos el secretario de Estado, Colin Powell, se reunió en Pakistán con el presidente Pervaez Musharraf, quién le exigió que dirigentes talibanes “moderados” tuvieran un papel destacado en un gobierno posterior al Talibán, como garantía de los intereses paquistaníes y patanes.

Powell habría accedido al pedido, lo cual agrega más complicaciones a la búsqueda de una coalición viable que reemplace al Talibán. Los dirigentes de la Alianza temen quedar al margen y dan señales de no querer cooperar con esa estrategia estadounidense. Los patanes antitalibán que cooperaban con Washington también manifestaron su inquietud por el acuerdo entre Powell y Musharraf.

Así mismo, Estados Unidos suponía que la ONU enviaría a Afganistán fuerzas de mantenimiento de la paz tras la derrota o el colapso del Talibán. Sin embargo, el propio enviado especial de la ONU a Afganistán, Lakhdar Brahimí, puso en duda esa posibilidad. “Afganistán es un país muy difícil. Es un pueblo muy orgulloso y no le gusta recibir órdenes de extranjeros. No les gustan los extranjeros, sobre todo con uniformes militares”, sostuvo.

Pacifistas entre dos fuegos

NADEEM IQBAL

Corresponsal de IPS en Islamabad.

El movimiento pacifista de Pakistán está bajo fuego cruzado de las agencias de seguridad y los extremistas religiosos. Las agencias no les permiten manifestarse, y los fundamentalistas los hostigan por sus “ideas occidentalizadas”.

Los activistas rechazan los bombardeos contra Afganistán de Estados Unidos y sus aliados, que comenzaron el 7 de octubre con apoyo de Islamabad, y son atacados por grupos religiosos fundamentalistas, que se oponen a

la campaña militar en curso pero creen que los pacifistas “colaboran con Occidente”.

Trabajadores de organizaciones no gubernamentales (ONG) en la provincia de la Frontera Noroccidental, limítrofe con Afganistán, y en especial en su distrito de Bajaur, donde operan por lo menos una docena de esas organizaciones, fueron atacados por turbas en las últimas semanas.

El Foro de ONG de Pakistán informó que oficinas de por lo menos ocho organizaciones de la sociedad civil han sido saqueadas e incendiadas.

Entre los grupos atacados estuvieron la Organización por el Bienestar de las Mujeres y la Infancia, la Fundación para el Desarrollo Darul Falah y Salik, la Sociedad Protectora de los Derechos de la Infancia y la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán. “Todo el equipo de oficina fue robado, y en algunos casos también hubo ataques contra los hogares de los trabajadores de ONG”, indicó el Foro en un comunicado.

El 9 de octubre, el Foro señaló que el gobierno no había adoptado medidas para arrestar a quienes atacaron las oficinas ni para proteger a potenciales víctimas de nuevos atentados. “También nos preocupa que en más de un caso las autoridades no intentaron controlar a las turbas de atacantes, ni reforzar a tiempo la acción policial”, afirmaron.

Los pacifistas comenzaron a organizarse en mayo de 1998, cuando Islamabad y Nueva Delhi realizaron ensayos de armas nucleares, y han solicitado con insistencia a ambos gobiernos que abandonen su peligrosa carrera armamentista.

En las últimas semanas llaman al diálogo y a la búsqueda de alternativas a la guerra, pero a menudo terminan como blanco de hostilidades.

El coordinador de la Comisión de Ciudadanos por la Paz, Aasim Sajjad Akhtar, señaló que las autoridades permiten todas las manifestaciones de extremistas religiosos, pero suelen prohibir las pacifistas. “Somos ciudadanos respetuosos de la ley, y solicitamos el permiso correspondiente a las autoridades de distrito, que lo niegan en la mayoría de los casos”, explicó.

“Sus 30 minutos terminaron, váyanse a casa”, dijo un policía a unos 50 pacifistas reunidos ante las oficinas de la Organización de las Naciones Unidas en Islamabad, para pedir el inmediato cese de los bombardeos.

La manifestación se llevó a cabo mientras visitaba el país el secretario de Estado estadounidense, Colin Powell, fue organizada por la Comisión de Ciudadanos por la Paz, y participaron en ella trabajadores de ONG, maestros, estudiantes, sindicalistas y periodistas.

Un policía dijo a IPS las protestas de fundamentalistas se permiten porque esos grupos “cuentan con gran apoyo del público y podrían manifestarse sin autorización en cualquier momento, si lo desearan”.

“La contrapartida del permiso oficial es que prometen no alterar la ley y el orden, y en cierta medida cumplen ese compromiso”, explicó.

De todos modos, la Comisión de Ciudadanos por la Paz ha logrado realizar media docena de protestas en Islamabad, y otros pacifistas han organizado manifestaciones en la sudoriental ciudad de Karachi y las septentrionales de Lahore y Peshawar, que son las mayores del país.

El 16 de septiembre, esa comisión entregó a un representante de la ONU un mensaje en el cual sostuvo que “Estados Unidos y sus aliados no han agotado las opciones diplomáticas para afrontar la situación en forma pacífica”.

“Los ciudadanos de Pakistán y Afganistán se sienten cada vez más inseguros. Sus intereses son pisoteados por Estados Unidos y sus aliados, y también por los grupos religiosos extremistas”, alegó.

“Existe una clara y urgente necesidad de que la ONU desempeñe el papel que le corresponde para combatir al terrorismo de todos los tipos, ya sea independiente o patrocinado por Estados”, sostuvo.

El 29 de septiembre, nueve integrantes de la comisión, incluyendo a cuatro mujeres que vestían andrajos, ofrecieron una conferencia de prensa ante el hotel Marriott de la capital, donde se alojan varios grupos de periodistas extranjeros.

Los nueve comenzaron a marchar descalzos hacia las embajadas de Afganistán y de Estados Unidos, para entregar propuestas de paz, pero fueron arrestados durante varias horas, y la policía les advirtió con severidad que no intentaran acciones similares.

Muchos pacifistas están preocupados porque sus acciones no reciben mucha atención del público, a diferencia de las organizadas por fundamentalistas.

“El movimiento atraviesa un periodo de confusión”, sostuvo el activista Pervez Hoodbony.

“La gente está muy perturbada por los bombardeos contra Afganistán y desea que cesen, pero también rechaza las crueles políticas del movimiento Talibán (fundamentalista islámico, que controla la mayor parte del territorio afgano), dentro y fuera de ese país, que han impulsado el fanatismo religioso”, explicó.

“Los pacifistas no han logrado hasta ahora un equilibrio entre ambos sentimientos”, añadió.

Muchos analistas políticos piensan que el presidente Pervez Musharraf, quien tomó el poder en octubre de 1999, tiene razón cuando dice que los fundamentalistas opuestos a los ataques estadounidenses son una minoría, pero advierten que la simpatía hacia esa minoría crece desde que comenzaron los bombardeos.

Muchos pakistaníes dicen que aún esperan que el gobierno de Estados Unidos dé a conocer pruebas concluyentes de que el saudita Osama Bin Laden fue responsable de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y Washington.

El ataque contra Afganistán se debe a que el Talibán se niega a entregar a Bin Laden, residente en ese país. El Consejo de Defensa Pakistaní-Afgano, una coalición de partidos religiosos, convocó con éxito a una huelga nacional el día de la llegada de Powell.

Muchas personas sienten que Washington las “traicionó” dos veces en las últimas décadas: en la guerra con India de 1971, cuando no apoyó a Pakistán y el país fue dividido en dos para crear Bangladesh, y en 1990, cuando aplicó sanciones a Islamabad. “¿Deberíamos confiar una vez más en los estadounidenses?”, dijo a IPS Nazir Ahmed, un carnicero, quien añadió que no comparte las posiciones de los extremistas religiosos pero que “le gusta escucharlos”.

ENCRUCIJADA LATINOAMERICANA

Atentados propagan ondas de tensión

DIEGO CEVALLOS

Corresponsal de IPS en Ciudad de México.

El ataque terrorista en Estados Unidos propagó ondas de tensión hacia América Latina, donde los gobiernos ordenan medidas de seguridad en aeropuertos y fronteras y ofrecen a Washington colaboración contra el terrorismo, mientras se multiplican las falsas amenazas de bomba.

“La acción terrorista fue una afrenta contra Estados Unidos, la democracia, la civilización y también contra los mexicanos”, dijo Jorge Castañeda, canciller de México, donde la policía busca a 13 personas de origen árabe supuestamente vinculados con los atentados.

Argentina está dispuesta a respaldar “las fuerzas del bien” y a cooperar en acciones que emprenda Estados Unidos para combatir el terrorismo, declaró el canciller Adalberto Rodríguez Giavarini.

El gobierno de Fernando de la Rúa no descarta colaborar con tropas en operaciones contra los terroristas, aseguró la prensa de Buenos Aires.

La custodia policial del presidente mexicano Vicente Fox se redobló, mientras en Argentina se suspendieron las visitas guiadas a la Casa Rosada, sede de la presidencia.

Agentes de inteligencia de Argentina, Brasil y Paraguay mantienen reuniones en su triple frontera, donde reside una nutrida comunidad musulmana, para detectar el eventual paso de terroristas.

Además, Paraguay suspendió la entrega de visas de ingreso después de los atentados del martes 11 de septiembre contra sitios emblemáticos de Nueva York y Washington, perpetrados por atacantes suicidas que utilizaron aviones comerciales secuestrados.

En Colombia, el ministro de Defensa Gustavo Bell, anunció el aumento de las “medidas preventivas de seguridad”. “Pedimos a la ciudadanía que colabore en la prevención de estos actos (terroristas) que han demostrado no tener barreras”, expresó.

“Si esto ocurre en Estados Unidos, imagínense a lo que estamos sujetos en las sociedades como las nuestras, que no tienen tecnología” para prevenir estas operaciones, añadió Bell.

“Estamos muy nerviosos. Estos atentados no ponen muy inseguros a todos”, dijo en México Alejandra Rosales, azafata de la aerolínea Aeroméxico,

que como otras en América Latina debió suspender sus vuelos a Estados Unidos tras los atentados.

El sindicato de trabajadores de Aeroméxico solicitará a la Secretaría (ministerio) de Transportes que capacite a sus afiliados para enfrentar el secuestro de aviones.

Los controles se multiplicaron al extremo en todos los aeropuertos de América Latina. En Argentina se prohibió a los pasajeros el ingreso a los aviones con cortaúñas, cortapapeles y todo producto químico en aerosol, como desodorantes.

En el aeropuerto de Quito, en tanto, no se permitió en los últimos días la entrada a nadie sin su billete de vuelo. Los familiares y amigos que despiden o reciben a viajeros debieron esperar a la intemperie.

“Son instrucciones de las autoridades y todo es por los atentados”, comentó un trabajador de ese aeropuerto.

El miércoles 12 de septiembre, varias salas de la terminal aérea de México fueron desalojadas con rapidez y en medio de gritos, luego de que en el mostrador de una línea aérea sudamericana se recibiera aviso de la presencia de una bomba, que resultó una falsa alarma.

También hubo amenazas semejantes en el aeropuerto de San José de Costa Rica.

El día de los atentados en Estados Unidos, las autoridades de Chile cerraron el espacio aéreo en un perímetro de 25 kilómetros en torno del Palacio de la Moneda, la casa de gobierno.

El miedo llegó al punto que la compañía Lufthansa no permitió el despegue en Santiago de un vuelo a Buenos Aires, mientras tres argentinos de origen musulmán no abandonaran el avión.

Las amenazas de bomba aumentaron en Argentina. También el miércoles 12 de septiembre fueron evacuados en Buenos Aires la casa de gobierno, la cancillería, el edificio de los tribunales de justicia, un hospital, las oficinas de la compañía aérea American Airlines y hasta un centro cultural.

Algo similar sucedió en Chile. Allí se registraron amenazas de bombas en Santiago y en las ciudades de Antofagasta, Concepción, Rancagua, Temuco y Viña del Mar.

El gobierno chileno reiteró su interés en elaborar un proyecto de ley para la creación de un servicio de inteligencia nacional, que actuaría en caso de amenazas terroristas.

El nerviosismo causado por los atentados también se notó en el aumento de seguridad en las representaciones diplomáticas de Estados Unidos

en toda la región y en ciertos casos en embajadas de otros países, como sucedió en Venezuela.

La Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana, que representa a Washington, trabajó con normalidad, con un discreto refuerzo de su seguridad.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias cubanas se mantuvieron luego de los atentados en Estados Unidos y hasta el jueves 13 de septiembre en “posición uno” (alerta máximo), y luego pasaron a “posición dos” (estado de alerta). El aeropuerto internacional de La Habana trabajó con normalidad, pero se suspendieron los vuelos charter desde y hacia Estados Unidos.

Tragedia latinoamericana en Nueva York

KINTTO LUCAS

Corresponsal de IPS en Quito.

Decenas de latinoamericanos que trabajaban en el destruido World Trade Center de Nueva York y en sus alrededores están desaparecidos y sus familiares se organizan para recabar información y colaborar en las tareas de rescate.

Inmigrantes argentinos, brasileños, chilenos, colombianos, ecuatorianos, mexicanos, paraguayos, peruanos, salvadoreños y venezolanos figuran como desaparecidos y muchos habrían muerto entre los escombros de las torres gemelas de Nueva York y también en el Pentágono (Departamento de Defensa), en Washington, el otro objetivo de los atentados.

Familiares de ecuatorianos radicados en Nueva York advirtieron que es difícil determinar la cantidad de muertos y desaparecidos de origen latinoamericano, porque muchos no tenían visa de ingreso al país. “Gran cantidad de personas trabajan con nombre falso para escapar de la represión, por no tener visa para residir en Estados Unidos”, comentó Pablo Torres, integrante de una asociación de familiares de inmigrantes ecuatorianos.

Torres informó que han sido dadas por desaparecidas más de 10 personas procedentes de la provincia de Azuay, ubicada en la sierra sur de Ecuador, de donde salen miles de emigrantes cada año.

En tanto, el canciller ecuatoriano Heinz Moeller dijo que hasta ahora no hay reportes ciertos sobre muertos o heridos de este origen, tras señalar

que ha sido creado un comité de coordinación para el seguimiento de la situación de los emigrantes en Estados Unidos.

Moeller dijo haber tomado contacto con asociaciones de ecuatorianos radicados en Estados Unidos y con el consulado en Nueva York, pero “hasta ahora, y a Dios gracias, no tenemos ninguna confirmación” de víctimas ecuatorianas.

Por su parte, el Comité Ecuatoriano de Derechos Humanos y Sindicales aseguró en un comunicado que “entre las miles de muertos se cuentan por lo menos 50 compatriotas que trabajaban en empresas de limpieza en el World Trade Center y otros que vendían souvenirs (recuerdos) en los alrededores”.

Estudios locales calculan que unos 600.000 ecuatorianos residen en Nueva York, 60.000 en Washington, 100.000 en Chicago, y 100.000 en Los Angeles.

El sociólogo ecuatoriano Luis Almeida, miembro de una organización dedicada a la lucha contra el síndrome de inmunodeficiencia adquirida que tenía sus oficinas en el piso 16 de la Torre Norte del pulverizado World Trade Center, aseguró que peruanos y colombianos que conoce lograron salvarse.

Almeida tenía previsto reunirse el mismo martes 11 de septiembre con ellos, pero los ataques terroristas comenzaron antes de que llegara al lugar. “Afortunadamente, todas las personas que estaban en el piso 16 fueron evacuadas, según me han comentado mis amigos. Ellos estuvieron en el momento en que se estrelló el primer avión, pero después fueron sacados del lugar”, aseguró Almeida.

La colonia mexicana también fue afectada por los atentados, informó el consulado de ese país en Nueva York, al dar cuenta de que unas 150 personas de ese origen trabajaban en las torres gemelas, de las cuales 11 han desaparecido.

Pero organizaciones no gubernamentales locales aseguran que suman 500 los trabajadores mexicanos en las torres destruidas, en una ciudad en la que residen más de 600.000 personas de esa procedencia.

“Me quiero marchar. Ya no quiero vivir en Nueva York, pues es demasiado peligroso”, dijo el mexicano Luis Alberto Camacho, quien se salvó de la catástrofe porque se despertó más tarde de lo habitual y se retrasó para llegar al trabajo.

Analistas mexicanos advirtieron, además, que los atentados en Estados Unidos postergarán la cuestión migratoria a un segundo plano en las relaciones entre los dos países, y que Washington aumentará el control del ingreso de inmigrantes latinoamericanos. “Es posible que surja una ola de xenofobia

en el país vecino contra los mexicanos y latinoamericanos en general”, opinó Carlos Welti, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Respecto de Venezuela, el cónsul general en Nueva York, Pedro Conde-Regardíz, teme que se encuentren compatriotas suyos entre las víctimas fatales de los atentados, pues en el piso 82 de una de las torres gemelas tenía sus oficinas la empresa venezolana Eurobrokers International.

Mientras, portavoces de la organización comunal y multiétnica de chilenos residentes en Nueva York llamada La Peña indicaron que unas 100 personas de ese origen no han podido ser ubicadas, por lo que se teme estén heridas o muertas.

Entre los inmigrantes colombianos sólo ha sido confirmada la muerte de Carlos Alberto Montoya, un piloto comercial que viajaba a bordo de uno de los aviones estrellados, pero hay decenas de desaparecidos según consignan la prensa local.

Iver Marino Cárdenas, de Radio Unica de Nueva York, señaló que, aunque es mínima la cantidad de colombianos que residen en Manhattan, unos 500 trabajaban en limpieza de las oficinas de las torres gemelas.

Añadió que al menos 20 más prestaban servicios como camareros y cocineros en el lugar, algunos de ellos en la empresa Windows of the World, en el piso 106 de la Torre Norte, mientras que otros 30 son buscados por sus familiares en Washington y Pittsburg.

Alex Silvera, oriundo de la ciudad colombiana de Barranquilla y que llegó el lunes 10 de septiembre a Nueva York para comenzar a trabajar en el piso 43 de la Torre Norte en la madrugada del día de los atentados, narró que salvó su vida gracias a que fue autorizado a retrasar su ingreso al puesto laboral.

De ese mismo piso de las desaparecidas torres gemelas fueron evacuados a tiempo una veintena de colombianos, agregó.

En tanto, Pedro Grehan, uno de los dos argentinos que aún continúan desaparecidos, hablaba por teléfono con su amigo Matías Ferrari desde una de las torres justo en el momento en que el primer avión de American Airlines se estrelló. “Estábamos hablando y en un momento (Grehan) me dijo: ‘te dejo porque esto es un quilombo (embrollo)’. Pero cuando dejamos de hablar, como telón de fondo, escuché voces, pero no gritos de pánico ni nada que se le parezca”, contó Ferrari al diario Clarín, de Buenos Aires.

Esa apreciación es compartida por el portorriqueño William Rodríguez, empleado de mantenimiento del World Trade Center, quien cree fue una de los últimos en salir de los edificios tras ayudar a poner a salvo a decenas de personas. “Las personas que bajaban por las escaleras, algunas sangrando, pa-

recían no tener idea de lo que estaba pasando pues lo hacían con orden, algunas bromeando, sin muestra de pánico en ninguna de ellas”, comentó Rodríguez al diario argentino *Página 12*.

En Brasil, la cancillería informó que tiene una lista de 31 personas desaparecidas de esa nacionalidad, pero todavía es imposible determinar con certeza la cantidad de víctimas fatales.

Estadísticas locales calculan que unos 800.000 brasileños, de los 1,5 a dos millones de brasileños emigrados, residen en Estados Unidos.

El diario de la comunidad brasileña en Nueva York, *The Brasilianas Newspaper*, calculó que unos 500 limpiabotas de ese origen trabajaban dentro del World Trade Center, de los 7.000 que hay en la ciudad. Mucho de ellos son profesionales universitarios que emigraron para ganar cerca de 600 dólares semanales en esta tarea.

El Minas Shoe Repair, una de las empresas de servicios de limpiabotas que estaban ubicadas en el subsuelo de una de las torres gemelas, empleaba a 15 brasileños.

Uno de los empleados de Minas Shoe Repair, David Mançano, sorprendido por la tragedia dentro del ascensor que quedó paralizado en el piso 50, narró que tuvieron que romper una de las paredes del ascensor, bajar por las escaleras en medio del humo y correr para escapar.

Los 230.000 habitantes de la ciudad brasileña de Governador Valadares, ubicada en el central estado de Minas Gerais, son los más preocupados por lo ocurrido en Nueva York debido a que entre 30.000 y 40.000 personas de este lugar forman parte de la colonia de emigrados de Brasil en Estados Unidos.

La economía de Governador Valadares depende de los envíos de dólares de estos emigrantes a sus familias. Casi 800 de ellos no habían sido contactados por sus familiares seis días después de los atentados.

En El Salvador, el presidente Francisco Flores confirmó la muerte de una persona de esa nacionalidad que viajaba en uno de los aviones estrellados contra las torres gemelas, y aseguró que podían haber muchos más compatriotas muertos. “No tenemos aún una cifra de desaparecidos ni de fallecidos, pero en el World Trade Center trabajaban una enorme cantidad de gente y creo que debemos suponer que hay salvadoreños fallecidos”, comentó Flores.

Otro de los que fallecieron en uno de los tres aviones estrellados fue el uruguayo Alberto Domínguez, de 65 años y ex campeón nacional de ciclismo en 1953, que estaba radicado en Australia.

En Perú, el comité creado para rastrear la situación de los nacionales que trabajaban en los edificios siniestrados, confirmó la muerte de un joven trabajador.

En todos los países que tiene colonias importantes en Nueva York se establecieron servicios telefónicos gratuitos para que los emigrantes se comunicaran con los familiares, y los consulados abrieron servicios especiales de ayuda.

El TIAR renace en los escombros de las torres gemelas

GUSTAVO GONZÁLEZ

Corresponsal de IPS en Santiago de Chile.

El ataque contra Nueva York y Washington posibilitó el renacer del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) como instrumento político de apoyo a Estados Unidos, aunque sin participación militar directa de América Latina en la eventual ofensiva contra Afganistán.

El presidente estadounidense George W. Bush se comunicó telefónicamente con sus pares de Argentina, Fernando de la Rúa, y Chile, Ricardo Lagos, en la víspera de las dos reuniones que los cancilleres de la OEA (Organización de Estados Americanos) celebrarán en Washington.

Bush agradeció la solidaridad de ambos mandatarios tras los ataques del día 11, en que supuestos fundamentalistas islámicos estrellaron aviones comerciales secuestrados contra las torres gemelas del World Trade Center en Nueva York y contra el Pentágono, sede del Departamento de Defensa en Washington.

El asunto fue tratado en la Reunión de Consulta de los cancilleres de los 34 países de la OEA, que fue seguida por una sesión, también de ministros de Relaciones Exteriores, de los 24 estados parte del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).

Ambas reuniones fueron convocadas por el Consejo Permanente de la OEA, reunido en Washington, que invocó el artículo 28 de la Carta de la organización para declarar los atentados del día 11, que dejaron más de 5.000 muertos, “como un ataque contra todos los estados de las Américas”.

Según la resolución aprobada por el Consejo Permanente, se acordó citar también al Órgano de Consulta del TIAR, formado por los cancilleres, con el fin de acordar “las medidas que deben ser tomadas para la defensa común y para el mantenimiento de la paz y la seguridad del continente”.

Bush no pidió a De la Rúa ni a Lagos aportes de tropas para una acción militar contra Afganistán en el marco de la operación Justicia Infinita.

De la Rúa y Lagos garantizaron, a su vez, un firme respaldo político a las acciones que acuerden Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) como respuesta por lo que se califica como el mayor acto de terrorismo de la historia.

“Le he dicho al presidente Bush que debe haber una respuesta apropiada, inteligente, adecuada y, lo más importante, en que no paguen justos por pecadores”, informó Lagos a la prensa en Santiago.

“Estos han sido ataques contra todas las democracias del mundo”, señaló el mandatario chileno, agregando que ahora se trata de ser capaces de castigar a los terroristas, ubicar donde están sus células y desarticularlas.

“Obviamente no está en cuestión el envío de efectivos militares chilenos, lo que tendría en verdad un carácter meramente simbólico”, agregó Lagos, luego de que en Buenos Aires un portavoz presidencial hiciera aclaraciones similares respecto de tropas argentinas.

“La posibilidad de enviar tropas en una eventual acción militar de Estados Unidos es una hipótesis muy poco probable. El TIAR es un tratado para responder a un ataque de una nación y éste es un caso de terrorismo”, dijo a IPS el director de Asuntos Políticos de la cancillería uruguaya, Alvaro Moerzinger.

También en medios diplomáticos argentinos se expresaron reservas acerca de la pertinencia de la aplicación del TIAR, un tratado nacido en 1947 en los albores de la guerra fría, del cual no forman parte Canadá ni los países caribeños anglófonos.

El TIAR entró en crisis en 1982, cuando Argentina lo invocó con ocasión de la guerra de las Malvinas, para reclamar una defensa continental ante la fuerza expedicionaria que Gran Bretaña envió al archipiélago, sin obtener apoyo de Estados Unidos que optó por respaldar a Londres, su aliado en la OTAN.

El 7 de septiembre, el presidente de México, Vicente Fox, dijo en la sede de la OEA, durante una gira por Estados Unidos, que el TIAR era “un caso grave de inutilidad y obsolescencia”, y propuso la creación de un nuevo esquema de seguridad continental.

El canciller mexicano Jorge Castañeda dijo que su gobierno no está de acuerdo con la convocatoria al TIAR, pero que debió sumarse al consenso en el Consejo Permanente de la OEA.

La resolución del órgano hemisférico plantea que los estados americanos usen “todos los medios necesarios a su alcance” para perseguir, capturar y castigar a los culpables de los atentados.

Castañeda lamentó que no se hubiera aceptado en la OEA la propuesta mexicana de especificar el uso de “todos los medios legales”.

El canciller mexicano desató antes una polémica en su país al afirmar que Estados Unidos tiene “todo el derecho a tomar represalias” por los atentados, pero puntualizó también que su país no apoyará esas acciones con efectivos militares.

El uruguayo Moerzinger dijo que su gobierno apoyaría las medidas políticas y económicas previstas en el TIAR contra un estado agresor, que en este caso podrían aplicarse contra Afganistán.

Las medidas contempladas incluyen retiro de embajadores, ruptura de relaciones diplomáticas, embargos económicos e interrupción de las comunicaciones aéreas, marítimas, ferroviarias, postales y telefónicas, según el texto del TIAR.

El problema, como lo señaló el diario argentino Clarín, es que tales medidas, al igual que el uso de la fuerza militar, no tienen por ahora un “destinatario palpable”, salvo que los Estados Unidos identifique a Afganistán como estado agresor.

En la eventualidad de una escalada bélica, que sume como probables aliados de Afganistán y protectores de Bin Laden a otros estados musulmanes, se ampliarían también los parámetros de esta singular aplicación del TIAR.

En este escenario, el viejo tratado de 1947 aparece en su renovada versión como un instrumento político acomodado a la guerra contra el terrorismo que se apresta a lanzar Estados Unidos.

La apuesta es controvertida, porque puede establecer un precedente que justifique intervenciones armadas en todos aquellos países, como Colombia, donde existan algunos de los 30 grupos que Estados Unidos considera terroristas.

Todos contra los árabes

MARIO OSAVA

Corresponsal de IPS en Río de Janeiro.

La reacción xenófoba ante los atentados en Nueva York y Washington amenaza a comunidades de inmigrantes árabes en varias regiones del mundo, incluso en América Latina.

Las agresiones personales, amenazas y ataques a mezquitas y empresas árabes no se limitan a Estados Unidos, sino que también se han verificado en Australia, Portugal e, incluso, en un oasis de tranquilidad como Suecia, donde un restaurante palestino sufrió la rotura de ventanas y pintadas ofensivas en las paredes.

Brasil, un país considerado de buena convivencia entre etnias por el gran mestizaje, tampoco escapó a esa ola de rencor.

El edificio que alberga a la Cámara Árabe de Comercio, en Sao Paulo, debió ser evacuado el viernes 14 de septiembre por la tarde ante el aviso telefónico de que se había colocado una bomba en el local.

“La xenofobia está en aumento”, dijo a IPS un dirigente empresarial vinculado a la comunidad árabe local que prefirió el anonimato.

La presión de lo que ocurre en Estados Unidos es muy fuerte en todas partes, agravando las manifestaciones antiárabes, añadió.

Unos 11 millones de descendientes de inmigrantes sirios y libaneses viven dispersos por Brasil. Poco más de 10 por ciento profesan la religión musulmana, mientras que la mayoría se declara católica.

Pero la población local, como la de otros países, confunde etnia con religión, sin darse cuenta que no todos los árabes son musulmanes y que hay pueblos no árabes, como los afganos, malayos, turcos e indonesios que en su mayoría profesan el islamismo.

La discriminación contra musulmanes se intensificó entre los niños en las escuelas brasileñas desde los atentados en Estados Unidos, denunció la Asamblea Mundial de la Juventud Islámica.

Pero riesgo más grave enfrenta Mohamad Kassem Jomaa, alcalde de la meridional localidad brasileña de Chui, en la frontera con Uruguay, donde viven cerca de 1.500 árabes y palestinos, que temen por la vida de sus parientes en los países de origen y también por su propia seguridad.

La prensa brasileña informó sobre presuntas vinculaciones de Jomaa con Osama Bin Laden, el terrorista saudita refugiado en Afganistán y que Washington señala como principal sospechoso de estar detrás de los ataques contra el World Trade Center de Nueva York y el Pentágono (Departamento de Defensa), en Washington.

Jomaa pidió protección a la justicia brasileña, temiendo por su vida, mientras fuentes de la policía federal sostienen que mantiene contactos con Bin Laden cada vez que viaja a Líbano y que vive en Brasil con documentos falsos.

La policía brasileña asevera que Jomaa nació en Líbano, pero él afirma que es originario de Sao Paulo y que viaja con frecuencia a Líbano porque allí viven su ex mujer y uno de sus dos hijos.

El alcalde Jommaa lamentó las acusaciones, también difundidas en Uruguay, pues “son infundadas y ponen en riesgo mi vida”.

También “la colectividad de origen árabe en territorio argentino está sufriendo la intensificación de una campaña de discriminación”, destacó el secretario general de la Federación Árabe Argentina, Juan Gabriel Labaké.

Argentina sufrió dos atentados brutales contra entidades judías, como fueron los ataques contra la embajada de Israel en 1992 en Buenos Aires y contra la Asociación de Mutualidades Israelitas Argentinas en 1994, ambos atribuidos a fundamentalistas árabes, Sin embargo, nunca hubo agresiones ni se fomentó el odio contra la comunidad árabe inmigrante, apuntó Labaké, quien añadió que un presidente de origen sirio, Carlos Menem, gobernó Argentina entre 1989 y 1999.

Mientras, las autoridades de Argentina, Brasil y Paraguay intensificaron la vigilancia en la frontera común, en especial en la paraguaya Ciudad del Este, donde se concentran muchos árabes y se sospecha de la existencia de una base de apoyo al terrorismo internacional.

El periodista Héctor Guerin, director del diario local Vanguardia, confirmó a IPS el incremento en el control de pasajeros en el Puente de la Amistad, que une Ciudad del Este con la brasileña Foz de Iguazú.

Sin embargo, Guerin dijo que el jefe de la policía local, Blas Chamorro, había desmentido que el estadounidense Buró Federal de Investigaciones le hubiera pedido la colaboración para investigar una posible vinculación de miembros de la colectividad árabe con Bin Laden u otros terroristas.

También el canciller paraguayo José Antonio Moreno apuntó que la embajada de Estados Unidos en Asunción nada había solicitado al respecto, negando de plano las versiones periodísticas en es sentido.

Pero árabes y musulmanes están presentes en muchos otros países latinoamericanos.

En Ecuador conforman una importante comunidad y también se dividen entre una mayoría católica y el islamismo. Sin embargo, no se registraron agresiones o discriminación, aunque dueños de restaurantes de origen paquistaní observaron una pequeña caída de la clientela.

La preocupación por posibles rechazos se debe a informaciones procedentes de Estados Unidos sobre la supuesta existencia en Ecuador de células del grupo de Bin Laden.

Pequeñas comunidades de palestinos y libaneses viven también en Perú, donde se estima que suman unas 600 familias, siendo católicos 70 por ciento de ellas. Pese a la simpatía por la Organización para Liberación de Palestina, condenaron los atentados en Estados Unidos, sin manifestaciones públicas.

Venezuela es otro país de la región que recibió oleadas de inmigración árabe, también dedicada especialmente al comercio, pero el país tiene una situación singular por la “diplomacia petrolera” que acercó al presidente Hugo Chávez a países que Washington considera “enemigos”, como Iraq, Irán y Libia.

La ola de amenazas y ataques que sufren los árabes en muchos países fue desatada por los atentados, pero responden también a prejuicios largamente desarrollados por las muchas películas de Hollywood, en que terroristas de ese origen cometen crueldades, señaló el dirigente empresarial árabe de Sao Paulo.

A la predisposición antiárabe contribuyó también la xenofobia alimentada en Europa contra los inmigrantes, en gran parte procedentes del mundo árabe o islámico.

América Central se adhiere a la guerra

NÉFER MUÑOZ

Corresponsal de IPS en San José de Costa Rica.

La adhesión de América Central a la guerra contra el terrorismo declarada por Estados Unidos es una decisión peligrosa y contrasta con la insuficiente atención colectiva a problemas regionales, según dos reacciones críticas.

“Es peligroso y lamentable” que “los presidentes centroamericanos se hayan dejado arrastrar” por Washington, dijo a IPS Celia Medrano, coordinadora de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica (Codehuca)

Seis de los siete gobiernos de América Central hicieron suya la declaración de guerra de Bush, en una cumbre celebrada en la Escuela Agrícola Panamericana, 50 kilómetros al sur de Tegucigalpa.

El apoyo a Washington fue particularmente enfático en el caso del presidente de El Salvador, Francisco Flores, quien anunció en Honduras que su gobierno está dispuesto a colaborar con tropas en la campaña de represalias anunciada por Estados Unidos.

Medrano observó que esa manifestación de voluntad antiterrorista pasa por alto el hecho de que El Salvador albergó al exiliado cubano Luis Posada Carriles, preso ahora en Panamá bajo la acusación de organizar un atentado contra Fidel Castro en ocasión de la Cumbre Iberoamericana del año pasado.

“Tenemos que hacer una condena universal al terrorismo” y “no puede ser que esas acciones se apoyen cuando son contra países como Cuba”, afirmó la activista.

Los mandatarios pusieron a disposición de Estados Unidos sus equipos de rescate para colaborar en la búsqueda de las personas atrapadas entre los escombros de las torres gemelas de Nueva York y del Pentágono en Washington.

“Lo que hicieron (los presidentes) fue salir corriendo para quedar bien con Estados Unidos. Da pena que no se reúnan para resolver los conflictos fronterizos ni la hambruna en Guatemala”, dijo a IPS Luis Guillermo Solís, profesor de Historia y de Ciencias Políticas en la Universidad de Costa Rica.

En los últimos cuatro años, los gobernantes centroamericanos dejaron de lado la integración y los problemas regionales, sostuvo Solís, quien, sin embargo, consideró positiva la preocupación manifestada contra el terrorismo.

Los presidentes Miguel Ángel Rodríguez, de Costa Rica, Francisco Flores, de El Salvador, Alfonso Portillo, de Guatemala, Carlos Flores, de Honduras, y Arnoldo Alemán, de Nicaragua, y Moisés Coll, representante del primer ministro de Belice, calificaron de “abominable” el ataque terrorista contra Estados Unidos.

América Central tiene fuertes lazos políticos y económicos con Estados Unidos. La Iniciativa de la Cuenca del Caribe, ampliada en octubre del 2000, beneficia el ingreso al mercado estadounidense de numerosos productos centroamericanos, entre ellos los textiles.

En esta región todavía operan importantes capitales estadounidenses en grandes sectores económicos, como la producción de banano. En el pasado, el poder de esas empresas hicieron que las naciones de la región fueran denominadas “repúblicas bananeras”.

América Central es también uno de los principales lugares de origen de inmigrantes en Estados Unidos. Las remesas de dinero que envían desde allí a sus familias son una de las principales fuentes de divisas de la región y un importante factor de desarrollo, según el Banco Interamericano de Desarrollo.

El mayor volumen de remesas corresponde a los emigrantes salvadoreños, que en el 2000 enviaron desde Estados Unidos a sus familiares unos 1.600 millones de dólares y la cantidad puede ser este año de 1.800 millones de dólares.

Organizaciones humanitarias creen que 144 centroamericanos pueden figurar entre los 1.500 extranjeros que fueron víctimas de los atentados en Estados Unidos.

“La guerra emprendida no es contra el Islam, sino contra grupos y fracciones extremistas que proclaman la violencia como norma de vida”, sostuvieron los presidentes centroamericanos en su declaración.

Los mandatarios acordaron reforzar los controles en fronteras, puertos, aeropuertos y puestos de control migratorio, y también exigieron a los partidos de la región que mantengan relaciones con “estructuras terroristas que las suspendan inmediatamente”.

Si bien la declaración no identifica a esos partidos centroamericanos, los mandatarios aludieron luego ante la prensa al salvadoreño Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y al nicaragüense Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN).

El salvadoreño Flores dijo que el FMLN mantiene relaciones con las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El presidente nicaragüense, Arnoldo Alemán, dijo que en su país quienes se ufanan de sus lazos con terroristas “tienen nombre y apellido”.

Alemán aludía así a la amistad entre el ex presidente nicaragüense y candidato del FSLN, Daniel Ortega, con el líder de Libia, Moammar Gadafi, a cuyo país el Departamento de Estado (cancillería) estadounidense acusa de apoyar acciones terroristas.

El congresista del FMLN Manuel Melgar dijo a IPS que su partido condenó los actos terroristas de Nueva York y Washington. “Desde el primer momento nos hemos solidarizado con las víctimas. Somos claros: estamos en contra de los atentados”, agregó.

Respecto de los vínculos entre el FMLN y las FARC, Melgar dijo que su partido mantiene una política de relaciones abiertas con los distintos países y pueblos del mundo.

Por su parte, Solís dijo que las acusaciones contra el FMLN y el FSLN constituyen una manera “doméstica” de tratar el problema mundial del terrorismo, pues los presidentes centroamericanos emplearon la retórica propia de la guerra fría. “Lo que deberían es ver hacia el futuro y no hacia el pasado”, dijo.

El gobierno de El Salvador informó que desde el 11 de septiembre, 90 salvadoreños residentes en Nueva York perdieron contacto con sus familiares en su país natal, al parecer como consecuencia de los atentados terroristas.

Otra víctima de los ataques

NÉFER MUÑOZ

Corresponsal de IPS en San José de Costa Rica.

La economía de América Central tendrá un crecimiento nulo o caerá en los próximos dos años como consecuencia de los atentados contra Estados Unidos.

La crisis afectará en mayor grado a las exportaciones y al sector turístico, que depende en buena parte de visitantes estadounidenses y europeos que llegan a esta región a bordo de aviones procedentes de América del Norte.

“Es muy posible que el crecimiento de América Central sea cero o negativo”, dijo a IPS el uruguayo Eduardo Gitli, analista del Centro Internacional de Política Económica de la estatal Universidad Nacional costarricense.

Gitli consideró que las consecuencias de la crisis actual se sentirán en la región durante los próximos dos años, y dijo que aún no es posible calcular la reducción de las exportaciones a Estados Unidos.

En los últimos años, más de 50 por ciento de los 20.000 millones de dólares que suman anualmente en promedio las exportaciones de América Central se dirigen a Estados Unidos, explicó. “Todos los países centroamericanos se verán afectados por igual”, vaticinó Gitli, quien añadió que el impacto será fuerte y generalizado pues se trata de economías pequeñas.

El panorama es desalentador para los exportadores, cuyos costos de operación aumentarán, ni para el sector turístico centroamericano, cuyos ingresos descenderán.

Los analistas prevén que los ataques del día 11 y la campaña contra el terrorismo lanzada por Washington determinarán una caída del consumo en Estados Unidos, que repercutirá en las exportaciones centroamericanas, en especial de productos textiles.

Las economías de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá crecieron entre uno y 4,5 por ciento en el 2000. El Salvador y Guatemala emprendieron en los últimos meses procesos de dolarización.

El presidente del Banco Central de Costa Rica, Eduardo Lizano, declaró que en América Central el turismo caerá por la disminución de visitantes extranjeros y también del turismo interno.

“La baja en el turismo incidirá en la economía centroamericana y llevará a que cada país de la región venda menos a los otros”, explicó Lizano.

El intercambio comercial dentro de América Central ascendió en los últimos años a unos 2.500 millones de dólares anuales promedio.

La actividad turística cayó 30 por ciento en Costa Rica tras los atentados, lo cual causará pérdidas por 300 millones de dólares. A este sector corresponde un ingreso anual de cerca de 1.200 millones de dólares.

Sin embargo, Lizano recalcó que “no todo es negativo”, pues el precio del petróleo se mantiene estable y no se esperan grandes variaciones.

En América Central residen 36 millones de personas, y la proporción de las que viven en condiciones de pobreza oscila entre 20 y 80 por ciento. La crisis desatada por los ataques agravará la pobreza, dijo a IPS Miguel Loría, analista de la firma Consultores Económicos y Financieros, de Costa Rica.

Es muy probable que este año la economía de varios países centroamericanos tenga un crecimiento nulo o sufra una caída, lo que dependerá del desempeño económico de Estados Unidos, explicó

Loría. “El impacto inmediato de la recesión mundial se traducirá en una contracción de la economía y en un aumento del desempleo en los meses que vienen”, agregó.

El desempleo en América Central oscila entre 3,5 y cinco por ciento, pero el mayor problema del mercado laboral es el subempleo (proporción de personas que trabajan menos de una jornada de ocho horas y que estarían dispuestas a trabajar más), que en algunos países de la región llega a 30 por ciento.

La Academia de Centroamérica, uno de los principales institutos de investigación económica de la región, informó que la crisis agravará el panorama en los últimos tres meses del año. “Lo negativo es que habrá una caída en las exportaciones y lo positivo es la reducción de las tasas de interés y los precios del petróleo”, dijo a IPS el director de la Academia de Centroamérica, Ronulfo Jiménez. Pero lo negativo pesará más que lo positivo, agregó.

“Antes de los atentados terroristas América Central venía creciendo menos, y los hechos del 11 de septiembre reforzarán esa tendencia”, añadió.

Heridas en la aviación

YOJANA SHARMA

Corresponsal de IPS en San Pablo, Brasil.

El despido de 1.750 empleados anunciado por la aerolínea brasileña Varig pone en marcha el ajuste de la aviación comercial en América Latina, cuya preexistente crisis se agravó con los atentados contra Estados Unidos.

Varig, la mayor empresa latinoamericana del sector, decidió despedir a 10 por ciento su personal, que ya había sido reducido de 25.000 a 17.500 integrantes en los seis últimos años. Las pérdidas de Varig en el primer semestre de este año ascendieron a cerca de 200 millones de dólares.

Los efectos del terrorismo representan un golpe adicional a las compañías latinoamericanas, que, en general, ya trabajaban a pérdidas, a excepción de algunas como Lan Chile.

El impacto fue naturalmente más fuerte en las que operan internacionalmente, como es el caso de Varig, cuyos vuelos a Estados Unidos representan 15 por ciento de sus ingresos.

Los daños son múltiples. En primer lugar, cayó la demanda de pasajes a causa del ataque del 11 de septiembre con aviones comerciales secuestrados contra las torres gemelas del World Trade Center, en Nueva York, y contra el Pentágono, sede del Departamento de Defensa estadounidense, en Washington.

Además, aumentó el costo operativo de las aerolíneas, debido a las medidas adicionales de seguridad que debieron adoptar, así como el de los seguros.

Las aerolíneas estadounidenses redujeron 20 por ciento sus vuelos y anunciaron que despedirán a 100.000 empleados como consecuencia de los atentados.

Por otra parte, se agravará para las compañías aéreas latinoamericanas el desequilibrio en la competencia internacional, por los 15.000 millones de dólares de ayuda brindados por las autoridades estadounidenses a las empresas de ese país, según directivos de Varig.

Las autoridades brasileñas ya dejaron claro que no habrá recursos para favorecer a las aerolíneas, actitud que, según se prevé, será generalizada en los países latinoamericanos, que carecen de capacidad financiera y ejecutan, en muchos casos, programas rígidos de austeridad fiscal.

La decisión de las aseguradoras internacionales, de limitar a 150 millones de dólares la cobertura que ofrecen en caso de guerra o actos terroristas amenaza los vuelos a Estados Unidos, donde se exige 1.000 millones de seguro, y a la Unión Europea, donde la exigencia es de 750 millones de dólares.

En Brasil el gobierno solucionó el problema, disponiéndose a complementar la cobertura necesaria para evitar la suspensión de los vuelos de compañías nacionales.

Pero la amenaza persiste en otros países de la región. Lan-Chile, por ejemplo, anunció que reducirá a la mitad sus vuelos a Estados Unidos si no se soluciona el problema del seguro. La compañía chilena ya redujo a siete sus 12 vuelos semanales a Nueva York y de diez a nueve los vuelos a Miami, después de los atentados.

En Brasil, además, representantes de las empresas aéreas resolvieron solicitar al gobierno la reducción de algunos tributos y de costos del uso de los aeropuertos, para restablecer condiciones que les permitan seguir operando.

Las compañías nacionales no quieren subsidios, sino condiciones de igualdad para competir, dijo el presidente de Varig, Ozires Silva. Los costos tributarios y financieros en Brasil son varias veces más altos que los de Estados Unidos, aseguró.

El sector quiere eliminar, por ejemplo, un impuesto para la actualización tecnológica de los aeropuertos, que ya recaudó más de 1.000 millones de dólares desde su creación en 1989. El tributo grava a empresas que afrontan crecientes dificultades a causa de la depreciación del real, la moneda brasileña.

Las deudas y gran parte de los costos operativos de la aviación se expresan en dólares, y por eso se elevaron con la depreciación del real, que ya alcanza 55 por ciento desde 1999 y se agravó después del 11 de septiembre.

Los efectos de los ataques terroristas contra Nueva York y Washington son disímiles en los distintos países y empresas latinoamericanas. En Cuba no

se sintió ningún impacto, según las agencias de viajes y de turismo consultadas por IPS.

“No hay cancelación de pasajes y los vuelos continúan a ritmo normal”, según la firma Havanatur, que atiende el tráfico aéreo entre Cuba y Estados Unidos.

“A pesar de una disminución en la demanda de los pasajes en América del Norte, hemos mantenido normalmente nuestros vuelos”, señaló Sofía Valverde, encargada de prensa en Costa Rica del Grupo TACA, compañía salvadoreña que absorbió tres aerolíneas de otros países centroamericanos.

La reducción de pasajeros hacia y desde Estados Unidos tiene un impacto reducido en TACA, porque sus operaciones se concentran en América Central y del Sur.

En Argentina, en cambio, la repercusión es muy grave porque las compañías locales ya sufrían los efectos de la recesión económica nacional.

En agosto los embarques en vuelos domésticos ya habían caído 25 por ciento. A eso se sumó una reducción de 14 por ciento en la demanda de pasajes de Buenos Aires a Estados Unidos después de los atentados.

En México y en Venezuela la demanda cayó mucho por la gran cantidad de circulación entre esos países y Estados Unidos. Pero sus compañías aéreas esperan la evolución del mercado para decidir posibles ajustes.

Aeroméxico, compañía que dedica la cuarta parte de sus vuelos (es decir, 60 por día) a Estados Unidos, se dio un plazo de 10 días para tomar una decisión, dijo Alejandro Yberri, director de Mercadotecnia y Servicios a Clientes.

Sin embargo, Yberri pronosticó una reducción de ocho a 10 por ciento en la demanda, lo que dejará “aviones en tierra” o la devolución de los arrendados.

Para otra compañía del país, Mexicana de Aviación, los vuelos a Estados Unidos y Canadá representan 40 por ciento de sus ingresos.

“Un desplome de 30 por ciento en ese tráfico aéreo” obligaría a recortes en las operaciones, dijo el vocero Fernando Martínez.

Las empresas mexicanas sufren también el impacto de la desaceleración económica causada por los ataques, ya que la mayor parte de su negocio es el transporte doméstico.

La Asociación de Agencias de Viajes venezolana calculó que la reducción del tráfico aéreo a Estados Unidos fue de un 65 por ciento, pero se espera un repunte, lo que descartaría medidas de ajuste.

Integración postergada por tensión mundial

PATRICIA GROGG

Corresponsal de IPS en La Habana.

Los planes de integración y desarrollo de América Latina serán desplazados por prioridades de orden militar como consecuencia de los ataques contra Estados Unidos, sostuvo una experta cubana.

La situación creó “un cambio en el sistema internacional”, por el cual la seguridad será más que nunca un asunto prioritario, dijo a IPS Isabel Jaramillo, experta del Centro de Estudios de América de la estatal Universidad de La Habana.

Jaramillo consideró que la reformulación de la política exterior estadounidense como consecuencia de los ataques contra Nueva York y Washington dejará en “zona gris”, por ahora, varias negociaciones comerciales entre Estados Unidos y América Latina.

Mencionó, entre otros, el acuerdo de libre comercio que Estados Unidos negocia con Chile, las preferencias arancelarias solicitadas por la Comunidad Andina de Naciones y el diálogo con el Mercado Común del Sur (Mercosur). “Este es el peor comienzo que podía tener el siglo XXI” para América Latina, advirtió Jaramillo.

La experta consideró riesgoso que América Latina conceda un “apoyo incondicional o con muy poco margen de respuesta autónoma” a las propuestas estadounidenses de guerra contra el terrorismo, que podrían desatar “una espiral de violencia de la cual será difícil salir”.

“Eso podría significar para las naciones latinoamericanas pérdida de espacios soberanos y aumento de los gastos en las esferas militar y de seguridad, en detrimento de los programas sociales”, señaló.

Pero Germán de la Reza, experto de las universidades Nacional Autónoma y Metropolitana de México, sostuvo que “la inestabilidad” en el proceso de apertura comercial americano tras los atentados “es de coyuntura y no detendrá el intercambio ni los procesos de negociación.

Mientras, Patricia de Galofre, de la firma comercial colombiana Martín Ibarra Asociados, y el presidente del Comité de la Industria Textil peruano, David Lemor, advirtieron que los atentados podrían retrasar de las negociaciones para prorrogar y ampliar las preferencias comerciales andinas.

Por otra parte, el diputado colombiano Benjamín Higueta dijo que el terrorismo ocupa desde el día 11 el lugar de las drogas como mayor amenaza para Estados Unidos, un cambio que ocasionarán un “impacto muy grande” a la lucha contra el narcotráfico.

El investigador colombiano Luis Valencia, de la estatal Universidad Nacional, pronosticó que los fondos previstos por Estados Unidos a la Iniciativa Andina, dirigida a mitigar los efectos del Plan Colombia contra el narcotráfico en los países vecinos, podría sufrir recortes.

Washington espera de los países de la Organización de Estados Americanos (OEA) medidas coordinadas de seguridad y un eventual apoyo a sus acciones militares de represalia contra Afganistán.

Según el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), vigente desde 1947, “cualquier ataque armado (...) contra cualquier estado americano será considerado un ataque contra todos los estados americanos”.

Todos los países integrantes de la OEA están comprometidos a través de ese tratado a “ayudar a hacer frente al ataque en el ejercicio del derecho de legítima defensa”.

Los países americanos condenaron de manera unánime los ataques, pero no todos están de acuerdo con involucrarse en una guerra antiterrorista encabezada por Estados Unidos, dijo Jaramillo.

La experta cubana consideró que las relaciones militares en América se mantendrán “en la lógica de la cooperación y el intercambio”, aunque con mayor acento en la lucha contra el terrorismo.

Pero “la lógica militar funciona enfocada en la identificación del enemigo”, y en el caso del terrorismo “eso es muy difuso” pues no se trata de un enemigo que pueda combatirse con tropas o tanques, advirtió.

Jaramillo también pronosticó que los problemas relativos a la migración, que junto con el narcotráfico y el terrorismo son las prioridades de la agenda de seguridad de Estados Unidos respecto de América, se incrementarán aún más.

“Había ya una revisión de las políticas migratorias, pero es posible que ahora sean más restrictivas”, comentó. Además, previó, aumentará la xenofobia, no sólo en Estados Unidos, sino también en otras regiones del mundo.

Otros expertos cubanos alertaron que La Habana tampoco escapa a la “onda expansiva” de los atentados, a pesar de estar excluida de la OEA y de que carece de relaciones diplomáticas con Estados Unidos desde 1960.

El alza de los precios del petróleo, que el año pasado significó un gasto de 500 millones de dólares mayor al previsto, podría afectar de nuevo la economía cubana.

El gobierno de Fidel Castro alertó a Washington que el uso de la fuerza militar contra los supuestos responsables de los atentados contra Nueva York y Washington alentaría los odios que dieron origen a los ataques.

El pueblo estadounidense “quiere justicia, no venganza”, por lo que “no sería jamás partidario del método brutal de asesinar fríamente a otras personas, violar leyes y castigar sin pruebas”, dijo el gobierno en una declaración oficial.

Si las pruebas contra Bin Laden existen y “no se les exige a los líderes religiosos (de Afganistán) pasar por encima de las más profundas convicciones de su fe, se podría encontrar una solución a la guerra”, según el comunicado.

“Se ahorrarían ríos de sangre. Podría ser este el primer gran paso para un mundo sin terrorismo ni crímenes impunes: una verdadera asociación mundial para la paz y la justicia”, de la cual el pueblo estadounidense “emergería con enorme prestigio y respeto”, añadió.

Ruego peruano

ABRAHAM LAMA

Corresponsal de IPS en Lima.

Estados Unidos no debe ceder a la tentación de cerrar su mercado y de interrumpir su ayuda a América Latina como consecuencia de los ataques terroristas, pues esta región es su aliada natural, advirtió un alto funcionario peruano.

“Existe temor de que Estados Unidos opte por una política aislacionista, recorte sus programas de integración y cooperación y concentre sus recursos en la lucha contra el terrorismo”, dijo Ricardo Vega Llona, principal asesor para la lucha antidrogas del presidente peruano Alejandro Toledo.

“Sin embargo, confío en que los norteamericanos, a raíz de esta desgracia, miren más hacia el sur y se den cuenta que los países de América Latina somos no sólo sus vecinos más próximos, sino también sus socios naturales, y que le conviene ayudarnos a promover nuestro desarrollo”, añadió.

Por su parte, el congresista y ex canciller peruano Luis González Posada dijo que Estados Unidos deberá tener en cuenta la importancia económica de América Latina, en especial por la producción de petróleo.

“América Latina es desde 1992 el principal abastecedor externo de petróleo de Estados Unidos, por encima de los países del Golfo. Venezuela y Colombia son importantes proveedores”, señaló González.

“Constatar esta realidad inducirá a Estados Unidos a reforzar sus alianzas regionales, cuya expresión comercial son las negociaciones multilaterales como el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA)”, expresó.

Vega Llona, considerado el “zar” antidrogas de Perú, consideró que el desenlace de las interrumpidas conversaciones entre Washington y la Comunidad Andina de Naciones respecto del Acuerdo de Preferencias Arancelarias (ATPA) puede dar un indicio de la futura actitud de Estados Unidos.

“El día 11, cuando se produjeron los atentados, el secretario de Estado (canciller estadounidense) Colin Powell se encontraba en Lima, en la asamblea extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA), y uno de los temas en su agenda fue el ATPA”, recordó Vega Llona.

Powell se reunió en la víspera de la asamblea de la OEA con los cancilleres de los cinco países andinos (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) para debatir la renovación del APTA, que vence el 4 de diciembre, y su ampliación a Venezuela, que no es hoy parte del acuerdo.

El ATPA desgrava las exportaciones a Estados Unidos de productos procedentes de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, y fue establecido para compensar los gastos extraordinarios de esos países en la represión del narcotráfico. Estados Unidos es el principal consumidor mundial de drogas.

Los países andinos demandan también ampliar la lista de productos desgravados, de modo de incluir el pescado y los calzados y eliminar las cuotas en el sector textil.

La solicitud de incorporar a Venezuela en el acuerdo se debe a que ese país, si bien no es productor de drogas, es utilizado por los narcotraficantes como zona de paso.

Fuentes diplomáticas en Lima indicaron que Powell expresó en la reunión con los países andinos que Washington estaba de acuerdo con renovar el ATPA, pero se abstuvo de referirse a su ampliación, que, dijo, debía ser resuelta por el Congreso legislativo estadounidense.

Al día siguiente, cuando aún no había llegado a la sede la asamblea de la OEA, Powell se enteró de los atentados en Estados Unidos, votó la Carta Democrática Interamericana, el principal asunto de la agenda, y retornó de inmediato a su país.

Vega Llona señaló que el narcotráfico es el principal factor de “internacionalización” del terrorismo en América Latina. “El narcotráfico tiene una

estructura internacional y es el apoyo logístico más importante de los movimientos subversivos”, comentó.

“Si Washington no cede a las tentaciones autárquicas, este puede ser el momento de una alianza continental que priorice el desarrollo económico y social” como herramienta para erradicar el cultivo de drogas, concluyó Vega Llona.

Inseguridad favorece fuga de capitales

ANDRÉS CAÑIZÁLEZ

Corresponsal de IPS en Caracas.

El clima internacional de inseguridad y desconfianza puede favorecer la fuga de capitales de América Latina y el Caribe, donde se aguarda este año la reducción de las inversiones extranjeras, advirtió el Sistema Económico Latinoamericano (Sela).

“Desde antes que sucedieran los trágicos hechos en Nueva York y Washington se venía incubando un desequilibrio económico que ha afectado a muchos de nuestros países”, dijo en Caracas el secretario ejecutivo del Sela, el diplomático chileno Otto Boye.

El panorama internacional que se presenta con el inicio de la campaña militar de Estados Unidos contra Afganistán acrecienta la incertidumbre ya presente desde los atentados del 11 de septiembre.

“Hoy es mayor la urgencia, deseamos insertarnos en un mundo que está cambiando velozmente y cuyas características aún no están definidas”, señaló Boye.

“Un clima de inestabilidad por problemas de seguridad y confianza, puede favorecer la fuga de capitales y con ello presionar en los tipos de cambio y en las reservas internacionales de los países”, agregó.

El Sela pronosticó inversiones “relativamente restringidas” en América Latina y el Caribe. Los países más afectados pueden ser Argentina, que atraviesa una dura crisis financiera, y Brasil, que ha sentido en su mercado de cambios el impacto de los problemas de su vecino.

El flujo de capitales hacia la región fue de 102.000 millones de dólares en 2000, y 74 por ciento del total correspondió a la inversión extranjera directa (IED), observó el Sela en un informe distribuido en la XXVII reunión del

Consejo Latinoamericano, conformado por altos funcionarios y expertos de la región.

El monto de las inversiones en el 2000 “fue inferior al de 1999, cuando se registraron 116.000 millones de dólares”, puntualizó el organismo, que agrupa a 27 países.

Brasil recibió el año pasado 30.000 millones de dólares en concepto de IED, México 13.500 millones, Argentina 5.000 millones, Venezuela 3.400 millones y Perú 1.100 millones. Estados Unidos y España, que irrumpió en los últimos años en el panorama económico y empresarial de América Latina, son los dos grandes inversores en la región.

El Sela recomendó articular la IED con las economías locales y con la política económica global, para lograr su eficacia como instrumento para el desarrollo.

“Es necesario que (la IED) se comprometa con el desarrollo del país en el cual se instala, lo cual no es incompatible con su aspiración de ampliar mercados y de generar ganancias”, precisó el organismo económico regional.

El informe también destaca que la deuda externa de América Latina y el Caribe disminuyó levemente en el 2000, pero su peso económico puede agravarse debido a la recesión internacional.

El endeudamiento de América Latina y el Caribe sumó 751.000 millones de dólares al finalizar 2000, “una leve mejora” en relación con el año anterior, cuando se situaba en casi 760.000 millones.

Sin embargo, un círculo financiero perverso envuelve a los países deudores. Por ejemplo, en 1999 la región pagó 140.000 millones de dólares en el servicio de la deuda, que comprende los intereses, pero el endeudamiento aumentó en términos netos 13.000 millones de dólares respecto a 1998.

La década de los 90 fue dramática para América Latina en esta materia, pues la deuda externa creció 62 por ciento entre 1991 y 1998, cuando totalizó 746.000 millones de dólares. De acuerdo con el SELA, la disminución de 2000 se debió a reducciones en Brasil y México, los dos países de mayor deuda en la región, que han buscado mejorar el perfil de sus compromisos, y a operaciones de reestructuración en Ecuador y Honduras.

Brasil, con 235.000 millones de dólares, México, con 163.000 millones, y Argentina, con 147.000 millones, son los tres países más endeudados de América Latina y el Caribe y en conjunto, les corresponde 73 por ciento del total regional.

Venezuela, con una deuda externa de 30.800 millones de dólares es el cuarto país más endeudado de la región, según el documento del SELA.

El Sela corrigió de tres a uno por ciento su pronóstico para este año de crecimiento económico de América Latina y el Caribe, debido al empeoramiento de la situación internacional luego de los ataques terroristas contra Estados Unidos. Ese débil crecimiento afectará los planes gubernamentales para reducir la pobreza y también incidirá en la capacidad de pago de los países.

El informe presentado por el Sela también constató que el proceso de privatización de activos públicos de la década pasada ha significado la “extranjerización” de las empresas instaladas en América Latina y el Caribe.

Cuarenta y tres por ciento de las 500 mayores empresas de la región eran extranjeras en 1999, frente a una proporción de 27 por ciento en 1992, mientras que la presencia de empresas públicas en ese grupo disminuyó del 35 por ciento en 1992 un 18 por ciento siete años después.

Ataque a Afganistán atrasa reactivación

GUSTAVO GONZÁLEZ

Corresponsal de IPS en Santiago de Chile.

Los ataques de Estados Unidos y Gran Bretaña contra Afganistán repercutirán de manera negativa en los mercados de inversión y en el comercio mundial, retrasando la reactivación de las economías de América Latina, según las primeras evaluaciones.

Sin embargo, funcionarios del gobierno y expertos coincidieron en que no habrá cambios sustantivos en la evolución de la economía internacional si el conflicto bélico se mantiene circunscrito al territorio afgano.

Desde la perspectiva latinoamericana, la hipótesis más pesimista plantea que la guerra en Asia central daría marcha atrás a la asistencia financiera a Argentina, lo cual puede agudizar la recesión en ese país, con un probable “efecto dominó” sobre otras economías de la región.

“Dentro de lo que se puede prever, creo que podemos esperar un retraso de seis meses en la reactivación de Chile, la cual teníamos presupuestada para este año”, dijo el ministro de Economía, Minería y Energía, Jorge Rodríguez.

La economía mundial está deprimida y los principales compradores de productos chilenos también se encuentran en esa situación, explicó.

Los presidentes Fernando de la Rúa, de Argentina, y Fernando Henrique Cardoso, de Brasil, consideraron en Brasilia realizar un viaje conjunto a Washington. Los dos mandatarios pretenden llevar adelante una negociación financiera común ante el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Brasil busca un respaldo financiero para su economía, mientras Argentina quiere el aval del FMI para establecer mecanismos de recompra de su deuda externa, del orden de los 130.000 millones de dólares.

El nuevo escenario internacional que se comenzó a gestar el 11 de septiembre, con los atentados terroristas en Nueva York y Washington, no ha hecho sino intensificar en los países del Cono Sur de América los temores de una agudización de la crisis argentina y sus efectos expansivos.

A pesar de que el gobierno de De la Rúa aseguró que no devaluará el peso argentino para enfrentar el abultado déficit fiscal, las expectativas en ese sentido se acentuaron en Chile tras el lanzamiento de la ofensiva contra Afganistán.

El dólar, que cerró el viernes 14 de septiembre a una cotización promedio de 710 pesos chilenos por unidad, siguió trepando hasta situarse en 713 pesos al cierre de los mercados bancarios y acumular en el curso de este año un alza de casi un 25 por ciento.

Los incrementos en la cotización del dólar en Chile se deben a maniobras especulativas para acumular divisas estadounidenses con el fin trasladarlas a la vecina Argentina y lucrarse con una eventual devaluación del peso argentino.

Argentina es actualmente el engranaje clave en América Latina, en una coyuntura de pérdida de dinamismo de la economía mundial y en la cual se produce la ofensiva combinada que Estados Unidos y Gran Bretaña iniciaron contra el movimiento Talibán y los campamentos en Afganistán del magnate saudita Osama Bin Laden.

Luis Díaz, economista de la Universidad Diego Portales de Chile, destacó que este aspecto plantea una diferencia fundamental con el escenario económico expansivo en que se dio la guerra del Golfo, en 1991, cuando Estados Unidos y sus aliados atacaron a Iraq, que previamente había invadido Kuwait.

Según Díaz, este marco recesivo actual impide adelantar conclusiones tajantes sobre la reacción de los mercados bursátiles y de materias primas tras el inicio de la llamada operación "libertad perdurable".

El ejemplo más concreto es el del precio del cobre, que registró una leve alza del 0,85 por ciento.

“La lógica indicaba que el cobre debía seguir bajando con el ataque a Afganistán, pero aumentó simplemente porque su cotización había caído mucho”, señaló el economista chileno.

Otros metales también tuvieron variaciones mínimas, con un aumento de 0,14 por ciento del oro y 0,96 por ciento del platino, en tanto la plata y el aluminio registraron bajas respecto de su cotización del viernes 14 de septiembre de 0,21 y 0,69 por ciento, respectivamente.

Héctor Assael, experto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), recalcó que la guerra contra Afganistán es, por el momento, distinta a otras, ya que se trata de una represalia de carácter muy selectivo, con armamentos de alta sofisticación.

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Colin Powell, señaló que el objetivo de la ofensiva no es ocupar territorios y, por lo tanto, se buscará involucrar la menor cantidad de tropas, invirtiendo sobre todo recursos de inteligencia.

Díaz y Assael coincidieron en que, si el conflicto se mantiene bajo esos parámetros, no cabe apostar a grandes beneficios para la industria armamentista convencional, que podrían convertirla en agente reactivador de la economía mundial.

El experto de Cepal señaló que en el nuevo escenario, de reorganización de los sistemas de seguridad y de inteligencia, los sectores productivos que podrían empujar una reactivación serían los de alta tecnología.

De acuerdo a lo anterior, Assael apuntó que podría darse una recuperación bursátil en Estados Unidos en torno al Nasdaq, el índice de las empresas de alta tecnología vinculadas sobre todo a la electrónica y la computación, postergando al Dow Jones, la bolsa de los sectores productivos más tradicionales.

Un comportamiento de esa naturaleza podría ser nítido en las próximas semanas, ya que el impacto inicial de los ataques fue también relativo en los mercados bursátiles.

Seis días después del atentado, el índice Dow Jones tuvo una caída del 0,57 por ciento, en tanto el Nasdaq creció apenas 0,04 por ciento.

En Europa, cayó la bolsa de Gran Bretaña en 0,07 por ciento, mientras aumentaron las de Alemania en 0,17, España en 0,43 y Francia en 0,18 por ciento. En Asia, la bolsa de Tokio estuvo cerrada, mientras la de Hong Kong retrocedió 3,01 por ciento. En América Latina, un feriado en Argentina fue visto como un “respiro” para la golpeada actividad bursátil de Buenos Aires, mientras en Chile el índice selectivo, registró la caída más pronunciada en la región, con 1,88 por ciento.

También cayeron las bolsas de Sao Paulo, en 1,01, y de México, en 0,03 por ciento, en tanto Lima no registró operaciones.

Fragmentado apoyo latinoamericano

DIEGO CEVALLOS

Corresponsal de IPS en Ciudad de México.

La mayoría de los gobiernos de América Latina dieron un apoyo absoluto a la campaña militar de Estados Unidos y Gran Bretaña contra Afganistán, pero también hubo condenas en Cuba, Venezuela y de algunos sectores de la oposición en distintos países.

El presidente Vicente Fox, de México, cuyo ingreso al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como miembro no permanente fue aprobado, expresó su “apoyo con firmeza”.

También sus pares Fernando de la Rúa, de Argentina, y Alejandro Toledo, de Perú, declararon su “respaldo total”, mientras que el mandatario chileno Ricardo Lagos habló de solidaridad con Washington.

En tanto, el presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, brindó su apoyo a los ataques contra Afganistán, pero aclaró que su país espera que las operaciones “busquen evitar pérdidas inocentes y preservar la población civil”. “En este conflicto no hay terreno neutral”, declaró el gobernante estadounidense George W. Bush, al anunciar el inicio del bombardeo contra el régimen Talibán y bases de la organización del extremista saudita Osama Bin Laden en Afganistán.

El secretario de Estado (canciller) de Estados Unidos, Colin Powell, llamó a la mayoría de los mandatarios de América Latina antes de los ataques y en algunos casos minutos después, para informarles de las operaciones militares.

Mientras, el premio Nobel de la Paz Oscar Arias, presidente de Costa Rica entre 1986 y 1990, manifestó que habría sido preferible que esta crisis internacional “se hubiera resuelto por la vía del diálogo, pero con el movimiento Talibán no fue posible”. “Espero que Estados Unidos busque justicia y no venganza”, con estas acciones militares, indicó Arias, para afirmar que el terrorismo es “un enemigo que tiene la humanidad entera”.

Añadió que las amenazas divulgadas por Bin Laden sobre posibles nuevo atentados contra Estados Unidos “son muy preocupantes”, tras apuntar que el mundo musulmán no piensa de la misma manera. “Creo que lo que nos espera es un mundo más inseguro”, comentó.

Pero en América Latina también hay quienes rechazan los ataques en respuesta a los atentados del 11 de septiembre, cuando aviones comerciales secuestrados chocaron contra el World Trade Center de Nueva York y el Pentágono (Departamento de Defensa), en Washington.

Para Cuba, los ataques dieron forma a una “guerra verdaderamente sui géneris. Un país entero es convertido en campo de prueba de las más modernas armas que se hayan inventado nunca”.

Un editorial del diario Granma, donde el gobierno de Fidel Castro expresa sus posiciones, indicó que ésta es una guerra “de los antiguos colonizadores contra los antiguos colonizados, de los más desarrollados contra los menos desarrollados, de los más ricos contra los más pobres”.

La única solución al conflicto “es el cese de las operaciones militares y la erradicación del terrorismo mediante la cooperación y el apoyo de todos los países”, añadió.

También el gobierno de Venezuela, donde el presidente Hugo Chávez lleva adelante la denominada “revolución bolivariana”, manifestó su rechazo a los ataques al declarar que “a alternativa al terrorismo no puede ni debe ser la guerra”.

“Venezuela confirma su rechazo a la acción terrorista del 11 de septiembre, pero puntualiza que la alternativa a esta irracionalidad no puede ser otra irracionalidad”, puntualizó el ex canciller y actual ministro de Defensa, José Vicente Rangel.

En Brasil, el presidente del izquierdista Partido de los Trabajadores, de oposición, diputado José Dirceu, deploró los bombardeos a Afganistán y dijo que su grupo defiende una salida pacífica y diplomática, a través de la ONU.

Encuestas realizadas en las últimas semanas mostraron que la mayoría de los brasileños está en contra de operaciones militares de Estados Unidos en respuesta a los atentados terroristas del 11 de septiembre.

El presidente de la Sociedad de Beneficencia Musulmana de Sao Paulo, Muhamad Nassib Mourad, calificó de “ataque terrorista” las operaciones de Estados Unidos y Gran Bretaña en Afganistán.

La comunidad musulmana de Sao Paulo condena tanto los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos como los bombardeos contra Afganistán, confirmó.

El líder musulmán brasileño precisó que la población afgana ya sufrió décadas de guerras internas y necesita “sensatez y ayuda humanitaria para combatir su hambre, no de bombardeos”.

También acusó a Washington de tener “dos pesos y dos medidas”, ya que suministra armas a Israel, que, según dijo, tiene “un terrorista” en el gobierno, como es el primer ministro Ariel Sharon.

En Chile, los dos partidos de la oposición derechista, la Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional, respaldaron el discurso de Lagos, que señaló el apoyo de su gobierno a la lucha mundial contra el terrorismo. También en México se multiplicaron las voces de opositores que rechazan el “apoyo total” expresado por el gobierno de Fox a Washington.

Fox aclaró que no desea que se desate “una nueva guerra”, pero que tampoco debe tolerarse al terrorismo. Explicó que “ha recibo seguridades de quienes encabezan la operación, de que ésta no se dirige contra la población civil o contra credo, religión e ideología alguna”, expresó el mandatario.

México logró un puesto para un período de dos años, que se iniciará en enero, en el Consejo de Seguridad de la ONU por 138 votos, superando a República Dominicana, el otro postulante latinoamericano.

En el Consejo de Seguridad, espacio que México no ocupaba desde hace 20 años, el gobierno de Fox enfrenta un reto difícil, pues deberá lidiar con la cercanía de Estados Unidos y las posiciones antiestadounidenses, opinó el columnista del diario Reforma, Miguel Granados.

Grupos de la oposición en México reclaman al gobierno mantener una posición de independencia frente a los reclamos de apoyo de Washington tras los ataques terroristas.

Sus reclamos llegaron a tener tal eco, que en Estados Unidos un sector político habló que México brinda un apoyo tímido y cuestionable en la lucha contra el terrorismo, sentimiento que Fox pretendió borrar con la visita que realizó a Washington y Nueva York.

Poco después de iniciados los bombardeos a Afganistán, unas 100 personas se presentaron frente a la embajada de Estados Unidos en la capital de México para desplegar mantas y emitir consignas contra los ataques.

Las represalias de Estados Unidos contra Afganistán son rechazadas por el 67 por ciento de los mexicanos, indicó una encuesta del diario Reforma con consultas a 614 personas.

En Argentina víctimas de atentados piden evitar venganza

MARCELA VALENTE

Corresponsal de IPS en Buenos Aires.

Familiares de las víctimas de los atentados en Argentina contra la embajada de Israel, en 1992, y contra una asociación judía, en 1994, expresaron su solidaridad con los parientes de los muertos en los ataques en Estados Unidos y pidieron evitar el camino de la venganza.

La condena de los atentados y el pedido de mesura a la hora de la respuesta de Washington fueron expresados en una marcha en reclamo de justicia que Memoria Activa, el grupo de familiares de las víctimas de los ataques en Argentina, realiza cada lunes desde hace siete años frente al palacio de tribunales de Buenos Aires.

Memoria Activa, que expresa posiciones distintas a las del resto de entidades judías argentinas, promueve estas asambleas semanales con el apoyo de legisladores, activistas humanitarios, artistas, escritores y personalidades de distintas áreas.

Nair Amoedo, integrante de la organización Madres de Plaza de Mayo, que reclama justicia y conocer el destino de sus hijos desaparecidos durante la dictadura militar que se instaló en Argentina entre 1976 y 1983.

Con la cabeza cubierta por un pañuelo blanco, un símbolo de los reclamos de justicia para los miles de desaparecidos, Amoedo también llevó en su pecho la foto de su hija y de su yerno tomada el día de la boda, hace 28 años.

El matrimonio fue secuestrado por efectivos de la fuerza aérea en 1976, cuando ella tenía 18 años y dos hijos, uno de 45 días y el otro de dos años.

“Yo los crié y me dicen mamá”, comentó Amoedo, a IPS, poco antes de que por los altavoces del acto se mencionara al grupo de Madres de Plaza de Mayo como “un ejemplo estremecedor de justicia y no de venganza”.

El sonido del shofar, el cuerno con el que era convocado tradicionalmente el pueblo judío a las asambleas y a la oración, precedió a los discursos que estuvieron teñidos por “un nuevo golpe a la humanidad”.

Los manifestantes se refirieron así a los ataques del día 11, cuando comandos terroristas utilizaron tres aviones comerciales para destruir el World Trade Center en Nueva York y parte del Pentágono (Departamento de Defen-

sa) en Washington. Un cuarto aparato no logró su objetivo y se estrelló en un descampado en el estado de Pensylvania.

Tras varios días de trabajo incesante de bomberos y personal de rescate, se suceden en Nueva York las imágenes de familiares de miles de víctimas colocando aquí y allá la foto de sus parientes desaparecidos.

Rostros sonriendo a la cámara cuelgan del pecho de sus deudos, que no se resignan a que se ponga fin a la búsqueda hasta que el cuerpo de su pariente no aparezca.

Reclaman saber qué pasó, con la misma angustia e impotencia que los familiares de las víctimas de la dictadura argentina, de las 29 del atentado de 1992 contra la embajada israelí en Buenos Aires y de las 86 del ataque en 1994 contra la Asociación de Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

“Un escenario distinto y el mismo horror, otro vehículo suicida impactando en un blanco civil, un sinnúmero de muertos, la escena dantesca de edificios cayendo, cuerpos desaparecidos, olor a muerte, gritos de espanto. Otro país, el mismo atentado”, resumió Enrique Churba, familiar de un muerto en la AMIA.

Diana Malamud, miembro de Memoria Activa, comentó a IPS el horror que experimentó por el ataque perpetrado en Estados Unidos. Recordó el sentimiento de venganza que la invadió hace siete años, cuando se enteró que su marido había perecido en el ataque a la AMIA.

La investigación en torno a la destrucción de la AMIA tendrá una instancia clave el día 24, cuando comience el juicio oral contra varios miembros de las fuerzas de seguridad argentina, imputados en los que se denomina la “conexión local”.

“Yo creo que el camino no es la venganza, sino la justicia. La venganza sólo trae más muertes, en cambio la justicia frena la impunidad, que es la base para seguir cometiendo estos crímenes”, apuntó Malamud.

El esposo de Malamud era arquitecto y el día del atentado realizaba refacciones en el edificio de la AMIA, destruido por un vehículo cargado con explosivos.

“Al principio quería venganza, pero después de pasado el primer impacto empecé a pensar en mis valores, en los que tenía mi marido, y en nuestros dos hijos, y me di cuenta que para la sociedad es mejor sentar a los culpables ante la justicia, y no empujar actos de venganza que desatan más violencia”, dijo.

Cerca de Malamud en la marcha callejera se encontraba, Adriana Resel, quien también evocó a su hermana, víctima del atentado contra la mutual.

“Era asistente social y hacia una guardia semanal para atender a jubilados y personas que iban a pedir subsidios. El día del ataque no le tocaba ir, pero tuvo que reemplazar a una compañera”, narró Resel a IPS.

No obstante el horror de aquel acto, Resel tampoco cree en las soluciones revanchistas.

“Nunca buscamos venganza, siempre pedimos justicia, y estos tremendos atentados en Estados Unidos deberían servir para redoblar ese pedido nuestro, para que se empujen estas investigaciones como un todo”, reclamó.

Resel entiende que el camino está lejos del que transitan el gobierno de Estados Unidos y la propia Argentina, que se ofreció a apoyar las acciones antiterroristas que decida Washington.

“No queremos que mueran civiles, queremos a los que cometieron los crímenes, a ninguno más ni a ninguno menos”, aclaró.

Por su parte, Carlos Jusevich, padre de una de las víctimas del ataque a la embajada de Israel, destacó que los atentados en Estados Unidos muestran que “nadie está a salvo”.

También lamentó que tuviera que cometerse una “masacre horrible y tremenda” como esa “para que se tome conciencia de lo que es vivir en una sociedad jaqueada por el terrorismo”.

La hija de Jusevich murió en el atentado contra la legación diplomática israelí junto a otras 28 personas. En más de nueve años de investigaciones encabezadas por la Corte Suprema de Justicia no se ha podido obtener pistas firmes de los responsables.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una organización humanitaria fundada por el padre de una desaparecida durante la dictadura, también expresó su condena por los atentados en Estados Unidos, al tiempo de remarcar su “rechazo absoluto” a cualquier acto de violencia.

“La lucha contra el terrorismo debe consistir en investigar los hechos, en la identificación, juzgamiento y castigo de sus responsables. Las acciones que se emprendan no pueden consistir en represalias generalizadas ni apartarse del estricto respeto de las normas del derecho internacional”, señaló el CELS. Mientras, el acto de Memoria Activa siguió sumando adherentes. Se reunieron distintas personalidades y más familiares que se abrazaron conmovidos por los recuerdos que el ataque sobre Estados Unidos removió en sus memorias. Al final, el orador repitió la frase de cada lunes: “Por los muertos en las masacres de la embajada y de la AMIA pedimos...”, y los presentes claman todos en un grito: ¡Justicia!”.

Fidel Castro exige el cese del terrorismo desde EEUU

DALIA ACOSTA

Corresponsal de IPS en La Habana.

El presidente de Cuba, Fidel Castro, exigió el cese de los actos terroristas organizados desde Estados Unidos contra este país a lo largo de 42 años.

“No es mucho pedir que se haga justicia con los profesionales del terrorismo que desde Estados Unidos no han cesado de aplicar sus métodos contra nuestro pueblo para sembrar el terror y destruir la economía”, afirmó Castro.

El mandatario presidió un homenaje a las 73 víctimas de la explosión en pleno vuelo de un avión de la aerolínea Cubana de Aviación hace 25 años. En el acto se expresó la solidaridad con el pueblo estadounidense por los ataques que dejaron al menos 6.000 muertos.

Cuba se compromete a participar en una lucha mundial contra el terrorismo, asistida por “toda la autoridad moral necesaria y el derecho a reclamar el cese del terrorismo” contra este país, dijo Castro ante un millón de personas en La Habana.

Así mismo, se manifestó convencido de que la relación entre las organizaciones terroristas que actúan contra Cuba en Estados Unidos y las autoridades de ese país “nunca se rompieron”.

La población recuerda como uno de los momentos más tristes de la segunda mitad del siglo XX el sabotaje contra el vuelo de Cubana de Aviación que, procedente de Trinidad y Tobago, explotó al despegar el 6 de octubre de 1976 de una breve escala en Barbados.

Entre los muertos había 57 cubanos, incluido el equipo nacional juvenil de esgrima completo, 11 estudiantes guyaneses y cinco funcionarios culturales coreanos.

Entonces, “no hubo conmoción en el mundo, ni graves crisis políticas, ni reuniones en la ONU, ni inminentes peligros de guerra”, dijo Castro.

A su juicio, pocos comprendieron la magnitud de aquel hecho pues parecía ser uno más en toda una larga lista de ataques contra Cuba, iniciados poco después del 1 de enero de 1959, cuando triunfó de la revolución que él encabeza.

Desde ese año hasta la actualidad, 51 aviones cubanos fueron secuestrados y casi sin excepción desviados a Estados Unidos. Entre 1968 y 1984, se registraron 71 casos de secuestro de aviones estadounidenses que fueron desviados a Cuba.

Sesenta y nueve participantes de secuestros de aviones estadounidenses fueron juzgados en Cuba y cumplieron penas de hasta 20 años de cárcel, pero en Estados Unidos ninguno de los secuestradores de naves cubanos fue castigado, según Castro.

“No se puede concebir mayor falta de elemental reciprocidad, ni mayor estímulo al secuestro de aviones y embarcaciones. Esa política inflexible, sin una sola excepción, se ha mantenido y aún se mantiene a lo largo de más de 42 años”, subrayó Castro.

En contraste, aseguró, desde Cuba “no ha salido nunca un artefacto terrorista, ni siquiera un gramo de explosivos para hacerlo estallar en Estados Unidos”.

“Jamás un norteamericano ha sido muerto o herido, ni una sola instalación grande o pequeña, en ese inmenso y rico territorio, ha sufrido el menor daño material por alguna acción procedente de Cuba”, afirmó.

Uno de los dos organizadores del sabotaje contra el avión de Cubana de Aviación, el venezolano Orlando Bosh, vive libre en la meridional ciudad estadounidense de Miami, bastión de los exiliados anticastristas.

El segundo, el cubano Luis Posada Carriles, escapó de una prisión en Venezuela en 1985 y ahora está detenido en Panamá, tras ser acusado de organizar un atentado contra Castro durante la X Cumbre Iberoamericana que se realizó en ese país el año pasado.

Castro recordó cómo, en 1976, el diario estadounidense *The Washington Post* puso en duda la afirmación del gobierno de Estados Unidos de que ninguna institución de ese país estuvo relacionada con el atentado.

Tanto Posada como Bosh tenían vínculos con la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA) desde 1960, y los dos venezolanos que colocaron la bomba, Hernán Ricardo y Freddy Lugo, habían trabajado para esa agencia.

Castro aseguró que sus denuncias no están inspiradas “en sentimientos de odio o rencor” y que comprende que “los funcionarios norteamericanos no desean ni oír hablar de estos embarazosos temas”.

“Dicen que hay que mirar hacia delante. Sería ciego no volver la vista para ver dónde están los errores que no deben repetirse, cuáles son las causas de grandes tragedias humanas, guerras y otras calamidades que pudieron tal vez evitarse”, añadió.

La Habana acusa a Washington de organizar, financiar o permitir la realización desde territorio estadounidense de agresiones contra Cuba que causaron la muerte de 3.478 cubanos a lo largo de más de 40 años.

La lista de ataques terroristas incluye la colocación y explosión de bombas en embajadas cubanas en el exterior, en oficinas de Cubana de Aviación y una ola de atentados contra la industria turística cubana organizados por Posada Carriles en 1997.

El Departamento de Estado (cancillería) estadounidense volvió a incluir a Cuba en su última lista anual de países patrocinantes del terrorismo internacional, junto con Corea del Norte, Irán, Iraq, Libia, Siria y Sudán.

La Habana “mantuvo vínculos con otros estados que patrocinan el terrorismo y con insurgentes latinoamericanos”, indicó en mayo el Departamento de Estado en su último informe sobre terrorismo.

Fidel Castro adhiere a todos los acuerdos antiterroristas

PATRICIA GROGG

Corresponsal de IPS en La Habana.

El presidente Fidel Castro anunció la adhesión de Cuba a los 12 instrumentos internacionales existentes en materia de terrorismo, tres de los cuales ya ha ratificado.

El mandatario, en carta enviada al secretario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Kofi Annan, también aclaró que es partidario de un convenio general e integral contra el terrorismo, que permita enfrentar ese flagelo sin guerras “inútiles y peligrosas”.

Castro había llamado a devolver a la Asamblea General de la ONU su autoridad y liderazgo para encabezar la lucha antiterrorista, “con apoyo total y unánime de la opinión mundial”.

La Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento) deberá ratificar la adhesión a los nueve “instrumentos que aún están en trámite de aprobación y ratificación”, añadió.

El texto de la misiva indica que la decisión responde a una solicitud en ese sentido realizada por Annan durante los debates sobre terrorismo que se

llevan a cabo en el 55 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

El gobernante cubano calificó de “críticas” las condiciones que vive el mundo, luego de los atentados del 11 de septiembre que destruyeron el World Trade Center de Nueva York y causaron severos daños en el Pentágono (Departamento de Defensa), en Washington.

Cuba proseguirá sus esfuerzos en favor de un convenio general e integral contra el terrorismo, que defina verdaderamente “dicha repudiable práctica” y permita afrontar el problema “de forma eficaz, duradera y urgente”, apuntó Castro.

Opinó que un acuerdo de ese tipo tendría pleno apoyo de la opinión pública mundial y evitaría “innecesarias, inútiles y peligrosas guerras que multipliquen la violencia y el odio entre los pueblos”.

Hasta el momento, este país ratificó el convenio sobre infracciones y otros actos cometidos a bordo de las aeronaves.

También hizo lo propio con las convenciones sobre la represión y el castigo de los delitos contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos, y sobre la protección física de los materiales nucleares.

Los acuerdos restantes se refieren a la represión del secuestro de aeronaves, de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil y de acciones violentas en los aeropuertos que prestan servicio a la aeronavegación civil internacional.

El listado incluye el convenio internacional contra la toma de rehenes, otro para proteger la seguridad de la navegación marítima, y un protocolo para la represión de actos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en las plataformas continentales.

Los tres convenios restantes tienen que ver con la marcación de explosivos plásticos para los fines de detección, otro para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas, y el que se refiere a la financiación del terrorismo.

Medios diplomáticos destacaron que la posición cubana se suma a la de varios países que pretenden situar a la ONU a la cabeza de la campaña contra el terrorismo, pero contraría los deseos de Washington de mantenerse con las manos libres para responder a los ataques de que fuera víctima.

Los 189 países representados en la Asamblea General de la ONU, que incluyen los 15 miembros del Consejo de Seguridad del foro mundial, votaron resoluciones de condena inmediatamente después de los atentados del 11 de septiembre, en los que murieron más de 6.000 personas.

El Consejo de Seguridad de la ONU manifestó su disposición a “dar los pasos necesarios” en respuesta a los ataques terroristas, en su resolución del 12 de septiembre, declaración que, al parecer, Washington consideró una carta blanca para su ofensiva militar.

Por su parte, la Asamblea General del foro mundial apeló en forma urgente a la “cooperación internacional” para impedir y erradicar actos de terrorismo.

Estados Unidos entiende que le asiste el derecho a dar respuesta militar a los atentados, pues el artículo 51 de la Carta de la ONU autoriza a todo estado a defenderse contra un ataque armado.

El representante permanente de Cuba ante la ONU, Bruno Rodríguez, se quejó ante la Asamblea General de la “prudencia” que ha prevalecido respecto del tema del terrorismo en el seno del Consejo de Seguridad.

“En los pocos casos en que ha tratado actos específicos de terrorismo, lo ha hecho por interés directo de alguno de sus miembros permanentes”, dijo.

En contraste, según Rodríguez, ese organismo “ni siquiera” consideró un proyecto presentado por su país sobre la voladura en pleno vuelo del avión de Cubana de Aviación, ocurrida el 6 de octubre de 1976 y que causara la muerte de 73 personas.

Para el gobierno cubano, son “abrumadoras” las pruebas que demuestran la “máxima responsabilidad” de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense en ese dramático caso.

Remesas de emigrantes cubanos amenazadas

DALIA ACOSTA

Corresponsal de IPS en La Habana.

El clima de inseguridad creado por los atentados en Nueva York y Washington amenaza las remesas familiares de dinero que Cuba recibe de los emigrantes en Estados Unidos, tercera fuente de ingresos del país después del turismo y de la industria del azúcar.

Más de 1,2 millones de cubanos, entre emigrantes y sus descendientes, viven en Estados Unidos, muchos de ellos en el sur del estado de Florida, y la

mayoría mantienen relaciones sistemáticas con familiares en su país de origen y les envían dinero.

Las remesas suman entre 800 y 1.000 millones de dólares anuales, que una vez incorporados al circuito del consumo significan para el gobierno un ingreso neto de 600 millones, según cálculos especializados.

Pedro Monreal, del gubernamental Centro de Investigaciones de la Economía Internacional, explicó que en los últimos años, los envíos de dinero desde Estados Unidos han sido una de las principales fuentes de divisas para el país, junto con el turismo y las exportaciones de azúcar.

Cuba intenta recuperarse de la severa crisis económica provocada por la desaparición de la Unión Soviética y del campo socialista europeo, sus principales socios comerciales, que causó la caída de 34,8 por ciento del producto interno bruto entre 1990 y 1993, afectando de manera considerable el nivel de vida de los 11,1 millones de habitantes.

“La tasa de crecimiento promedio anual de las transferencias corrientes entre 1992 y 1996 fue de 242 por ciento, más de 10 veces superior al ritmo de crecimiento del turismo en el mismo periodo”, asegura un estudio de Monreal.

Ahora, la situación puede cambiar, debido a los atentados terroristas del 11 de septiembre contra el World Trade Center de Nueva York y el Pentágono (Departamento de Defensa), en Washington, y a la campaña militar lanzada el 7 de octubre por Estados Unidos y Gran Bretaña contra Afganistán.

El Banco Mundial señaló el día 1 que “las consecuencias de los ataques del 11 de septiembre se sentirán en todas las regiones del mundo, especialmente en los países que dependen del turismo, de las remesas de ciudadanos que viven en el exterior y de la inversión extranjera”.

Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los emigrantes latinoamericanos enviaron el año pasado más de 20.000 millones de dólares a sus países de origen, siendo México y Brasil los mayores receptores.

Las transferencias, con un incremento anual de siete a 10 por ciento, excedieron la asistencia internacional que recibió América Latina y equivalieron a casi un tercio de la inversión extranjera directa llegada a la región.

Las estadísticas del BID detallan que las remesas enviadas desde el exterior en el 2000 representaron 17 por ciento del producto interno bruto en Haití, 14,4 por ciento en Nicaragua, 12,6 por ciento en El Salvador, 11,7 en Jamaica, y 10 por ciento en República Dominicana y en Ecuador.

En tanto, la cantidad de dinero enviada por los emigrantes mexicanos a sus familiares fue 160 por ciento superior a lo recaudado por las exportaciones agrícolas, igual a los ingresos provenientes del turismo y dos tercios del monto obtenido por la exportación petrolera.

El estudio, que no incluye a Cuba, asegura que la mayoría de las transferencias proceden de Estados Unidos, donde viven 14,5 millones de personas nacidas en América Latina y el Caribe, según el censo de población del año pasado.

Economistas consultados por IPS en La Habana coincidieron que en momentos de crisis o de guerra, la lógica indica que los emigrantes toman sus provisiones, suspenden los envíos o mandan mucho menos a sus países de origen.

“Hay rumores bastante generalizados de que la gente está dejando de mandar dinero. Un descenso de las remesas, unido a una caída del turismo, podría ser funesto para la economía cubana”, dijo a IPS un economista que solicitó reserva de su identidad.

Por su parte, el médico Raymundo Gutiérrez, que trabaja en un consultorio comunitario, dijo que “hay mucha preocupación entre sus pacientes, sobre todo, entre los más viejitos que tienen familiares en Miami y dependen de ellos”.

Sin embargo, en las oficinas cubanas de Western Union, la agencia estadounidense que canaliza las transferencias desde ese país, se mantenía la fila habitual de personas para retirar dinero. Un funcionario consultado por IPS declinó responder si se ha reportado algún descenso de remesas.

Sesenta por ciento de las personas consultadas a mediados de los años 90 en La Habana respondieron que tenían familiares en el exterior.

“Ayudar a mi familia”, fue uno de los principales motivos mencionados por las personas que desean emigrar, mientras que quienes permanecen en Cuba esperan que sus parientes cumplan con lo que señalan como deber de familia: enviar ropa, medicinas y dinero.

“No me han dicho que van a dejar de mandarme dinero, pero sí que por el momento hay que esperar a ver qué pasa”, dijo Ornelia Cabrera, de 57 años, que asegura vivir gracias a sus dos hermanos residentes en Miami.

Cabrera, desde su retiro como trabajadora de la industria, tiene una pensión mensual de 140 pesos cubanos (el dólar se cotiza a 22 pesos cubanos), mientras que recibe para ella y sus tres hijas unos 300 dólares por trimestre de sus hermanos en el exterior.

Pero ahora teme que, con el descenso del turismo y la contracción económica en Miami, sus familiares “pierdan el empleo y las cosas empiecen a ir mal”.

Cabrera utiliza la ayuda que recibe del exterior para la compra de determinados alimentos, ropa, implementos de limpieza y otros artículos de primera necesidad que por lo general se pueden adquirir sólo en una cadena de tiendas para la venta en dólares.

La oferta de bienes, en pesos cubanos, es muy limitada, reducida fundamentalmente a alimentos en los mercados agropecuarios, con precios muy altos para una población con un salario medio mensual de aproximadamente 250 pesos. El Estado socialista garantiza la venta a precios subsidiados de una canasta mínima, que apenas cubre las necesidades básicas.

El cardenal católico Jaime Ortega, arzobispo de La Habana, dijo el 8 de septiembre que en Cuba ha surgido un nuevo tipo de emigración, formada por personas que abandonan el país para poder aliviar las carencias de sus familiares con el envío de dinero.

Es “doloroso pensar cómo enfrentarán las necesidades cotidianas de la casa aquellos que no tienen acceso a remesas enviadas por familias desde fuera”, señaló Ortega.

En Cuba no se publican estadísticas oficiales sobre el ingreso de remesas, pero fuentes del gobierno reconocieron a fines de la pasada década que más del 62 por ciento de la población tenía acceso a dólares.

Aseguraron que resulta difícil calcular el monto de esas transacciones y cualquier cambio en su comportamiento, porque la mayoría del flujo se realiza por vías alternativas a las bancarias.

Según Monreal, las remesas son “un factor decisivo en la atenuación del empobrecimiento” de sectores de la población y, al mismo tiempo, contribuyen a “la estratificación del consumo, la segmentación de los mercados y la exclusión social”.

En Ecuador caen remesas de emigrantes tras los atentados

KINTTO LUCAS

Corresponsal de IPS en Quito.

Las remesas enviadas por ecuatorianos residentes en Nueva York a su país cayeron de 2,3 a 1,5 millones de dólares diarios luego de los atentados contra Estados Unidos el día 11, aunque no disminuyó la emigración.

El gerente general del Banco Central del Ecuador (BCE), Leopoldo Báez, dio cuenta del descenso y aseguró que el envío de dinero ya había sufrido una reducción como consecuencia de la desaceleración del crecimiento económico de Estados Unidos. La situación se agravó por el ataque.

Las remesas de dinero enviadas por ecuatorianos en el exterior en el 2000 ascendieron a 1.250 millones de dólares y constituyen la segunda fuente de divisas del país, detrás de las exportaciones de petróleo, según datos oficiales.

El desempleo en Estados Unidos aumentó este año para los trabajadores de distintos estratos, en especial de personal no calificado, “y se produjo un control mayor en la inmigración ilegal”, explicó Báez.

“En este contexto es obvio que las remesas de nuestros compatriotas se redujeran”, dijo.

“Se registró un incremento en el desempleo y una demanda global estancada. A raíz del ataque terrorista esto se ha complicado un poco más, especialmente en las compañías de aviación, seguros, casas de corretaje y empresas vinculadas al turismo”, según el funcionario.

Sin embargo, Baez previó que el envío de remesas mejorará en las próximas semanas, cuando se registre “un auge de reconstrucción de edificios”, lo que podría generar empleo para los latinoamericanos en general y para los ecuatorianos en particular. “Después de los problemas de guerra, la economía tiende a crecer a mayor velocidad. Una vez que se vaya normalizando la situación en Estados Unidos creemos que habrá un repunte de las remesas que probablemente se mantendrá durante algún tiempo debajo de los promedios anteriores”, aseguró.

Por su parte, Juan Carlos Manzanillas, representante de la Asociación de Emigrante Ecuatorianos Rumiñahui de España, sostuvo que lo que no disminuye es la emigración, pues, dijo, la situación económica que vive el país solo ayuda a “expulsar compatriotas”.

Según Manzanillas, el aumento de los obstáculos a la inmigración en Estados Unidos causará una disminución de los ingresos a ese país pero no la salida de ecuatorianos, porque “el desocupado sigue saliendo ya que acá no encuentra trabajo”.

“Aunque los emigrantes se golpeen ahora un poco más porque los obligan a regresar, en realidad esa es la diaria odisea de miles de hermanos y hermanas desde hace años, sin ataque a las torres gemelas” del World Trade Center en Nueva York, dijo.

Según cifras oficiales, 600.000 ecuatorianos viven en Nueva York, 100.000 en Los Angeles, 100.000 en Chicago y 60.000 en Washington.

Según los estudios del BCE, la mayor cantidad de dinero procedente del exterior que ingresa a Ecuador corresponde a remesas enviadas desde Nueva York.

El Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un proyecto piloto para reducir el costo de las remesas enviadas por ecuatorianos en el exterior.

El Fomin donará 200.000 dólares para apoyar la transferencia, distribución y gestión de las remesas enviadas por ecuatorianos residentes en España, con la intención de ampliarlo en el futuro a los que viven en otros países.

Este es el segundo de una serie de proyectos del Fomin destinados a reducir los costos de las remesas por 1.300 millones de dólares enviadas por emigrantes latinoamericanos a sus países de origen, y canalizarlas a inversiones productivas.

El proyecto apunta a promover alianzas entre el Banco Solidario, la Confederación Española de Cajas de Ahorro y las Cajas de Ahorro de Madrid y Murcia, lo cual dará a los inmigrantes ecuatorianos en España acceso a un paquete integral de servicios financieros.

Los emigrantes ecuatorianos en el exterior ya superarían los dos millones de personas, según estadísticas oficiales.

En los primeros ocho meses del 2001 se dirigieron a España 51.217 ecuatorianos y retornaron 25.510. Según este informe, España superó a Estados Unidos como principal destino de los emigrantes ecuatorianos.

Hasta agosto, 64.078 ecuatorianos fueron a Estados Unidos, pero 54.665 regresaron. En total, 356.474 ecuatorianos abandonaron el país entre enero y agosto, pero retornaron 259.693. Por lo tanto, 96.781 permanecieron en el exterior.

Sin embargo, la mayoría de los ecuatorianos que emigran a Estados Unidos lo hace de forma ilegal, con la ayuda de “coyoteros”, traficantes de personas que cobran entre 5.000 y 8.000 dólares para hacerlos llegar a destino.

En los últimos años miles de ecuatorianos han muerto o fueron descubiertos en la travesía, en algún país de América Central o en México, desde donde fueron devueltos a su país.

Crisis internacional amenaza solidez económica

GUSTAVO GONZÁLEZ
Corresponsal de IPS en Santiago de Chile.

La crisis internacional desatada por los ataques del día 11 contra Estados Unidos golpea la economía de Chile, la más sólida de América del Sur, que está amenazada por el alza del petróleo y la persistente caída de los precios del cobre.

El presidente Ricardo Lagos y dos de sus principales funcionarios del área económica salieron al paso de las inquietudes y aseguraron que el país está en condiciones de afrontar una recesión mundial generalizada.

“El mundo está en recesión. Chile, no. Chile está creciendo”, aseguró el mandatario, luego de recordar que éste fue uno de los cinco países del mundo que crecieron en torno al 3,5 por ciento en el primer semestre de este año.

El influyente diario empresarial Estrategia demandó un “plan de emergencia” para la economía chilena, que puede verse enfrentada con “un escenario de total estancamiento e incluso recesivo” en el 2002.

La merma del crecimiento del producto interno bruto (PIB), común a toda América Latina como consecuencia de la desaceleración de la economía de Estados Unidos, se acentuó en los últimos 10 días en Chile.

Los atentados del día 11, en que supuestos fundamentalistas islámicos estrellaron aviones de pasajeros contra las torres gemelas del World Trade Center en Nueva York y en el Pentágono, sede del Departamento de Defensa estadounidense en Washington, repercutieron en dos de los aspectos más delicados de la economía chilena.

En primer término, los ataques dieron un renovado impulso a los precios internacionales del petróleo, producto que Chile debe importar para cubrir más del 95 por ciento de sus necesidades de combustibles fósiles.

Las amenazas de recesión, con el derrumbe de las bolsas en todo el mundo, causaron nuevas caídas en el precio de los principales metales, incluso el cobre, que representa alrededor del 45 por ciento de las exportaciones.

Tras los atentados del 11 de septiembre, la Bolsa de Metales de Londres registró un descenso en el precio del cobre, que se cotizó a 63,6 centavos de dólar la libra, su precio más bajo desde el 17 de junio de 1999.

Esta fue la tercera caída histórica del precio del cobre desde los atentados en Estados Unidos.

El precio promedio del cobre desde el comienzo de este septiembre asciende a 64,81 centavos de dólar la libra. El promedio desde el comienzo de este año es de 74,21 centavos de dólar, muy inferior al promedio de 82,30 centavos de dólar en el 2000.

Se calcula que Chile dejará de percibir este año unos 700 millones de dólares como consecuencia de las últimas caídas del precio del cobre.

Los descensos de la cotización del metal son transitorias y se deben exclusivamente a la crisis financiera causada por los ataques en Estados Unidos, aseguró Juan Villarzú, presidente ejecutivo de la estatal Corporación del Cobre.

“No hay nada que haga pensar que estemos frente a un problema que vaya a afectar en el mediano plazo la situación del cobre”, aseguró Villarzú.

Los impactos en los mercados petrolero y del cobre coincidieron también en la economía chilena con renovados incrementos en la cotización del dólar, que llegó a superar los 700 pesos chilenos.

Tras el nerviosismo del mercado cambiario del viernes 14 de septiembre, el dólar moderó sus cotizaciones días después, coincidiendo con la relativa recuperación de la Bolsa de Comercio de Nueva York.

El Banco Central hizo fuertes ventas de divisas a los bancos comerciales en la primera quincena de septiembre, del orden de 167,5 millones de dólares, para impedir que el precio de la moneda estadounidense superara los 700 pesos.

Como consecuencia de estas operaciones, las reservas internacionales del Banco Central tuvieron en las dos primeras semanas de septiembre una caída de 57,6 millones de dólares.

Los analistas económicos estiman que en la actual coyuntura de crisis internacional será difícil para el instituto emisor seguir interviniendo en el mercado cambiario para defender sus metas antinflacionarias.

El ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, dijo que el PIB chileno crecerá este año 3,5 por ciento, rebajando así estimaciones anteriores de una expansión superior a cuatro por ciento.

Eyzaguirre dijo que “es inminente una desaceleración (de la economía) mundial durante el tercer trimestre”, lo cual repercutirá en Chile a través de la reducción de mercados exportadores y de los flujos de inversión.

No obstante este panorama, el viceministro de Economía, Alvaro Díaz, sostuvo que este país está bien preparado para afrontar los efectos de una eventual guerra en Afganistán, lanzada por Estados Unidos y sus aliados.

“El gobierno ha adoptado una política macroeconómica prudente que asegura los equilibrios”, dijo Díaz.

“Chile es el país latinoamericano mejor preparado para enfrentar una situación de freno a la economía mundial o, incluso, una recesión”, aseguró el viceministro.

Triple frontera de Brasil, Argentina y Paraguay es un barril de pólvora

MARIO OSAVA

Corresponsal de IPS en Río de Janeiro.

La detención en Paraguay de 17 ciudadanos de origen árabe por supuestos vínculos con organizaciones terroristas agravaron los frecuentes conflictos en la frontera que ese país comparte con Argentina y Brasil.

Dieciséis de los detenidos fueron localizados en la localidad paraguaya de Encarnación, en la frontera con Argentina, sin documentación o con papeles falsos, según las autoridades.

El restante detenido es Abdul Bari Mridha, propietario de un comercio y residente hace 14 años en Ciudad del Este, en la triple frontera. Otras dos personas que también figuraban en la lista entregada a las autoridades paraguayas por Interpol habrían huido a la vecina ciudad brasileña de Foz de Iguazú.

Los agentes de la Fuerza de Operaciones de Policía Especializada paraguaya actuaron con el rostro cubierto y armados a guerra, dijeron a IPS testigos de los operativos en Ciudad del Este, que incluyeron numerosos allanamientos a viviendas y comercios.

El procurador general de Justicia de Paraguay, Marcos Alcarraz, asistió en persona a todos los operativos. “La triple frontera puede estar sirviendo de apoyo financiero para el terrorismo”, dijo Alcarraz.

Tras los ataques del día 11 contra Nueva York y Washington, aun antes de las detenciones, informes sobre la presencia de supuestos terroristas y de militares estadounidenses en Paraguay habían hecho de la triple frontera un foco de tensión internacional.

El puente de la Amistad, que une a Brasil y Paraguay sobre el río Paraná, fue bloqueado varias veces en los últimos días, tanto por manifestantes paraguayos que reclaman los empleos ocupados ilegalmente por brasileños en su país, como por brasileños que luchan por mantener sus trabajos en la paraguaya Ciudad del Este.

La zona se convirtió en “un barril de pólvora”, al acumular varios factores negativos, dijo a IPS Luis Carlos Kossar, asesor técnico de la Cámara Municipal de Foz de Iguazú, la fronteriza ciudad brasileña.

Los informes sobre el inicio de acciones directas de Estados Unidos en Paraguay y sobre presiones de Washington a los gobiernos de Argentina y de Brasil para que controlen a la comunidad árabe en la triple frontera golpean el turismo, atraído por las Cataratas de Iguazú.

Según distintas versiones, Washington envió a las autoridades nacionales de los tres países una lista de 22 integrantes de la populosa comunidad árabe de Foz de Iguazú y Ciudad del Este sospechosos de integrar redes terroristas.

Una hombre de origen árabe y otro de Bangladesh fueron detenidos en la mañana del viernes 14 de septiembre en Ciudad del Este por policías paraguayos procedentes de Asunción, que actuaron con el rostro cubierto y portando armas de guerra. El operativo incluyó varios allanamientos a comercios y viviendas.

Argentina, Brasil y Paraguay integran desde 1991, junto con Uruguay, el Mercado Común del Sur (Mercosur).

La principal fuente de ingresos y empleos en la región, el comercio de Ciudad del Este, ya había sufrido una fuerte caída a causa de la depreciación del real en Brasil, de donde procede la mayoría de los compradores, y a la mayor represión del contrabando.

En 1994 cruzaron la triple frontera 3,2 millones de “compristas”, como se denomina a los turistas atraídos por los bajos precios de numerosos productos, especialmente electrónicos e informáticos, ofrecidos en Ciudad del Este. Este año no se esperan más que 700.000.

Los reducidos empleos locales pasaron a ser disputados por brasileños y paraguayos, en un conflicto que se hace cada día más violento.

La economía y la demografía de la región fueron totalmente alteradas por la construcción de la central hidroeléctrica de Itaipú, compartida por Bra-

sil y Paraguay, entre 1975 y 1985. En los últimos 30 años la población de los tres lados de la frontera pasó de unos 60.000 habitantes a 700.000, según Kossar.

Las obras de Itaipú atrajeron multitudes que ayudaron a desarrollar el comercio, que actuó como nueva fuente de empleo, aunque informal. Esa población echó raíces y no está dispuesta a mudarse, observó Kossar, un matemático especializado en gestión pública y en la historia local.

La prosperidad atrajo una nueva ola de inmigrantes árabes, la mayoría libaneses. Pero esa presencia árabe en la región es más antigua, “integrada y diluida” entre los brasileños, dijo a IPS Reda Soueid, comerciante de origen libanés, naturalizado brasileño, que llegó a Foz de Iguazú a los 16 años, hace 23.

Soueid consideró “lamentables” las noticias alarmistas, que “estigmatizan” a los árabes. Se trata de un intento por apartar a la gente de esa origen en Brasil, un país donde los inmigrantes en general, y particularmente los árabes, “no constituyen guetos”, sino que se integran a la población local, señaló.

Hacer que los inmigrantes se sientan “tan brasileños” como los demás distingue el “modelo de civilización” brasileño de otros, especialmente el anglosajón, comentó Soueid, quien destacó que en Foz de Iguazú conviven “52 grupos étnicos”.

Los habitantes árabes de la ciudad sumarían 12.000, según estimaciones informales según las cuales otros 7.000 viven en Ciudad del Este. Pero son puras especulaciones, según el comerciante, quien también es líder de un sector de su comunidad.

No hay cifras confiables porque hay descendientes de árabes que, tras varias generaciones, ya son brasileños, muchos de ellos mestizos, añadió.

Las estimaciones se basan en los inmigrantes que se acogieron a una amnistía concedida por el gobierno brasileño a los ilegales hace tres años, pero ese contingente incluía chinos, coreanos y latinoamericanos que también son numerosos en Foz de Iguazú, argumentó.

La triple frontera constituye, de hecho, un área que favorece una posible presencia de terroristas, según un policía brasileño que pidió reserva de su identidad.

Argentinos, brasileños y paraguayos “pueden circular libremente” en un área de hasta 30 kilómetros desde la frontera común, y en Paraguay hay “muchas facilidades” para la inmigración, para la obtención de documentos, oficiales o falsos, y para la compra de armas, destacó.

En Paraguay vive, por ejemplo, un grupo de árabes que se presentaron como colombianos, con documentos de la ciudad de Barranquilla, “sin hablar casi nada de español”, comentó el policía brasileño.

En Foz de Iguazú viven grupos árabes que “no se integraron” en la sociedad local, pues constituyen una comunidad cerrada que mantiene su lengua y sus costumbres, añadió.

Hay familias que envían a sus hijos a la escuela árabe musulmana en Ciudad del Este, cruzando la frontera todos los días, porque en Brasil no se permite la enseñanza en lengua exclusivamente extranjera, ejemplificó.

Esas condiciones hacen de la triple frontera un motivo de permanente tensión y preocupación, según el policía, quien confirmó la existencia de la lista de sospechosos enviada por Estados Unidos, pero indicando que no hay indicios concretos. El informante también dijo no creer que la región sea centro del terrorismo internacional.

Máscaras de Bin Laden y Bush para animar fiestas mexicanas

DIEGO CEVALLOS

Corresponsal de IPS en Ciudad de México.

Máscaras de látex con el rostro de Osama Bin Laden, acusado de ordenar los atentados contra Nueva York y Washington, y otras del presidente estadounidense George W. Bush son vendidas juntas en México para animar diferentes celebraciones.

“No tratamos de ofender a nadie, pero nuestro trabajo es estar al día y brindar opciones al consumidor”, dijo Ricardo Esponda, director del grupo Caretas Rev y Plásticos y Vinilos.

La empresa espera que las máscaras sean adquiridas para animar fiestas privadas, como la celebración de Halloween (Día de Brujas) el 31 de octubre y el Día de los Muertos, el 2 de noviembre.

En México, tras la apertura política de hace una década, las imágenes de presidentes y políticos que antes se consideraban intocables pasaron a ser parte de representaciones humorísticas en caricaturas, el teatro y en máscaras.

El escritor Germán Dehesa comentó que esa apertura ha permitido que todos tengan la libertad y el derecho de reírse y recrear lo que antes era intocable.

Máscaras del presidente Vicente Fox, el primero que no pertenece al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 71 años, circulan hoy libremente y se las utiliza para distintas celebraciones.

Sin embargo, apenas tres años atrás la policía ordenó incautar todas las máscaras que circulaban del entonces presidente Ernesto Zedillo (1994-2000), con el argumento de que violaban “los derechos de autor”.

La firma Caretas Rev y Plásticos y Vinilos tiene entre sus clientes a consumidores de Estados Unidos, pero Esponda indicó que las máscaras de Bin Laden y de Bush no se venderán por ahora en ese mercado, aunque en el futuro no se descarta.

Bin Laden es señalado por el gobierno de Bush como el principal sospechoso de ser el autor intelectual de los atentados del día 11 que destruyeron el World Trade Center, de Nueva York, y una parte del edificio del Pentágono (Departamento de Defensa) en Washington, dejando como saldo más de 7.000 personas muertas.

Esponda justificó la creación de máscaras con el rostro de Bin Laden y de Bush señalando que se debe trabajar con personajes conocidos por el público y que pueden causar hilaridad.

Para animar la venta de las últimas creaciones de la firma, en algunos comercios de la capital se le colocaron máscaras de Bin Laden y de Bush a personas que representaban enfrentarse en una pelea de boxeo, cuyo juez era un tercer actor con el rostro de Fox.

La presencia de máscaras en celebraciones mexicanas es una herencia de la época precolombina, cuando los indígenas las usaban para ritos sagrados, pero también para divertirse, indicó el historiador Carlos Sánchez.

Uno de las personalidades locales más representadas en máscaras en los últimos años fue el ex presidente Carlos Salinas (1988- 1994), quien se autodenominó “el villano favorito de México” debido a las críticas y decepción que provocó su gestión.

A pesar del paso de los años, aún se observan en algunas calles de la capital a pequeños niños que, con una máscara de látex de Salinas y disfraz de preso, hacen malabares a cambio de una moneda.

El ex mandatario, uno de los políticos más odiado por los mexicanos luego de la crisis económica que estalló a fines de 1994, se transformó en una de las figuras centrales de los comediantes locales.

Roberto, un adolescente de 16 años que junto a sus hermanos de ocho y 11 años se coloca de lunes a viernes al lado de un semáforo de un cruce de automóviles en la capital para representar a Salinas, dijo que le agradaría usar la máscara de Bin Laden.

“A ese señor ya lo conocen todos, hasta nosotros. Creo que podríamos sacarle una buena lana (dinero)”, expresó el menor.

Emigrantes de México en la guerra y el gobierno en la diplomacia

DIEGO CEVALLOS

Corresponsal de IPS en Ciudad de México.

Numerosos emigrantes mexicanos integran las fuerzas estadounidenses que atacan Afganistán, mientras que su país de origen asume una posición clave en el frente diplomático.

Los soldados de origen latinoamericano son siete por ciento del total de miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y el grupo más numeroso es el de los mexicanos.

Además, otros muchos mexicanos y descendientes de mexicanos residentes en Estados Unidos se presentaron ante oficinas de enrolamiento militar tras los ataques del 11 de septiembre contra Nueva York y Washington, informaron los consulados de México.

Muchos procuran alistarse por convicción, pero otros son inmigrantes indocumentados que pretenden lograr así residencia y empleo, según organizaciones de la comunidad mexicana en Estados Unidos.

Veinte millones de mexicanos de ascendencia o nacimiento viven en Estados Unidos, cuatro millones de ellos indocumentados.

“Históricamente, los méxicoestadounidenses hemos ingresado en el ejército para demostrar nuestro patriotismo. Es una manera de ser aceptados en un país que no ha querido aceptarnos”, dijo Jorge Mariscal, experto en asuntos migratorios de la Universidad de California.

Pero también hay otro frente en que México comenzará a participar: el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), órgano que en enero volverá a integrar después de 20 años.

El objetivo de la diplomacia mexicana en el Consejo de Seguridad será lograr una participación activa en sus decisiones y procurar su democratización, explicó el canciller Jorge Castañeda.

El Consejo aprobó el ingreso de México como miembro rotativo, en una votación secreta en que se impuso a República Dominicana, el otro aspirante de América Latina.

Cuando se concrete el ingreso de México al órgano, la agenda internacional seguirá marcada por el problema del terrorismo y este país tendrá un activo papel en ese terreno, declaró Castañeda.

El gobierno de Vicente Fox prevé que México podría votar en ocasiones contra la posición de Estados Unidos en el Consejo. Sin embargo, los expertos consideran poco probable que eso suceda.

“Vivimos ahora junto a un tigre herido, junto a un Estados Unidos que será mucho más sensible a una reacción de México en su contra”, opinó Rafael Fernández, director del Departamento de Relaciones Internacionales del Instituto Tecnológico Autónomo de México.

Para Ana María Salazar, ex subsecretaria de Defensa de Estados Unidos, será “muy difícil para México” votar contra posiciones de Washington en el Consejo. “Lo puede hacer, pero tiene un costo muy alto”, explicó.

El ingreso al Consejo de Seguridad puso a México en una posición difícil, pues deberá equilibrar las presiones políticas internas, en especial las de una fuerte corriente de opinión contraria a Estados Unidos, y las externas, que obligan a apoyar a Washington. Estados Unidos el principal socio comercial y económico de México.

Un documento clasificado como secreto por la Secretaría (ministerio) de Marina mexicana, indica que dada la proximidad y sociedad con Estados Unidos, existen posibilidades fundadas de que este país pueda ser objetivo de ataques terroristas.

El gobierno de Fox dispuso tras los ataques contra Nueva York y Washington un incremento de las medidas de seguridad en fronteras, aeropuertos, edificios públicos e instalaciones petroleras y eléctricas.

Además, se creó en la Procuraduría General una fiscalía especializada en “la investigación de actos terroristas, tráfico de personas y armas”, y abrió una línea de colaboración directa con la policía federal de Estados Unidos.

Atentados hieren relación bilateral entre Estados Unidos y México

DIEGO CEVALLOS

Corresponsal de IPS en Ciudad de México.

Los atentados terroristas del día 11 en Nueva York y Washington hirieron la relación entre México y Estados Unidos y pusieron en aprietos la economía mexicana.

Existe “resentimiento” en algunos congresistas, personas y medios de comunicación estadounidenses hacia México por su presunto regateo al momento de apoyarlo tras el ataque, dijo el canciller mexicano Jorge Castañeda.

Sin embargo, Castañeda no cree que el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, tenga ese sentimiento.

El gobierno de Vicente Fox y el parlamento debatieron en los últimos días la postura a asumir frente a la respuesta militar contra el terrorismo resuelta por Washington. En la discusión se escucharon voces de respaldo, pero también de rechazo.

No obstante, la diplomacia de México expresó en los foros internacionales un apoyo tácito a esas acciones.

Castañeda advirtió que el margen de maniobra del país es limitado frente a Estados Unidos, y lo que se haga hoy marcará la relación futura con ese país, que será “cercana y estratégica o distante y menos estratégica”.

Estados Unidos es vecino de México y es su principal inversionista y socio comercial, el mayor acreedor y el más importante proveedor de turistas. Además, en territorio estadounidense viven 20 millones de mexicanos de nacimiento o ascendencia.

La relación de México con su vecino del norte es tan importante, que el agravamiento de la economía de Estados Unidos derrumbó los planes mexicanos de crecimiento. Ahora se cree que la economía local sufrirá una contracción, en vez del ligero repunte previsto originalmente.

El crecimiento de México, que en el 2000 fue de seis por ciento, este año puede ser negativo, pronosticó el grupo financiero Bancomer. Fox había prometido durante la campaña que lo llevó a la presidencia en diciembre que la economía aumentaría a razón de siete por ciento al año.

El gobierno anunció que prepara un plan de emergencia, del que no brindó mayores detalles, para afrontar los problemas económicos, a los cuales se sumaron la caída del turismo y de las remesas de los emigrantes que residen en Estados Unidos.

En el debate procesado en México se apreciaron posturas que van desde el apoyo diplomático incondicional a Washington o mantener distancias, hasta propuestas de censura a Estados Unidos por el uso de las armas en forma indiscriminada.

“Es una de las únicas veces que un asunto internacional se discute en México como un asunto doméstico, pero eso es bueno”, apuntó Castañeda.

Fox, quien estuvo en Washington a comienzos de septiembre, en un ambiente de calidez y acercamiento con el gobierno de Bush, no repitió la visita tras los atentados, como lo hicieron otros aliados de Estados Unidos.

Además, el plan de formular un acuerdo bilateral sobre emigración quedó congelado.

“Encuentro la reacción (de México) incomprensible e irracional, pues ha dicho que quiere nuestra ayuda”, pero ahora “se muestra reacio a brindar su apoyo a Estados Unidos cuando éste tiene problemas”, dijo Sidney Weintraub, del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales, de Washington.

“El liderazgo en el apoyo contra el terrorismo lo tiene que tomar el presidente de México”, afirmó Weintraub.

En 1995, cuando la economía de México sufría su peor crisis en 50 años, el gobierno estadounidense le gestionó una serie de créditos de emergencia.

México “no debería” apoyar un ataque militar de Estados Unidos pues “somos socios, pero de ninguna manera sus achichincles (súbditos)”, declaró el escritor Carlos Fuentes.

La relación en materia de política internacional entre ambos países ha tenido roces, pero antes de los atentados parecía más cercana que nunca.

A Estados Unidos no le gusta la cercanía de México con Cuba, y en el pasado vio con recelo que su vecino aceptara refugiados políticos de izquierda o que hubiera reconocido como fuerzas beligerantes a las guerrillas de América Central.

El gobierno, el poder legislativo, los empresarios y los partidos políticos de México deben definir en conjunto qué relación desean tener en el futuro con Estados Unidos, y eso exige una postura clara frente a la actual coyuntura, expresó Castañeda.

Crece cerco en torno de emigración a Estados Unidos

DIEGO CEVALLOS

Corresponsal de IPS en Ciudad de México.

El gobierno de México redobló sus controles en la frontera sur para impedir el ingreso de emigrantes indocumentados que se encaminan a Estados Unidos, y puso especial atención en investigar a los viajeros de origen árabe.

Los controles migratorios aumentaron tras los atentados del día 11 en Estados Unidos, indicaron organizaciones no gubernamentales de atención a inmigrantes.

Sin embargo, los activistas reconocieron que el aumento de la presencia policial y militar en la meridional zona fronteriza mexicana se notó desde antes de los ataques terroristas que destruyeron el World Trade Center, en Nueva York, y un sector del Pentágono (Departamento de Defensa), en Washington.

“Los lamentables atentados terroristas conllevaron a que se intensifique la vigilancia”, y muchos emigrante ahora esperan que merme el patrullaje para poder ingresar a México, dijo Rafael Franco, administrador de un grupo humanitario que brinda techo temporal a personas que llegan hasta el norte de Guatemala.

México, paso tradicional de emigrantes indocumentados de América del Sur, de América Central y en menor proporción de Asia y de Medio Oriente que desean llegar hasta Estados Unidos, tiene 1.149 kilómetros de frontera con Guatemala y con Belice, en la que hay múltiples lugares de escasa vigilancia.

En diferentes puntos del país, entre ellos la frontera sur, las autoridades migratorias mexicanas detuvieron a 100 ciudadanos de origen árabe, por no contar con su documentación en regla.

El secretario (ministro) de Gobernación (Interior), Santiago Creel, indicó que ninguno de los detenidos tiene relación con los atentados registrados en Nueva York y Washington. Sólo fueron aprehendidos por asuntos migratorios, explicó.

Estados Unidos pidió a México rastrear a 13 ciudadanos árabes que podrían tener alguna relación con los ataques terroristas.

El incremento de la presencia militar y policial en el sur de México se registra para controlar el paso de extranjeros indocumentados y reforzar la lucha contra el tráfico de drogas y de armas, dijo el consejero de seguridad nacional, Adolfo Aguilar.

Hasta ahora no se conoce con exactitud cuántos militares habrían llegado al sur del país en los últimos meses, pero algunas fuentes extraoficiales hablan de más de 10.000.

El aumento de controles en el sur se dio en forma paralela a las propuestas que presentó el presidente Vicente Fox a su par estadounidense George W. Bush para regularizar la estada de casi cuatro millones de indocumentados mexicanos que viven en Estados Unidos y establecer un acuerdo global sobre la materia.

“La política mexicana está orientada a proteger los derechos de los emigrantes de cualquier nacionalidad, con el fin de adquirir mayor autoridad moral en la defensa de los connacionales en Estados Unidos”, señaló Juan Hernández, jefe de la oficina de la Presidencia para la protección de los emigrantes.

Tras los atentados, el tema de la emigración, que había conquistado al primer lugar en la agenda bilateral, bajó de perfil y, según observadores, quedará relegado a segundo plano por un tiempo prolongado.

Organizaciones humanitarias locales denuncian que, mientras México pide mejor trato para sus emigrantes y acuerdos sobre la materia con Washington, en su territorio se violan los derechos humanos de los extranjeros que pretenden llegar a Estados Unidos.

La organización no gubernamental Sin Fronteras aseveró que en el sur de México reina la anarquía y la corrupción.

El gobierno de México deportó en el 2000 a 150.000 personas que ingresaron por su frontera con Guatemala y Belice, y en lo que va de este año la cifra de expulsados ya supera las 100.000.

La frontera sur es una zona de alta criminalidad, donde se “registra la mayor cantidad de tráfico de drogas, contrabando en todas sus expresiones y prostitución, lo cual significa un problema de seguridad nacional”, apuntó el jefe del estatal Instituto Nacional de Migración, Felipe de Jesús Preciado.

Los emigrantes indocumentados, para cruzar América Central y México sin ser descubiertos por policías o militares, caminan decenas de kilómetros y viajan ocultos en camiones y trenes.

La aventura de una persona indocumentada que aspira llegar a Estados Unidos puede durar hasta tres meses. Los traficantes de personas cobran por

el viaje entre 300 y 10.000 dólares, una amplia fluctuación que depende del origen del emigrante indocumentado.

En su lucha contra los traficantes de personas, conocidos en México como “polleros”, las autoridades policiales detuvieron a 1.500 de ellos en los últimos 18 meses.

Pero ahora, con tanto control y patrullaje en la frontera sur, la cotización de los “polleros” creció de manera proporcional a los riesgos que enfrentan los emigrantes, dijo Franco, administrador del grupo humanitario que brinda apoyo a extranjeros que arriban al norte de Guatemala.

Atentados encienden la luz roja en el turismo

DIEGO CEVALLOS

Corresponsal de IPS en Ciudad de México.

El dinámico turismo de América Latina sufrió el severo golpe de los atentados en Estados Unidos, y ya se habla de crisis en Argentina, Cuba, Costa Rica y México. Pero en Brasil no se registran dificultades y, por el contrario, se prevén beneficios, como un aumento de entre un 20 y 30 por ciento en el turismo interno.

Algunos operadores y gobiernos diseñan planes para hacer frente al temor originado por los atentados entre los consumidores estadounidenses, a la desaceleración del crecimiento económico mundial y a la crisis de las líneas aéreas.

Aún es difícil medir las consecuencias de los atentados en el turismo, señaló la intergubernamental Organización Mundial de Turismo (OMT), que nuclea 139 países.

“Los resultados del 2001 serán afectados, sin duda, por estos acontecimientos, aunque debe recordarse que en el hemisferio norte los meses de mayor flujo de turismo ya pasaron”, sostuvo la OMT en su informe “El impacto de los ataques contra Estados Unidos en el turismo internacional: un análisis inicial”.

De todos modos, “no se prevé una grave caída de la demanda de viajes”, agregó.

“Uno de los escenarios posibles es la redistribución de la demanda total, con el foco en el turismo regional o doméstico, sin grandes cambios en las motivaciones para los viajes y posibles cambios en el gasto total y el tiempo promedio de estancia” en países extranjeros, según la OMT.

Pero Cuba, donde la visita de 1,5 millones de extranjeros al año representa la primera fuente de ingresos en divisas, ya sintió el golpe. Los operadores se quejan de caídas dramáticas en la ocupación hotelera.

Mientras, en Costa Rica, con más de un millón de visitantes anuales, se calcularon pérdidas de 300 millones sobre un ingreso anual de 1.200 millones de dólares.

Las asociaciones de empresas turísticas de México y Argentina ya se declararon en estado de emergencia.

Hoteles y playas vacías, cancelación de viajes y despido de empleados son parte del panorama luego de los atentados que el 11 de septiembre derribaron las torres gemelas del World Trade Center de Nueva York y causaron grandes daños en el Pentágono, sede del Departamento de Defensa estadounidense en Washington.

Los estadounidenses representan el 13 por ciento de los turistas internacionales en todo el mundo.

En el caso de México, principal receptor latinoamericano de turistas extranjeros, más del 70 por ciento de los 19 millones de visitantes son estadounidenses. El gobierno de Vicente Fox creó la Comisión Nacional para la Seguridad Turística con el objeto de proteger a los visitantes.

Además, anunció inversiones en infraestructura y promoción por 35 millones de dólares para el último trimestre del año, 35 por ciento más que en igual periodo del 2000, cuando el turismo generó ingresos por 66.000 millones de dólares, 8.300 de los cuales fueron divisas gastadas por extranjeros.

Mientras, el gobierno de Venezuela prepara una campaña para atraer turistas de Estados Unidos y de Canadá, y anunció cuatro millones de dólares de gastos en promoción, que incluirán invitaciones a periodistas estadounidenses.

Los efectos de los atentados contra Estados Unidos en el turismo de Perú fueron inmediatos. La cantidad de visitantes a Lima y Cuzco se redujo un 50 por ciento, según un informe preliminar de los operadores.

Las empresas peruanas del sector calcularon que la afluencia de turistas se reducirá en un 25 por ciento este año. Según la OMT, Perú recibe unos 900.000 visitantes anuales, la mayoría procedentes de Estados Unidos.

Luego de los atentados, se registraron numerosas postergaciones de viajes, la mayoría de las cuales se convirtieron después en cancelaciones, dijo Lita Rebassa, ejecutiva de la agencia Solmartour.

Fuentes del Ministerio de Industria y Comercio anunciaron que la tarifa de los servicios turísticos en Cuzco se reducirán 40 por ciento por iniciativa de los propios empresarios, como parte de una campaña para atraer visitantes de otros países, en especial de Argentina y Chile.

Alrededor de 1,1 millones de personas de todo el mundo dejarán de viajar atemorizadas por los atentados de septiembre, 350.000 de las cuales se habrían dirigido a América Latina, dijo Enzo Furnari, presidente de la Confederación de Organizaciones Turísticas de la región.

Pero América Latina puede tener un papel estratégico en el nuevo escenario, siempre que logre mantenerse alejada de la zona del conflicto, dijo Hernán Lombardi, conductor de la Comisión de las Américas en la OMT.

Unos 699 millones de turistas viajaron por el mundo en el 2000, según la OMT, 50 millones más que en 1999. El avión es el vehículo elegido por el 43 por ciento. Se registró un aumento del 10 por ciento en los pasajes internacionales aéreos entre 1999 y el 2000.

Los principales destinos son Europa, con el 59 por ciento del total, y América, con el 19 por ciento, de acuerdo con la OMT. El turismo a Guatemala, Cuba y República Dominicana comenzó a crecer en los últimos años, según la organización.

Pero tras los atentados, la situación podría cambiar, al menos por un tiempo, previeron los observadores.

En Cuba, por ejemplo, el gobierno esperaba para este año un ingreso de 2.000 millones de dólares por el turismo, cifra que ahora ya no se podrá alcanzar.

Sin embargo, otros sacarán una tajada, como Brasil, que cada año recibe 5,3 millones de turistas extranjeros. En ese país se prevé un crecimiento espectacular de los cruceros por la costa, pues la mayoría de los programados en aguas de Estados Unidos y el mar Caribe se suspendieron.

El real, la moneda brasileña, sufre una gran depreciación desde enero de 1999, lo cual abarata los gastos de los visitantes extranjeros. Los estadounidenses que viajaron a Brasil fueron 648.026 el año pasado, poco más de 12 por ciento del total de turistas extranjeros.

Bioterrorismo enciende alarmas en América Latina

DIEGO CEVALLOS

Corresponsal de IPS en Ciudad de México.

La paranoia bioterrorista se apoderó de América Latina, donde la mayoría de gobiernos adoptó medidas de precaución, pese a que varios sucesos relacionados con el ántrax no pasaron de ser bromas de mal gusto.

La mayoría de gobiernos, excepto Cuba, reconoce que la posibilidad de sufrir un ataque biológico o químico es remota, pero toma en serio la amenaza. Sin embargo, ninguno está realmente preparado para enfrentar esa contingencia, según datos estadísticos y expertos.

Argentina, Brasil, Chile, México y Venezuela pusieron en marcha medidas especiales y encendieron alarmas ante la detección de cartas y paquetes que se sospechó podrían contener ántrax, una bacteria potencialmente letal, al ser ingerida o inhalada.

En Argentina, un extraño polvo blanco se detectó en sobres de la papelería usada en las elecciones legislativas del domingo 14 de octubre.

En Brasil, un avión con destino a Alemania fue detenido, pues se encontró polvo blanco en su interior y en la embajada de Estados Unidos en ese país se reportó la recepción de un sobre sospechoso.

Los trabajadores de un observatorio astronómico en Chile que tiene sociedad con instituciones científicas de Estados Unidos recibieron una carta también con polvo blanco bajo la leyenda: "Jihad" (guerra santa). Los análisis demostraron que era una broma.

Donde más sobres sospechosos se reportaron fue en México. Allí, las autoridades recogieron más de 700 cartas para su análisis, y hasta ahora no se ha encontrado ántrax u otro agente peligroso.

Las falsas alarmas no disiparon, sin embargo, los temores y los países tomaron el tema en serio.

El ministerio de Salud argentino exhortó a la población que al abrir sobres sospechosos use guantes y mascarillas y que los mantenga en posición vertical.

En Brasil, el ministerio de Salud, autoridades fiscales, policiales y las administraciones de los aeropuertos dispusieron controles extraordinarios para

hacer frente a lo que llamaron “terrorismo bacteriológico” e indicaron que tienen fármacos para tratar a 7 mil 500 personas con ántrax.

En Chile, donde se registraron 10 casos de ántrax cutáneo entre 1998 y el 2000, el gobierno activó una “red contra el bioterrorismo” que coordina servicios de salud públicos y privados y la dotó de un “arsenal farmacológico” para atender los casos que se presenten.

Entretanto en México, el debate sobre el tema ha sido amplio y el gobierno creó una comisión especial para investigar y prevenir posibles ataques. Además, las autoridades de salud otorgaron a 113 hospitales el encargo de ser “centinelas” para detectar casos de ántrax.

Venezuela no se quedó atrás. La Dirección de Epidemiología distribuyó entre médicos y científicos información sobre ántrax y otras infecciones bacterianas que podrían ser consecuencia de ataques terroristas.

Cuba denunció por su parte que los ataques con bacterias y agentes químicos son parte de una estrategia que ha usado históricamente el gobierno de Washington para intentar derrocar a su régimen socialista.

El gobierno de ese país sostiene que las presuntas agresiones le causaron en los últimos años epidemias de dengue hemorrágico, conjuntivitis hemorrágica y un brote de shigella.

También culpa a Estados Unidos de la introducción de plagas como la roya de la caña de azúcar, el moho azul del tabaco, el minador de los cítricos, la broca del café y la fiebre porcina africana.

Los gobiernos deben prepararse ante la posibilidad de un ataque químico o bacteriológico, que podría concentrarse en agentes como ántrax, viruela, botulismo y peste, advirtió hace poco la Organización Mundial de la Salud.

Tras reforzar su sistema mundial de alerta ante brotes epidémicos, el organismo precisó que la mejor arma contra un ataque es tener un adecuado sistema de salud pública, materia en la que América Latina no exhibe las mejores notas.

En Estados Unidos, principal blanco de las agresiones con agentes químicos o bacteriológicos y donde las autoridades reconocen no estar completamente preparadas para enfrentar el problema, la totalidad de la población tiene acceso a servicios de saneamiento adecuados.

En América Latina esa cobertura es de sólo 77,6 por ciento, según indica el último informe sobre desarrollo humanos del Programa de las Naciones para el Desarrollo.

En cuanto al acceso de la población a medicamentos esenciales, el promedio en la región es del 69 por ciento frente al 99 por ciento de Estados Unidos.

En materia de médicos, por cada 100 mil habitantes de la región hay un promedio de 137, mientras en el país del norte la cifra es de 279.

Las diferencias son aún más grandes en el rubro del gasto per cápita en salud: en América Latina el monto promedio es de 349 dólares, menos de la décima parte de los 4 mil 180 dólares de Estados Unidos. “Definitivamente no estamos preparados para enfrentar el bioterrorismo. Tenemos que admitir que no hay ni esquemas nacionales, ni ensayos ni previsiones”, dijo a *Tierramérica* Laura Chinchilla, ex ministra de Seguridad de Costa Rica y experta en el tema, al referirse a la región de América Central.

“Si Estados Unidos ha reconocido que no estaba completamente preparado, mucho menos una región como América Central”, declaró Chinchilla.

En Argentina, el gobierno redujo a cero el presupuesto del Instituto Malbran, encargado de guardar cepas de ántrax y hacer estudios sobre esa bacteria y otras, tras lo cual quedó sin posibilidades de desarrollar su trabajo. La crisis de esa institución es tal que denunció no estar en condiciones de contribuir a la cura de 13 mil infectados con tuberculosis. “Ningún país está preparado para resistir una guerra químico-bacteriológica”, aseguró Gustavo Ramírez, médico del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Chile y Venezuela recibieron pedidos de Estados Unidos para ayudarlo a enfrentar el bioterrorismo. El primero con la entrega de máscaras especiales y el segundo con vacunas contra la viruela.

No hay que aterrorizarse, los países de América Latina no están en la ruta del terrorismo, coinciden en señalar los gobiernos de la región.

Ananías Escalante, del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, dijo que son remotas las posibilidades de una agresión biológica contra su país, pero advirtió que debe prepararse para que no haya una repuesta tardía como sucedió en el pasado con epidemias de dengue, cólera y encefalitis equina.

La población debe estar tranquila, pero atenta, declaró por su parte Jeanette Vega, directora del Instituto de Salud Pública de Chile.

Para el ministro de salud de Brasil, José Serra, no hay ninguna razón para que exista un clima de terror.

No obstante esas declaraciones, la zona vive en la paranoia y los casos de cartas que traen extraños polvos se siguen multiplicando.

INTER PRESS SERVICE (IPS)

Es la principal fuente mundial de información sobre los temas de seguridad humana, cuenta con el respaldo de una red de periodistas en más de cien países y enlaces con miles de medios de comunicación en todo el planeta. Fundada en Roma en 1964, como un puente entre los países del Norte y el Sur, IPS se expandió rápidamente, primero en América Latina, y luego en Norteamérica, el Caribe, África, Europa y Medio Oriente.

Es una organización no gubernamental estructurada como Asociación Internacional de Periodistas sin fines de lucro. En las Naciones Unidas tiene status consultivo Categoría 1 como ONG.

IPS brinda con independencia noticias internacionales y un servicio especializado de análisis de los procesos globales y sus consecuencias en el desarrollo de los países del Sur. Su red de noticias en la actualidad cubre alrededor de 100 países.

El servicio de IPS es distribuido diariamente en numerosos idiomas entre los que se destacan: alemán, inglés, kiwahili, noruego, español, sueco, finlandés, holandés y portugués. Ofrece además semanal o mensualmente boletines sobre inversión, ambiente, energía, población, integración, mujer, cultura, derechos humanos y ciudades. También elabora el suplemento *Tierramérica*, especializado en medio ambiente, que se distribuye en más de quince periódicos de América Latina.

IPS tiene una destacada especialización en noticias contextualizadas y focalizadas en procesos, más que en eventos específicos, identificando las tendencias para que estos hechos sean comprensibles a los lectores. IPS realiza a su vez una cobertura diaria desde el Sur, siguiendo los procesos en desarrollo y concentrando su atención en los actores no tradicionales.

Es también el primer servicio en publicar diariamente información sobre las Organizaciones no Gubernamentales (ONG), en especial, en las conferencias más importantes de las Naciones Unidas, a través del suplemento "Terraviva" publicado en las cumbres mundiales de Río de Janeiro, Viena, El Cairo, Copenhague y Beijing. De acuerdo con recientes estudios de la Association for Progressive Communication (APC), IPS cuenta con el principal resumen global de noticias para activistas de ONG en todo el mundo.

Para suscribirse al servicio de IPS envíe un e-mail a latam@ipsenespanol.org